

MINORÍAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
CÓDIGO DEONTOLÓGICO

MINORÍAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN CÓDIGO DEONTOLÓGICO

Fernando M. MARIÑO MENÉNDEZ
y
Carlos R. FERNÁNDEZ LIESA (Ed.)

INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y EUROPEOS

«FRANCISCO DE VITORIA»

MADRID, 2001

ISBN: 84-89315-22-1

Depósito legal: M-53429/2001

IMPRENTA NACIONAL DEL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
MADRID, 2001

ÍNDICE

	<div style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></div> Página
PRÓLOGO, por Fernando M. Mariño Menéndez, Catedrático de Derecho Internacional Público y Director del Instituto Universitario de Estudios Internacionales y Europeos «Francisco de Vitoria»	7
CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE TRATO A LAS MINORÍAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	13
LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA Y EL TRATAMIENTO A LAS MINORÍAS EN LOS MEDIOS, por Antonio Petit Caro, Director de <i>Vasco Press</i>	17
CÓDIGOS DE CONDUCTA Y TRATO A LAS MINORÍAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CATALUÑA, por José A. Sorolla, Subdirector de <i>El Periódico</i> de Barcelona	33
TRATAMIENTO DE LAS MINORÍAS EN LOS INFORMATIVOS DE TV, por Vicente Romero, periodista de <i>TVE</i>	63
LAS MINORÍAS Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: RÉGIMEN JURÍDICO Y PROPUESTAS PARA LA ELABORACIÓN DE UN CÓDIGO DEONTOLÓGICO, por Carlos R. Fernández Liesa, Profesor titular de Derecho Internacional Público	79

PRÓLOGO

La misma supervivencia de las sociedades democráticas, actualmente sometidas como todos los países de la Tierra al proceso de «mundialización», está ligada estrechamente a la promoción y defensa activas, en su interior y, desde su interior, en todo el Mundo, de los valores fundamentales de convivencia que ellas mismas han proclamado como universales: libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia, respeto por la Naturaleza y responsabilidad mundial compartida. Todos esos valores se asientan finalmente en una columna central: la dignidad de la persona.

La protección de esa dignidad por los poderes públicos exige lógicamente la adopción de reglas de conducta que vayan acompañadas de garantías reales de su cumplimiento. Muchas reglas y garantías han sido progresivamente formuladas por instrumentos jurídicos internacionales y por diferentes Constituciones estatales en términos bien conocidos de una protección efectiva de los *derechos humanos de todas las personas*.

Pero la protección de *las minorías y de las personas que las integran* plantean problemas internos e internacionales muy especiales. No solamente porque su misma existencia y sobre todo la autoafirmación de su particular identidad y sus consecuentes reivindicaciones, en particular las de ciertas minorías «nacionales», pueden plantear desafíos serios a intereses que muchos Estados consideran «vitales», sino porque la propia noción de «minoría» adolece de una cierta indefinición jurídica dentro del conjunto de los «grupos dife-

renciados» que existen en el interior de los Estados soberanos y a los que, con mayor especificidad, también pertenecen los «pueblos indígenas».

Como quiera que sea la cuestión de la protección de los derechos de las minorías, que en la práctica vienen concebidos sobre todo como derechos de las personas que integran las minorías (aunque sea como derechos «ejercitables en común con los demás miembros del grupo»), forma hoy parte de las preocupaciones jurídicas de la Comunidad Internacional y desde luego de la de los Estados democráticos europeos.

Como «grupo diferenciado» una minoría se caracteriza por tres rasgos fundamentales: i) El número de sus integrantes es menor que el del *resto* de los habitantes de la población del Estado en que habitan. ii) Su existencia y cohesión como grupo distinto se basan tanto en la posesión y manifestación por sus miembros de características propias y específicas de cultura, etnia, lengua y/o religión «diferentes», cuanto en la voluntad (explícita o implícita) del conjunto de ellos de que el grupo persista y mantenga su identidad en cuanto tal, y, iii) Los miembros del grupo y el grupo mismo se hallan en situación de *vulnerabilidad especial* frente al poder del Estado bajo cuya jurisdicción se encuentran y, más en general, frente a la sociedad «mayoritaria».

El elemento de la «vulnerabilidad especial» es clave porque es el que justifica la exigencia de la protección especial. Consiste en que los miembros de la minoría de que se trate, por ser «menos» y por ser «diferentes», pueden encontrarse en un peligro específico de desprotección (o estén ya realmente desprotegidos) frente a «discriminaciones» que les impiden ser titulares y gozar de sus derechos humanos en igualdad real de condiciones con el resto de la población. En verdad, el grupo mismo puede estar o llegar fácilmente a estar en peligro de ser discriminado o incluso de extinguirse porque él y sus miembros carezcan de los medios adecuados para «autoafirmarse» y para defenderse frente a un trato que reciben precisamente por el hecho de mantener y vivir sus rasgos diferenciales.

En cualquier sociedad existen diferentes «colectivos» integrados por personas que se hallan en situaciones de especial *debilidad e indefensión* frente a los sectores sociales dominantes. A ellos, cada vez más, los órdenes jurídicos de los Estados democráticos de Derecho les otorgan *protecciones específicas*, estableciendo incluso «discriminaciones positivas» en su favor y creando instituciones especiales con el mandato de protegerlos.

Se trata de colectivos de *género* (mujeres); de colectivos formados por personas en determinadas *condiciones psicosomáticas*: *edad vulnerable* (niños,

jóvenes y ancianos), *discapacidad* física o mental (incluyendo ciertas clases de enfermos) y *orientación sexual* no heterosexual; del colectivo de los *extranjeros* que entran en relación con una sociedad nacional que no es la suya de origen, por «migración» o por «desplazamiento» o por búsqueda de asilo y/o refugio; finalmente, del colectivo de los *pobres*, cuyos bienes o ingresos no les permiten satisfacer «suficientemente» alguna, varias o todas sus necesidades básicas (vivienda, alimentación, agua potable, atención sanitaria, educación), de modo que no alcanzan el grado de calidad de una vida con dignidad mínima.

Una persona puede pertenecer simultáneamente a varios de esos colectivos vulnerables y reclamar así legítimamente protecciones múltiples en defensa de su dignidad: una mujer anciana, enferma, pobre y refugiada constituiría quizá el paradigma del grado supremo de vulnerabilidad.

Pero, además, en una última clase de los «colectivos diferentes» que exigen protección se puede incluir precisamente a las personas *pertenecientes a un grupo diferenciado*, sea una «minoría», un «pueblo indígena» o un grupo de un *tertium genus*. A sus derechos humanos como persona se les deberían poder añadir entonces los propios de su condición de miembro del grupo diferenciado en cuestión.

Ahora bien, en lo que se refiere a la vulnerabilidad de esta clase de personas, y me refiero ahora a las que integran minorías, hay que decir que, expresándose en términos generales, presenta una característica muy particular: está ligada a la vulnerabilidad y desprotección del grupo al que ella pertenece, *en cuanto tal grupo*. Por ello, la cuestión de la protección de derechos de las personas pertenecientes a la minoría puede no agotarse pura y sencillamente en impedir su discriminación y en buscar su «simple incorporación» a la población del Estado, equiparándolos al resto de los habitantes «normales».

En este terreno de protecciones específicas, siendo como es esencial la «no discriminación», la existencia del grupo diferenciado mismo y la identidad colectiva, manifestada y organizada por el conjunto de sus miembros, pueden exigir protecciones especiales porque sin ellas los derechos humanos individuales no resultarían *efectivamente* protegidos.

En todo caso, por lo que se refiere al trato a dar a minorías, parece hoy claro que ningún Estado puede negarse lícitamente a admitir la relevancia jurídica de su existencia dentro de su jurisdicción y que, consecuentemente, debe actuar de modo que queden protegidas dicha existencia y la identidad que la acompaña, y, asimismo, protegidos los miembros de la minoría en cuestión contra toda discriminación de que sean objeto frente a los integrantes de las mayorías.

Podemos preguntarnos si lo dicho abarca, en sentido amplio, la protección de los extranjeros y en especial de grupos de extranjeros formados por trabajadores migrantes.

Es difícil que «extranjeros» recién llegados por primera vez desde un país tercero acaben formando una nueva *minoría nacional*. Puede ocurrir en cambio que, *lato sensu*, formen nuevas minorías étnicas, religiosas y/o lingüísticas. Su derecho a existir y mantener su identidad dentro del respeto a las leyes, a los principios de orden público y a las tradiciones políticas democráticas del país de acogida es un efecto del principio general de no discriminación en su doble manifestación de no exclusión y de integración sin asimilación.

Pero si los grupos diferenciados de extranjeros (¡cuánto más los de los propios nacionales como los gitanos españoles!) pueden no encajar en el *tipo ideal* de minoría, no por ello merecen menor protección su existencia e identidad, siempre en la perspectiva de la protección de los derechos humanos y en definitiva del respeto al valor supremo que es la dignidad de cada persona.

Dentro de esa perspectiva universal, al mismo tiempo teórica y práctica, se encuadran este volumen, todas y cada una de sus valiosas contribuciones y la propuesta final de un código de trato a minorías en los medios de comunicación.

El creciente multiculturalismo y multirracismo de las sociedades europeas desarrolladas, fruto de la numerosa inmigración hacia ellas de trabajadores de otros continentes, exige el acendramiento dentro de Europa y sus Estados de los valores de la tolerancia y del pluralismo, ejercidos en libertad e igualdad democráticas.

En ese sentido, como los autores muestran y proponen al mismo tiempo, el destierro de Europa en general y de España en particular de todo fundamentalismo excluyente y de todo elemento legal y social de xenofobia o racismo son objetivos a cuya realización es necesario y obligado que contribuya el compromiso de los medios de comunicación, públicos y privados, manteniendo una actitud vigilante y activa en defensa de los «diferentes» y de los «vulnerables», sean ellos nacionales o extranjeros, lejos no ya de la indiferencia, sino de cualquier «neutralidad» imposible. ¿Cómo ser «neutral» ante sucesos como los de El Ejido o de Terrassa, o ante el rosario de muertes de los naufragos de las pateras en el Estrecho, o ante la realidad de los trabajadores «irregulares» sin protección real?

Como ha mostrado la acritud del debate social y político sobre la pertinencia y aun sobre la constitucionalidad de algunas disposiciones de la reciente Ley Orgánica 8/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros y su

integración, la complejidad del problema de la regulación de la inmigración es un reto que todas las Administraciones Públicas españolas deben afrontar con lucidez dentro del respeto a las normas internacionales y europeas en vigor, las cuales, por lo demás, son en la mayor parte de los casos normas *de mínimos*.

Pero existe un ámbito soberano español para organizar la solidaridad con los «dañados de la Tierra» que vengan a España. Sólo si a ese ámbito se le dota de fundamentos justos y firmes podrá y deberá la acción de nuestro país dirigirse, simultáneamente, hacia los Estados de origen de los migrantes en un doble movimiento de cooperación a su desarrollo y de exigencia de respeto por ellos a los valores de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho.

La tarea debe emprenderla activamente el Gobierno español, no ciertamente en solitario, sino conjuntamente con sus socios europeos y con la Comunidad Internacional.

Pero la sociedad civil de la comunicación tiene un lugar esencial en todo ello. Las propias minorías y sus miembros, nacionales o extranjeros, deben recibir de los medios una atención «normal», como la que se da a cualquier otro grupo de ciudadanos, y deben asimismo poder expresar directamente su propia voz y hacer presente su imagen, incluso en sus propios medios.

Es necesaria también una mejor formación deontológica de quienes van a usar o usan ya sus armas en los medios de comunicación, para que éstos muestren una sensibilidad mayor a los problemas de todas las minorías y de su vulnerabilidad, puesta a prueba en tantas ocasiones.

Mucho se ha hecho ya en ese sentido, en Europa y en España, como ponen doctamente de manifiesto Antonio Petit, Vicente Romero y José A. Sorolla, con la claridad de profesionales de tan probada trayectoria, y Carlos Fernández Liesa, competente experto y profesor de Derecho internacional público. Pero lo realizado no es todavía suficiente ante los desafíos que se avecinan.

Adecuada al modo del pleno ejercicio de la libertad de información y expresión, los mismos Medios proponen con toda legitimidad seguir la vía de la autorregulación, adoptando de modo autónomo sus propios códigos de conducta. Faltan quizá códigos efectivos, y el que aquí se apunta tiene la modesta pretensión de llamar la atención de nuevo sobre la cuestión y de reclamar que la garantía del cumplimiento de la reglas «autoimpuestas» debiera ser también organizada por los propios Medios.

Al debate sobre el contenido del borrador de Código, elaborado por mí mismo y por Carlos Fernández Liesa, así como a su formulación final, han contri-

buido generosamente José Apezarena, Jefe de Informativos de la *Cadena COPE*; Alejandro Fernández Pombo, Presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid; Paloma Barrientos, periodista de *RTVE*, y Matilde Barrio y Javier Bernáldez, funcionarios especialistas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Vaya mi vivo agradecimiento a todos ellos, al igual que a Pilar Díaz-Handino, actual Vicedecana de la Titulación de Periodismo de la Universidad Carlos III, por su inestimable ayuda.

FERNANDO M. MARIÑO MENÉNDEZ
*Director del Instituto «Francisco de Vitoria»
Universidad Carlos III de Madrid*

Marzo de 2001

CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE TRATO A LAS MINORÍAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN *

Los medios de comunicación y los profesionales de la información que aceptan este código, conscientes de que la *libertad de información* constituye un derecho fundamental y un pilar del pluralismo en una sociedad democrática, así como de la repercusión específica que tienen en la formación de la opinión pública, el lenguaje y las imágenes utilizados en los medios de comunicación. Conscientes de que la realización, goce y garantía de los *derechos humanos* depende no sólo de los poderes públicos, sino de la sociedad en su conjunto, siendo esencial el papel que en ello desempeñan los medios de comunicación y los profesionales de la información, para lo cual es conveniente la autorregulación de su actividad, en especial adoptando códigos de conducta propios.

Teniendo en cuenta que la permanencia de su *identidad* es un derecho y su *diversidad cultural* constituye un patrimonio merecedor de protección, en lo que se refiere al respeto y a la promoción de los grupos minoritarios. Que la protección de las minorías y de sus miembros, así como de otros grupos vulne-

* Este código deontológico fue elaborado, a la luz de los análisis y estudios realizados, en varias reuniones que se celebraron por una comisión compuesta por don Alejandro Fernández Pombo (presidente de la Asociación de Prensa de Madrid), don José Apezarena (director de informativos de la Cadena COPE), doña Paloma Barrientos (TVE), doña Matilde Barrio y don Javier Bernáldez (del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) y don Fernando M. Mariño y don Carlos R. Fernández Liesa (del Instituto de Estudios Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria).

rables, exige desarrollar el papel de los medios de comunicación y de los profesionales de la información en defensa del interculturalismo y del pluralismo social, cultural y político, en la lucha contra el racismo y la xenofobia y en la difusión de los valores de la paz, la dignidad humana y la solidaridad.

Considerando que estas reglas se basan en principios y reglas generalmente aceptados por los medios de comunicación de países democráticos, expresados por los instrumentos y recomendaciones internacionales de protección de los derechos humanos y de las minorías, e inspirados en los valores democráticos y de promoción de la defensa de los derechos humanos individuales y colectivos sobre la base del respeto a la dignidad de la persona y del entendimiento pacífico entre todos los pueblos y las culturas del mundo,

Afirman:

Las reglas contenidas en este código son aceptadas voluntariamente por los profesionales y las empresas de la comunicación que las suscriben. A efectos de este código, se entiende por minoría aquellos grupos de personas, en el territorio en que habitan, que tienen unas características diferentes de la mayoría de la población por razón de su religión, origen nacional, cultura, etnia o lengua y que como consecuencia de ello, o por el simple hecho de mantener su identidad, son o pueden devenir vulnerables, en lo que se refiere al goce efectivo de sus derechos.

1. Los medios de comunicación y los profesionales de la información evitarán que ninguna información sea formulada o emitida de modo favorable para opiniones, actitudes, comportamientos o decisiones que promuevan, inciten o apoyen el racismo, la discriminación por razón de pertenencia a una minoría o la xenofobia. No se deben difundir ideas basadas en la superioridad u odio racial y la incitación al odio racial y a la comisión de actos de violencia o de discriminación. Los medios de comunicación y los periodistas deben evitar constituirse en soporte de la difusión del discurso del odio y de la incitación a la violencia y a la discriminación. Las conductas discriminatorias, racistas o xenóforas, deberán ser denunciadas desde los medios de comunicación.

2. No deberá formularse o emitirse ninguna información que manifieste una valoración negativa o despreciativa de personas cuyo único rasgo o cuyo rasgo más destacado sea el de pertenecer a una minoría. No se realizarán comparaciones entre conductas o formas de vida de personas o grupos humanos por el simple hecho de que pertenezcan a diferentes minorías si la comparación implica la minusvaloración de unas respecto a otra u otras. Se contribuirá

a la concienciación de la sociedad evitando aquellas prácticas de apariencia neutra que afecten negativamente a las minorías. En particular, se evitará utilizar términos que perpetúen prejuicios sobre colectivos enteros, así como estereotipos y generalizaciones.

3. Toda información relativa a conductas antisociales o delictivas deberá ser formulada de modo que no se atribuya a un grupo minoritario como tal o se destaque como característica esencial del autor o autores la pertenencia a una minoría, sin perjuicio de la información veraz sobre grupos criminales y sus actividades.

4. Los medios de comunicación y los profesionales de la información deben tener en cuenta que toda información sobre grupos minoritarios y personas pertenecientes a ellos en cuanto tales deberá realizarse de modo que respete su identidad y permita su incorporación al conjunto de la comunidad. Impulsarán cuantas medidas de acción positiva a favor de las minorías y de sus miembros se estimen convenientes para luchar contra las discriminaciones indirectas y para favorecer la igualdad real y efectiva entre los grupos humanos y las personas con independencia de su religión, origen nacional, cultura, etnia, lengua o cualquier otra causa que pueda constituir una fuente de discriminación.

5. Deberá prestarse una atención especial a que las informaciones sobre las minorías y sus miembros incluyan en cada caso las relativas a la vulnerabilidad de niños, ancianos, refugiados, trabajadores migrantes discapacitados o personas de determinada orientación sexual si la desprotección se acentúa por el hecho de pertenecer a una minoría.

6. Los medios de comunicación serán sensibles a la desprotección social de niñas y mujeres si ella se acentúa por el hecho de pertenecer a una minoría.

7. En cualquier área geográfica donde una minoría tenga una presencia socialmente relevante, los medios locales de comunicación procurarán informar regularmente sobre sus actividades y sobre su participación en la sociedad, y favorecerán el acceso a los mismos.

8. Las empresas de medios de comunicación deberían incluir, cuando sea oportuno, profesionales expertos conocedores de las diferentes minorías y de las barreras que impiden su incorporación social y la protección de su existencia e identidad. Tales personas promoverán el respeto de estas reglas por su correspondiente medio.

9. Los medios de comunicación deberán tener en cuenta la posibilidad, según criterios de no discriminación, razonabilidad y oportunidad, de promover que las minorías accedan a su utilización. Se tendrá asimismo en cuenta la conveniencia de promover programas en lenguas minoritarias. Se debería dar una información y establecer una programación que permita reflejar la diversidad cultural de la sociedad y el conocimiento mutuo de las mayorías y las minorías. Por su especial naturaleza, los medios públicos de comunicación deberán aplicar un estándar más exigente en cuanto al acceso y participación de las minorías en su programación y en lo relativo al contenido de los programas y de la información que les afecte.

10. Las reglas establecidas deberán servir de inspiración para los medios de comunicación pertenecientes a minorías determinadas en lo que se refiere al trato a dar a otras minorías.

11. La adhesión a estas reglas de conducta (código) implica el compromiso colectivo de su promoción, respeto y protección de modo compartido. Se establecerá un grupo (comité) de seguimiento en el que participen miembros de diferentes medios de comunicación, y, en su caso, representantes de minorías. El grupo informará y promoverá el respeto efectivo de las directrices en cada uno de los medios de comunicación. A tal efecto, podrá adoptar recomendaciones generales.

Enero de 2001

LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA Y EL TRATAMIENTO A LAS MINORÍAS EN LOS MEDIOS

Por ANTONIO PETIT CARO,
Director de *Vasco Press*

I. INTRODUCCIÓN

Al finalizar el siglo xx, en las sociedades modernas constituye un valor común compartido que los valores del respeto, la tolerancia y la convivencia democrática entre todos los hombres y mujeres –sin excepción de etnias, creencias, cultura, origen social o sexo–, se sitúan en lo que podríamos entender como el *núcleo duro* de los Derechos Humanos, como una consecuencia natural de encontrarnos en la misma médula irrenunciable de lo que se entiende como *el bien común de los pueblos*.

En consecuencia, ni como ciudadanos, ni en el ejercicio de su actividad profesional, los periodistas pueden permanecer indiferentes frente a todo problema de racismo, xenofobia y/o discriminación, ni en general ante cualquier movimiento que promueva, directa o indirectamente, la marginalización de las minorías. Por ello, vienen obligados a actuar como responsablemente comprometidos con los derechos democráticos de todas las personas, entendidas individual o colectivamente.

En este punto, resultaría farisaica la teoría o la práctica de cualquier género de equidistancia, en aras de una falsa independencia de la labor del periodista o de un hipotético alejamiento de los hechos, bajo la falsa hipótesis de mejor valorar su dimensión: frente a la injusticia, y la que se aborda en este

libro es de naturaleza radical, no cabe la indiferencia o la tibieza bajo ninguna de sus formulaciones.

En este sentido, las organizaciones representativas de la profesión periodística, especialmente en el ámbito europeo ¹, se vienen comprometiendo durante la última década para incluir estos principios en sus Códigos de Conducta y para promover, asimismo, que tales valores se incorporen a los Estatutos de Redacción y a los Libros de Estilos que rigen en los medios de comunicación social.

Pero supondría tanto como falsear la verdad si con lo anterior tratáramos de justificar una cierta autocomplacencia profesional. Diversos estudios ya han denunciado que, en tanto la profesión comparte los criterios básicos, esa realidad es compatible con otra no menos clara: en los *mass media*, también entre los españoles, encontramos contenidos que incumplen, en ocasiones gravemente, los propios principios que declaramos compartir.

Sin embargo, si se trata de afrontar el problema en toda su dimensión, junto a las responsabilidades que corresponden a los periodistas, tal compromiso positivo de trabajar en favor del respeto y de la tolerancia resulta necesario que sea compartido y asumido, en la teoría y en la práctica, por los editores de los medios, especialmente por aquellos que pertenecen a las sociedades más desarrolladas, a los que corresponde un significado compromiso, como consecuencia de sus posiciones destacadas en las esferas internacionales.

En línea con esta consideración, poco estaríamos aportando en esta verdadera *cruzada moderna* contra la intolerancia si no alcanzáramos a conseguir que la defensa positiva de los valores democráticos esté presente en aquellos medios de comunicación que, por su naturaleza específica, tienen un mayor poder de difusión e impacto para la totalidad o para grandes áreas del mundo. Es el caso, citado a título de ejemplo, de las agencias de noticias de carácter internacional y de los *mass media* plurinacionales y de las grandes corporaciones audiovisuales.

Pero al igual que desde diversas instancias profesionales se ha urgido a los editores a actuar en similar línea, entendemos que las instituciones públicas, tanto multilaterales como las privativas de cada una de las naciones, deben promover y desarrollar acciones inequívocas en este sentido. A este respecto, a

¹ A este respecto, resultan de especial interés los debates y sesiones de trabajo que tuvieron lugar con ocasión de la Conferencia Mundial de Periodistas contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia, organizada en Bilbao [2-4 mayo 1997] por la Federación Internacional de Periodistas, que reunió a profesionales de más de 70 países.

los responsables de la vida política y social les corresponde asumir un papel verdaderamente ejemplarizante. Por ello, cuando, por ejemplo, en las instituciones se promueve la elaboración de Códigos de Conducta para los dirigentes y funcionarios públicos, debería contemplarse en todos los casos cuanto se refiere al compromiso que les es exigible en la lucha contra todo vestigio de intolerancia en cualquiera de sus manifestaciones.

En esta esquemática introducción se resume un empeño y un compromiso, sin los cuales se podrá proseguir con un debate incluso brillante, pero que en la práctica será escasamente operativo, si desde las sociedades desarrolladas no se acomete con responsabilidad, ahora que encaramos el tercer milenio, la erradicación de una de las lacras más lacerantes de los movimientos sociales contemporáneos, que adquiere además una proyección globalizada, por cuanto no constituye un fenómeno circunscrito a un escenario geográfico limitado, sino que se localiza en cualquier género de sociedades, con independencia de su grado de desarrollo económico, cultural o social.

II. LA REALIDAD COMUNICACIONAL

Por referirnos a nuestro país, una de las denuncias más recientes de la realidad comunicacional en referencia a las minorías marginalizadas, la encontramos en el estudio dirigido por Montserrat Lluís, para la Coordinadora de las ONGs del País Vasco ², en el que se pone de manifiesto que *el extranjero se encuentra marginado en la totalidad de los medios de comunicación, que son meros voceros de las voluntades generales*.

En este estudio, se localizan algunos puntos que, aunque se circunscriben a la prensa vasca, pueden ser entendidos como de ámbito más general. Y, así, conviene llamar la atención en primer término, sobre las consecuencias de la terminología empleada en las informaciones, que con frecuencia encierra connotaciones peyorativas. *La acumulación de este tipo de vocablos en una misma noticia* —se señala en el informe— *consigue situar al extranjero en un entorno lúgubre, despectivo, donde la distancia con el europeo se torna aún más insalvable*. Cuando se constata, bajo un punto de vista estadístico, que las connotaciones negativas de cada noticia son mucho más numerosas que las

² Montserrat LLUIS SERRET, *Inmigrantes de la actualidad. Estudio sobre la inmigración en los medios de comunicación de masas del País Vasco*, Bilbao, 1999.

positivas, estamos abonando la tesis de la exclusión social a través de los medios.

Creemos que si se le presentara (al inmigrante) como culto razonable, dispuesto a contribuir al progreso general, la opinión pública acabaría por admitir al foráneo como un ciudadano más. Pero para ello, es imprescindible que los medios concedan una oportunidad al inmigrante en forma de discriminación positiva, dice más adelante este estudio.

Pero Montserrat Lluís va más allá. Cree advertir la autora que es en el ámbito cultural donde se produce una mayor aproximación a la realidad foránea. Pero sin embargo a la luz del tratamiento que en esta materia dan los medios, *las manifestaciones culturales, en definitiva, contribuyen a acentuar los ghettos, la división entre culturas.*

En definitiva, se viene a concluir que en los tratamientos periodísticos no se hace *sino reproducir un rol que en las sociedades occidentales se reserva, casi en exclusiva, al inmigrante. [...] El recién llegado no enriquece, es objeto de burla; su inadaptación, su subdesarrollo en definitiva, se convierten en argucia artística para despertar la sonrisa de unos espectadores que, en sus subconscientes –o en su plena consciencia– consideran al inmigrante incapaz de adaptarse a las modernidades.*

Quizá la autora se exceda al afirmar de manera concluyente que *el racismo es intrínseco a todos los medios de comunicación*, pero se trata de una apreciación que matiza en un doble aspecto: se trata de una discriminación de hecho, en la medida que sólo cuatro de cada mil informaciones se refieren a estos colectivos; pero se trata, sobre todo, del reflejo de la realidad social, por cuanto *es la sociedad, la problemática económica, laboral y urbana, la que ha convertido al inmigrante en enemigo.*

Más alentador y matizado, pero igualmente con aspectos que obligan a una seria reflexión, es el estudio dirigido por Juan de Dios Ramírez-Heredia y Sergio Rodríguez, en relación con el pueblo gitano³, en el que se denuncia sin rodeos que el tratamiento que a este colectivo ofrecen los medios *provoca una baja autoestima de la comunidad gitana.*

Los autores concluyen en algunas apreciaciones de especial relevancia, como son: la inexistencia de la comunidad gitana como fuente informativa, y consecuente la ausencia de contraste informativo con los propios afectados; la

³ Juan de Dios RAMÍREZ-HEREDIA y Sergio RODRÍGUEZ, *¿Periodistas contra el racismo? La prensa española ante el pueblo gitano*, Barcelona, 1998.

escasa profundización en los temas que afectan a este grupo y la alta frecuencia en la que se priorizan aquellos temas que inducen al sensacionalismo. Por todo ello, no extraña que recomienden a los periodistas algún tipo de compromiso institucional que evite los anteriores errores.

Se trata de una conclusión a la que en la práctica se ha llegado en el ya referenciado estudio del País Vasco, donde a iniciativa del *Foro de la Inmigración* la generalidad de los medios han suscrito un protocolo en el que se comprometen activamente frente al racismo y la discriminación, que luego se ha concretado en la elaboración conjunta de un Manual de Estilo Periodístico⁴, que constituye por su precisión y por su alcance un modelo a seguir.

Ninguno de estos dos ejemplos citados suponen excepción. De hecho, teniendo como objetivo final un tipo u otro de colectivo en riesgo de marginalización, en los países de nuestro entorno encontramos numerosas iniciativas. Y así, se ha hecho usual citar en este campo el *Informe Killilea*, emitido por el Parlamento Europeo, en el que se documenta la realidad de las minorías culturales y lingüísticas en el seno de la Unión Europea y en el que se plantea un cuadro terapéutico para evitar cualquier tipo de «marginación social»⁵.

Pues bien, frente a estas realidades, entiende el europarlamentario Juan de Dios Ramírez Heredia, presidente de la organización gitana Unión Romaní, que «en la lucha contra el racismo, el periodista tiene que militar abiertamente en el bando de los antirracistas, sin ningún tipo de rubor»⁶. La cuestión que así se plantea no es nueva, pero es real.

Alejándonos de considerar la profesión periodística como abocada a constituirse en una especie de universal ONG, el verdadero debate profesional se centra en la consideración de si el periodista puede o debe ser neutral frente a los hechos de los que informa.

Para los estudiosos que han abordado la cuestión, el discurso doctrinal aparece nítido en este punto. Los Códigos Deontológicos reconocen que, con carácter general, el periodista «en el ejercicio de su actividad profesional no está obligado a ser neutral»⁷, en la medida en que como ciudadano tienen en

⁴ Foro de la Inmigración, Consejo Vasco de Bienestar Social. *Protocolo de Adhesión y Manual de Estilo Periodístico*. Vitoria-Gasteiz, 5 de abril de 2000.

⁵ Parlamento Europeo. Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación. *Informe sobre las minorías culturales y lingüísticas de la Comunidad Europea*. 28 de enero de 1994.

⁶ JUAN DE DIOS RAMÍREZ HEREDIA, conferencia en el Centro Internacional de Prensa, Bilbao, julio, 1998.

⁷ Federación de Asociaciones de la Prensa de España. *Código Deontológico de la Profesión Periodística*. Sevilla, 1993.

plena vigencia los derechos indeclinables de su libre opinión personal. Pero de forma paralela debe asumir la exigencia de distinguir de manera evidente para el público receptor aquello que es información –entendida como relato de hechos y declaraciones– de lo que corresponden a su propia valoración y/o opinión⁸.

Sin embargo, las anteriores consideraciones pueden entenderse como de un valor general, en la medida que tratan de aunar los derechos y deberes del *ciudadano-periodista* con los que corresponden al *periodista-ciudadano*. Por tanto, se dirigen a salvaguardar los márgenes de libertad cívica en el ámbito de la persona, para que el ejercicio de una profesión no viole tales márgenes de libertad.

A partir de ahí resulta obligado dar un paso más. Y así, parece necesario ofrecer una respuesta equilibrada a una pregunta que a nuestro entender resulta clave: ¿le es permitido al periodista en el ejercicio de la propia profesión algún género o grado de *militancia informativa*? Obsérvese que ya no nos estamos refiriendo al *ciudadano-periodista* como sujeto individual de derechos cívicos y políticos, sino que nos dirigimos a lo que constituye el punto medular de este debate: la posibilidad o no de incorporar a los deberes profesionales del periodista la exigencia de militancia en las causas del bien común de los pueblos.

Si buscamos tal respuesta, un primer dato encontramos, por ejemplo, en los principios fundacionales de algunos medios, cuando afirman que han sido promovidos «*con el compromiso de ser un medio de comunicación democrático, para contribuir primero a la construcción de un régimen de libertades y ayudar después a consolidarlo*»⁹. Debe entenderse que si el medio de referencia apuesta en su acta fundacional de manera tan rotunda por tales principios, los mismos son de aplicación estricta para los periodistas que integran su redacción.

⁸ Se trata de un principio, universalmente aceptado, que tiene su prolongación en otro tipo de incompatibilidad cuya vulneración conlleva el mismo grado de reproche moral: la radical incompatibilidad del ejercicio de actividades ligadas a la información con aquellas otras que se refieren a la publicidad en cualquiera de sus formas o manifestaciones. En este punto puede consultarse, Código Deontológico de la FAPE, artículos 17 y 18.

Por otro lado, resulta de especial interés la doctrina que sienta el Tribunal Constitucional en lo que se ha venido en denominar el *reportaje neutral*, respecto al cual pueden consultarse las sentencias 41/1994, 22/1995 y 3/1997.

⁹ Principios fundacionales de *El Periódico de Catalunya*, texto incorporado al Estatuto de Redacción pactado por la sociedad editora y los representantes de los periodistas. Barcelona, 1993.

Como el ejemplo citado no constituye un caso aislado, sino que puede constatar en una amplia gama de medios privados y públicos, podemos concluir, por la vía de la experiencia práctica, en la validez de este deber profesional en el compromiso con los valores democráticos, entre los que se han de incluir de modo necesario los relativos a la tolerancia y el respeto a las minorías, bajo cualquiera de sus especificaciones.

A mayor abundamiento, resulta obligada la referencia al Seminario sobre *Medios de comunicación contra la intolerancia, el racismo y la xenofobia*, que a instancias de las instituciones comunitarias reunió en Madrid los días 24 y 25 de marzo de 1998, como clausura del Año Europeo contra el Racismo, a representantes de las organizaciones profesionales y sindicales de periodistas de Alemania, Francia, Irlanda, Italia, Portugal, Reino Unido y España.

Fruto de aquellas sesiones de trabajo sobre la «Declaración de Madrid», en la que se afirma que, porque *«son conscientes del problema que supone la existencia de prejuicios y estereotipos hacia personas o grupos étnicos, sociales, religiosos o culturales diferenciados»*, resulta necesario recordar que *«el periodista no puede ser neutral ante el racismo y la xenofobia y consideran importante fomentar y preservar los valores de libertad, igualdad y dignidad de todos los ciudadanos»*¹⁰.

¹⁰ *Declaración de Madrid: Los periodistas contra el racismo y la xenofobia*. Madrid, marzo, 1998. De esta declaración, interesa destacar su parte dispositiva en la que las organizaciones profesionales firmantes acuerdan:

Primero: Promover los principios que contribuyan a fomentar conocimiento, valores y actitudes favorables al respeto de los derechos humanos y al compromiso activo con respecto a la defensa de tales derechos y a la construcción de una cultura de paz y democracia.

Segundo: Favorecer los valores de respeto a la persona, convivencia, solidaridad, paz y democracia, y rechazar la difusión acrítica de mensajes racistas y xenófobos.

Tercero: Promover, a través de los distintos medios, la difusión de valores educativos y formativos para un correcto conocimiento de las minorías.

Cuarto: Realizar un tratamiento informativo de acuerdo con las normas éticas cuando se trate de la difusión de mensajes o imágenes susceptibles de perjudicar la valoración social de las minorías, especialmente en relación con:

- El uso incorrecto del lenguaje o de términos lingüísticos referidos a las distintas etnias y culturas.
- La discriminación por cualquier motivo, para lo que evitarán la difusión de mensajes atentatorios para la dignidad de las personas o que impliquen discriminación o desprecio hacia ellas en razón de su color, raza, sexo, religión o ideología.
- La alusión injustificada a la etnia en noticias referidas en hechos delictivos y sexuales.

Se trata, en definitiva, de un discurso doctrinal que engarza directamente con los propios textos constitucionales de nuestro país. De hecho, este es el sentido de la previsión que se contiene en la solemne declaración de la igualdad radical ciudadana que proclama la Constitución ¹¹, en concordancia con una doctrina unánimemente recogida en los pactos y acuerdos internacionales ¹².

Por eso, no puede extrañar que el Tribunal Constitucional haya dejado consagrada la prohibición por la ley de «*toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia*» ¹³.

Deberemos concluir, pues, en la exigibilidad que tiene para el periodista este compromiso profesional frente a cualquier movimiento xenófobo o discriminatorio. Pero si nos paramos a analizar las dificultades que se observan en un correcto tratamiento periodístico de los fenómenos generadores de movimientos de esta naturaleza, comprobamos que queda aún camino por andar.

III. PROPUESTAS OPERATIVAS Y EXIGIBLES

En diversas ocasiones hemos asistido a debates internacionales, incluso brillantes, que sin duda han constituido aportaciones e instrumentos eficaces para promover la concienciación cívica. Pero si tratamos de elaborar un análisis realista, en la misma medida debe reconocerse que tan sólo y nada más que con los foros de discusión, avanzaremos algo, que siempre será poco y además tardío, si al debate no siguen los compromisos concretos en la búsqueda de la tolerancia y la convivencia democrática. Pero cabría dar un paso más: el establecimiento de acuerdos realistas y operativos, debe ir siempre

Quinto: No utilizar imágenes o declaraciones identificables de menores, aunque fueran autorizadas por los adultos que les tutelen, cuando éstas puedan atentar contra los derechos de la personalidad en desarrollo del niño o crear estereotipos sobre su comunidad de origen.

Sexto: Que el periodista debe mostrar el máximo respeto ante todas las situaciones de dolor o aflicción de las víctimas de la xenofobia o el racismo, para evitar la intromisión indebida en sus derechos individuales y colectivos.

Séptimo: Respetar en la actividad informativa el derecho que asiste a todas las personas y a todas las comunidades sobre su identidad cultural. La existencia de diferencias culturales constituye un bien que enriquece a la humanidad.

¹¹ Constitución Española, artículo 1.1.

¹² Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 20.2

¹³ Sentencia 214/1991.

acompañado, además, del diseño operativo de los mecanismos que garanticen su cumplimiento.

1. Banco de datos

A la hora de alcanzar este objetivo real, una primera propuesta se debiera dirigir a instar a las autoridades —en nuestro caso, de España, pero también de la Unión Europea— a constituir un medio específico de comunicación, orientado a editores y periodistas, en el que se informe veraz y documentadamente de cuanto se refiera a la lucha contra la xenofobia, el racismo y, en general, cualquier movimiento agresivo contra las minorías.

Se trata de promover una vía de comunicación en virtud de la cual los periodistas podamos acceder a cuanta información y documentación nos resulte útil, para cumplir más cabalmente con nuestro compromiso democrático en favor de la convivencia, la tolerancia y el respeto mutuos. Las tecnologías actuales permiten que se promuevan este tipo de medios especializados, que operando en tiempo real, deben ser el origen de un banco de datos sobre la materia específica que aquí se aborda.

La experiencia nos dice que una de las grandes debilidades de la lucha contra la discriminación y el mal trato de las minorías radica, precisamente, en el silencio que las envuelve en tantas y tantas ocasiones. De hecho, en los propios contenidos mediáticos resulta relativamente asequible obtener informaciones que constituyen verdaderas denuncias públicas; pero en la misma medida que van perdiendo esa moderna categoría de relevancia que entre todos hemos constituido en torno al hecho de ser *fotografía de primera página*, el recuerdo de tanta tragedia se diluye, mientras las sociedades de la opulencia regresan de nuevo a sus prácticas endogámicas.

El valor estratégico de la comunicación radica precisamente en convertirse en conciencia crítica de la sociedad en la que se desenvuelve. Para ello, el arma cívica y pacífica más ágil y eficiente con la que un periodista puede contar radica en la información, para situar a los ciudadanos ante la propia realidad, con independencia de que resulte cómoda o incómoda. Sin embargo esa labor de denuncia, que resulta indispensable, no podría desarrollarse si careciéramos de noticias y de documentación. Promover el acceso fácil a una información veraz y completa constituye por tanto una herramienta necesaria. Esa es la razón de ser de este cada día más necesario banco de datos contra cualquier género de intolerancia.

2. «Redimamos la Red»

Íntimamente ligada a la anterior iniciativa, constituiría un error grave no adoptar una posición activa y firme frente a la avalancha racista y xenófoba que se observa en los medios emergentes que se soportan en la Red.

El innumerable número de casos que se vienen presentando de forma preocupante en Europa, no pueden ser paliados con la sola denuncia, como por fortuna ocurre en una gran mayoría de naciones y de medios. Parece necesario adoptar una posición más activa, bajo un lema que no debería ser muy diferente de «*Redimamos la Red*» de todo vestigio de intolerancia.

Las corrientes solidarias, hoy tan en boga, no debieran permanecer ajenas a esta realidad. Junto a todos los medios que la tecnología permite para dificultar la expansión de estos intentos xenófobos, desde una militancia democrática, parece indispensable llenar de contenidos que potencien los valores de la convivencia y del entendimiento.

3. Compromisos éticos

Compartiendo los principios que informan la mayoría de los códigos y declaraciones deontológicas de las organizaciones profesionales, es llegado el momento, porque así lo exige la propia realidad, de adquirir corporativamente compromisos éticos en el terreno de lo concreto. Entre la amplia diversidad de opciones que pueden contemplarse, en nuestro criterio cuatro resultan de especial urgencia:

a) El especial reproche ético que merece cuanto, en la materia que nos ocupa, se refiera a la infancia. Los derechos del niño, particularmente en las situaciones sociales más desfavorecidas, tienen que ser objeto de una especial defensa y protección.

La preservación de los derechos del niño es un bien jurídico que debe ser protegido y respetado en todas las circunstancias. En consecuencia, la mera autorización de sus padres o tutores no es razón suficiente para que los niños sean objeto de una información en la que sus derechos inalienables puedan ser conculcados, ahora o en el futuro.

b) La particular diligencia que, de acuerdo con una doctrina ampliamente extendida, obliga al periodista a tener cuando deba informar sobre materias delictivas o jurisdiccionales, respecto a los familiares inocentes del protagonista de los hechos, en el supuesto de personas que sufren la marginalidad

por razones xenófobas racistas o cualquier otra materia adquiere una especial importancia.

Sobradamente conocido es que la comisión de un delito en nada guarda relación con la raza, el credo o el sexo del delincuente. Sin embargo, hoy observamos cómo incluso en las sociedades más desarrolladas se conculcan los derechos de muchas personas, predisponiendo a la sociedad sobre una supuesta especial permisividad de quienes pertenecen a una raza o una cultura distinta de la propia.

Comportamientos de esta índole deben ser denunciados y el periodista no puede permanecer indiferente ante tales hechos. Consideramos, además, que esta especial atención deontológica resulta indiferente a que los hechos sobre los que se informa se encuentren en la fase de su investigación como cuando se trate de hechos probados por la Administración de Justicia.

c) La extrema sensibilidad que el periodista debe demostrar ante todas las situaciones de dolor o aflicción de las víctimas de la xenofobia o el racismo, para evitar la intromisión indebida en sus derechos individuales y como pueblo.

Aunque en ocasiones resulte particularmente difícil, en nuestra opinión el periodista debe mantener un sólido equilibrio cuando informe sobre algunos de los conflictos que hoy, por desgracia, se multiplican en diversos puntos del mundo, para no caer en cuanto suponga la explotación del dolor o la aflicción de ciudadanos inocentes.

d) Debe llamarse la atención, además, sobre el derecho que asiste a todas las personas y a todos los pueblos sobre su identidad cultural. La existencia de diferencias culturales, en cualquiera de sus exponentes, constituye un bien que enriquece a toda la humanidad. Por ello, entendemos que en la actividad informativa deben respetarse con especial esmero las manifestaciones de las culturas autóctonas y/o minorizadas.

En consecuencia, resulta de interés destacar las exigencias deontológicas que en el universo informativo deben seguirse, en orden a defender estos derechos culturales, en muchas ocasiones conculcados cuando se analizan y valoran desde las sociedades más desarrolladas.

4. La enseñanza de la Ética

Si a estos deberes deontológicos se concede tanta importancia, en paralelo resulta necesario reivindicar la necesidad de una formación deontológica

sólida y bien construida en los centros de enseñanza y de investigación de la comunicación social en cualquiera de sus especialidades.

Aún hoy nos continúa resultando escandaloso que en determinados centros universitarios, dedicados a la formación de futuros periodistas, los planes de estudios no hayan incluido durante décadas la deontología profesional, por entender que se trataba de una materia marginal e innecesaria. Fruto de tal desidia ha sido la entrada en el mercado de trabajo de un importante número de promociones desconecedoras de una materia tan sensible. Quienes tenemos o hemos tenido responsabilidades en los medios, conocemos con detalle la gravedad de tal laguna.

Pero no debiera bastar con la mera inclusión en la totalidad de los planes de estudio de esta materia. Debiera exigirse, además, que tales enseñanzas se realicen con la fundamentación y la altura intelectual precisa. Si nunca ha debido tener tal consideración, en las circunstancias actuales constituye en nuestra opinión un grave error conceder a la enseñanza de la ética profesional la consideración de lo que en la tradición universitaria se ha conocido como una asignatura «*maría*».

5. La responsabilidad de los editores

Pero supondría tanto como ocultar la realidad del hecho comunicacional, si a continuación no se realiza un llamamiento a los editores, especialmente de los medios audiovisuales, para recordarles que, cuando se trata de defender derechos tan básicos como los que se refieren a la tolerancia y la convivencia democrática, ni todo lo permitido por las leyes mercantiles es compatible con la ética de la información, ni el éxito en los *ranking* de audiencias o en la captación de ingresos publicitarios puede alcanzarse conculcando los deberes deontológicos.

En este sentido, hacemos nuestro lo lúcidamente establecido en el Código Europeo de Deontología del Periodismo, aprobado en su día por la Asamblea de Parlamentarios de Europa, cuando recuerda el principio irrenunciable de que la selección de las noticias o de los mensajes que se difunden no puede realizarse en razón de aumentar los índices de audiencia o de lectores, o en función del aumento de los ingresos por publicidad ¹⁴.

¹⁴ *Código Europeo de Deontología del Periodismo*. Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa, 1 de julio de 1993.

Si lo así aprobado por la Asamblea de Parlamentarios rige en todas las situaciones, con mucho mayor motivo cuando se trate de protagonistas de la noticia que viven bajo la lacra de la xenofobia y el racismo, en sociedades marginalizadas o en situaciones verdaderamente límites, cuya explotación con fines comerciales no sólo constituye una grave conculcación de los deberes deontológicos, sino que infringen derechos humanos irrenunciables.

6. Programas nacionales y de la Unión Europea

Pero como una mera declaración de intenciones no parece suficiente, se hace necesario, además, que en los programas operativos, en relación con los medios de comunicación social y sus industrias afines, que desarrollen las instituciones de la Unión Europea y de cada una de las naciones que la integran, se incluya en todos los casos una cláusula restrictiva, en razón de la cual para acceder a fondos, ayudas o subvenciones económicas el beneficiario se comprometa formal y previamente con la defensa de los valores de la tolerancia y la convivencia y no incumpla sus obligaciones éticas contra el racismo y la xenofobia.

En nuestra opinión, dada la gravedad de problema que estamos abordando, las instituciones públicas deben estar facultadas para exigir incluso la devolución de los fondos económicos concedidos, en los supuestos de incumplimiento en esta materia por parte del beneficiario.

Si las autoridades comunitarias y los propios responsables de los medios de comunicación no encuentran objeciones para alcanzar acuerdos y promover programas de ayudas para la protección de la propia industria europea, no parece un exceso solicitar que, quienes tan solícitamente salvaguardan intereses económicos, extiendan sus compromisos a deberes tan irrenunciables como los aquí abordados.

7. La autoridad del Ombudsman

Pero para el buen fin de objetivos como los propuestos, aconsejan igualmente contemplar la necesidad de contar con una autoridad comúnmente aceptada, con capacidad de análisis y de sanción moral, frente a las conductas transgresoras de estos principios.

Entre las formulaciones posibles, cabe pensar en la creación de la figura de un Ombudsman, tanto de la Unión Europea como de cada una de las naciones que la integran, a los que se encomiende la función de vigilancia, aclara-

ción de situaciones dudosas y, en último extremo, el reproche ético de cuanto se refiera al tratamiento que los medios de comunicación social ofrecen, ya sea en sus espacios informativos, ya en los de ocio, a todas las cuestiones relativas a la tolerancia y la convivencia democrática.

Entendemos que la gravedad del problema que se trata de abordar no permite que ni las instituciones públicas, ni los editores, ni los periodistas, podamos contentarnos con afortunadas declaraciones de buenas intenciones. Por el contrario, se hace necesario establecer también aquellos mecanismos necesarios para que lo comúnmente aceptado, se cumpla luego en la práctica.

8. Los compromisos de ejemplaridad del dirigente público: el deber de denuncia

Pero de este marco general referencial no pueden quedar excluidos los dirigentes públicos, en cualquiera de sus rangos o categorías. Cuando en el seno de la vieja Europa observamos con grave preocupación como renacen con fuerza movimientos xenófobos, que basan sus ofertas a los electores precisamente en la propia intolerancia y en la discriminación, cualquier posición de indiferencia resulta en la práctica gravemente conculcadora de los deberes deontológicos.

Por eso ha llegado la hora de incluir entre las obligaciones deontológicas del informador el deber de denuncia de tales movimientos y de tales líderes, con la conciencia clara de que ya no nos encontramos en el escenario que corresponde a la legítima diversidad ideológica y política, sino que nos situamos de lleno ante un grave atentado al bien común de las sociedades.

Pero, de forma paralela, la sociedad debiera exigir de sus representantes y de los administradores públicos un explícito y formal compromiso en favor de la tolerancia y la convivencia democrática, frente a cualquier formulación de la intolerancia y la discriminación de las minorías. Se trata de un compromiso que viene exigido, además, por las obligaciones de ejemplaridad que contraen, quieran o no, los dirigentes públicos al acceder por libre voluntad a semejantes estadios de responsabilidades sociales.

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN

Convencidos como estamos de que los medios de comunicación deben contribuir a fomentar el entendimiento, la solidaridad y la tolerancia entre los

individuos y entre los grupos sociales, necesariamente tenemos que concluir en la conveniencia de adoptar posiciones activas en cuanto se refiere a estas materias. En la realidad profesional se observa una especial sensibilidad en la inmensa mayoría de los periodistas acerca de estas materias, lo que lleva a pensar con cierto optimismo sobre la viabilidad práctica de cualquier género de iniciativa que en esta materia se promueva.

Si miramos hacia atrás, sin remontarnos demasiados años atrás, resulta obligado reconocer el esfuerzo que todos, editores y periodistas, realizaron durante nuestra transición democrática, con un comportamiento sin duda ejemplar que permitió consolidar en nuestro país las libertades civiles y políticas. Ahora tenemos que dar un paso más. Si, como exigían las circunstancias históricas, en aquella ocasión todos estuvimos volcados hacia la sociedad española, olvidando un tanto nuestros problemas propios, para la implantación de la democracia, ahora debemos mirar de nuevo hacia la sociedad, hacia los problemas reales que la atenazan, uno de los cuales, y nada pequeño, reside precisamente en el resurgimiento de movimientos xenófobos y marginalizadores.

Es el momento adecuado para hacerlo. Nos lo dice la realidad de los países europeos de nuestro entorno, en los que el debate profesional que hoy predomina es el debate ético, en paralelo con un profundo alineamiento en torno a la defensa de los valores democráticos frente a las oleadas de intolerancia.

Pero nos lo dice sobre todo nuestra propia realidad. En una sociedad con gran vitalidad en todos los fenómenos de comunicación, como es la española, los ciudadanos reclaman –y hacen bien– que quienes asumen la responsabilidad de los medios informativos asuman también el compromiso ético que garantice la plena vigencia práctica de las libertades civiles en toda su extensión.

Pero no resulta ocioso destacar, llegados a este punto, la singularidad de la tarea que se debe desarrollar. Editores y periodistas, pero también los poderes públicos, tienen que garantizar a todos los ciudadanos el pleno y libre ejercicio de sus derechos fundamentales. Es el elemento esencialmente diferenciador que la actividad informativa tiene con respecto a cualquier otra. Precisamente por eso concedemos tanta importancia a ese factor regeneracionista que representan las formulaciones deontológicas, una de cuyas concreciones más actualizadas se refieren a cuanto guarda relación con la tolerancia y la libre convivencia en los pueblos y los grupos sociales.

En este compromiso, los periodistas afrontan una responsabilidad fundamental, que todos debieran asumir con sentido autocrítico y con grandeza de miras. Reconozcámoslo directamente: no todo se ha hecho bien en el pasado.

Pero este reconocimiento sería estéril si no va unido al compromiso de modificar todo aquello que debe ser cambiado. Es una urgente obligación hacerlo, y la sociedad hará bien en exigirnoslo.

Los eufemismos sirven escasamente para abordar los problemas. Por eso, tengo la convicción fundada de que la inmensa mayoría de los profesionales son plenamente conscientes de que defraudaríamos a la sociedad española si los compromisos éticos en la materia que nos ocupa, quedara tan sólo y nada más que en una más o menos afortunada declaración de principios. Los ciudadanos esperan más. Esperan, en primer término, que los periodistas sean capaces de cumplir los compromisos consustanciales con la actividad profesional. Pero, no nos engañemos, esperan también que, cuando sea necesario, las organizaciones profesionales tengan la valentía de exigir su cumplimiento, aunque ello conlleve episodios más o menos incómodos; flaco favor se haría a la profesión periodística si por comodidad, desidia o ánimo pusilánime no fueran capaces de cumplir estas obligaciones

ANTONIO PETIT CARO
Licenciado en Ciencias de la Información
Periodista

CÓDIGOS DE CONDUCTA Y TRATO A LAS MINORÍAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CATALUÑA

Por JOSÉ A. SOROLLA,
Subdirector de *El Periódico*,
de Barcelona

«Ningún ser humano –dice José Saramago– es humanamente ilegal»¹. Sin embargo, muchos medios de comunicación han utilizado –y algunos siguen utilizando– el término ilegal para designar a los inmigrantes que carecen de documentación del país donde residen y cuya situación, por tanto, no está regularizada.

Éste es sólo un ejemplo de lo que todos los estudiosos de la actitud de los medios de comunicación hacia las minorías étnicas denominan tratamiento negativo, que muchas veces responde a inercias muy interiorizadas en la conciencia colectiva.

Los reproches principales que se hacen a los medios de comunicación cuando tratan temas sobre minorías étnicas pueden resumirse del siguiente modo:

1. La atención que se presta a los grupos étnicos minoritarios es muy limitada, a menos que estos grupos se asocien con violencia, ilegalidad, delin-

¹ JOSÉ SARAMAGO. *Carta abierta a la Solidaridad*. Lisboa, 3 de diciembre de 1998. Citado por el *Informe anual de 1999 sobre el racismo en el Estado español*. SOS Racismo. Icaria Editorial. Barcelona, 1999.

cuencia o comportamientos culturales *extraños*. A menudo los informativos describen a las minorías valiéndose de estereotipos, como «gente problemática», que causa inestabilidad (disturbios, manifestaciones, protestas) o que tiene problemas (trabajo, vivienda, idioma o educación), analizando raramente las causas o el contexto en que se producen esos problemas.

2. Las minorías son escasamente utilizadas como fuente informativa principal, aunque sean las protagonistas de la información. Ello se debe a que no suelen existir miembros de esas minorías en los aparatos de producción informativa y a que los valores informativos de la mayoría de los periodistas tienden a excluir a los grupos socioculturales minoritarios como fuentes de información fidedigna, entre otras razones porque los prejuicios étnicos de los informadores les llevan a pensar que las minorías tienen menos credibilidad.

3. El contenido de las informaciones que afectan a minorías étnicas es generalmente negativo y sesgado. No se considera, por ejemplo, que la inmigración sea un fenómeno normal ni natural ni un derecho, sino que se presenta como una amenaza permanente, como un conflicto entre «ellos y nosotros».

4. Las actividades «positivas» protagonizadas por las minorías étnicas, como sus contribuciones a la economía, la cultura, las artes o la política, se ignoran o se infravaloran.

5. Las actuaciones de las instituciones, la Administración o las autoridades referidas a las minorías se tratan de un modo paternalista: son personas o entidades que llevan a cabo una tarea «difícil» para ayudar o atender a los grupos étnicos minoritarios. Asimismo, los intentos de limitar o controlar la inmigración se hacen por el «bien» de los que llegan de fuera.

6. La discriminación o el racismo no se presentan como inherentes a una sociedad, sino como consecuencia de la presencia o de las demandas de los propios grupos minoritarios.

Todos estos reproches recogidos por el experto holandés Teun A. Van Dijk², le llevan a afirmar que «existe un marco ideológico complejo dentro del cual la percepción entre grupos, los prejuicios, la dominación de los blancos, las estrategias cognitivas, además de los valores que los periodistas atribuyen a las noticias, contribuyen en conjunto a una representación negativa de las minorías étnicas en la prensa»³.

² TEUN A. VAN DIJK. *Racismo y análisis crítico de los medios*. Paidós. Barcelona, 1997. Págs. 96-97, 129 a 131 y 243-244.

³ VAN DIJK. *Op. cit.*, pág. 79.

¿Pero es realmente tan negativa la imagen que los medios de comunicación españoles, y concretamente los catalanes, dan de las minorías étnicas y de la inmigración? Para tratar de responder a esta pregunta y contrarrestar las afirmaciones teóricas, aunque sean fruto de numerosos análisis de la prensa europea elaborados por Van Dijk, es preciso valorar primero la evolución de la sociedad española –incluida la catalana– en este aspecto y acercarnos después al comportamiento cotidiano de los medios de comunicación catalanes, objeto de este trabajo.

En los últimos veinte años, España ha pasado de ser «un país de emigración» a ser «un país de inmigración», aunque esta afirmación requiere todavía muchos matices, ya que la cantidad de españoles que residen en el extranjero supera todavía en mucho al número de extranjeros que viven en nuestro país. El número de extranjeros que viven en España se estima entre 600.000 y 800.000, lo que supone un 1,6 % de la población total, mientras que en Francia representan el 8,2 %, el 10 % en Bélgica y el 7,2 % en Alemania. La media de la Unión Europea (UE) sería de algo más del 6 % para un total de 15 millones de inmigrantes. En cuanto a la evolución del fenómeno, en 1955 había en España 66.000 extranjeros residentes, 230.000 en 1980, 400.000 en 1990 y 600.000 en 1992 ⁴. Pero fuera de las fronteras españolas viven aún entre un millón y medio ⁵ y 2,2 millones de emigrantes ⁶.

Esta evolución –crecimiento importante de la inmigración en España– empieza a generar en España un discurso similar al de otros países europeos con un porcentaje mucho mayor de extranjeros residentes, y comienzan a convertirse en habituales manifestaciones de racismo y xenofobia. El primer concepto es definido por la Real Academia Española como «exacerbación del sentido racial de un grupo étnico, especialmente cuando convive con otro u otros» o como «doctrina antropológica o política basada en ese sentimiento y que en ocasiones ha motivado la persecución de un grupo étnico considerado como inferior». Según la Academia, la xenofobia es el sentimiento de «odio, repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros». En íntima relación con estos sentimientos está también la intolerancia, que, según Patricia Barbadillo ⁷, está estrechamente relacionada a su vez con el miedo, la ignorancia, la incompre-

⁴ PATRICIA BARBADILLO GRINÁN. *Extranjería, racismo y xenofobia en la España contemporánea. La evolución de los setenta a los noventa*. Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Siglo XXI de España Editores, SA. Madrid, 1997. Pág. 180.

⁵ BARBADILLO. *Op. cit.*, pág. 180.

⁶ ELISEO AJA. *La inmigración extranjera en España. Los retos educativos*. Fundació La Caixa. Barcelona, 2000.

⁷ BARBADILLO. *Op. cit.*, págs. 2-3 y 33 a 35.

sión y la falta de respeto a la diversidad. La creencia en la superioridad de unos grupos, de unas razas o de unas nacionalidades sobre otras y los prejuicios que llevan a generalizar supuestos rasgos negativos de ciertos colectivos sociales están en el origen de la falta de respeto a la diversidad.

La evolución de España en los últimos veinte años no sólo se ha producido en las cifras. Ha cambiado también la percepción social de la extranjería y el mismo concepto de extranjero. En los años setenta, el extranjero representaba «el otro», «el diferente», «el extraño», «aquel que reunía toda una serie de características diferenciadoras que impedían su inclusión en el “nosotros”». El extranjero era el «no español», «aquel que es ajeno a lo nuestro, a nuestra realidad, a nuestras costumbres y nuestros hábitos; en definitiva, aquel que vive de otra manera y que no participa del conjunto de rituales simbólicos que contribuyen a reforzar nuestra cohesión como colectivo distinto y particular, salvo la pasiva condición de espectador»⁸. A finales de los años ochenta, sin embargo, se empieza a perfilar una nueva imagen de la extranjería vinculada directamente al fenómeno de la inmigración que continúa vigente en la década de los noventa y en la actualidad. «Lo que hoy inquieta o perturba del extranjero —dice Barbadillo— no es tanto su condición de “no español”, como su posible condición de inmigrante»⁹.

El rechazo al extranjero se convierte así en el rechazo al inmigrante, y especialmente al inmigrante que está más alejado del estilo de vida o de la cultura dominantes en la sociedad española. Es decir, los ciudadanos extranjeros comunitarios o latinoamericanos inspiran mayor simpatía o confianza que los procedentes de países árabes o del África negra. En el mismo plano de rechazo se sitúa una minoría cultural —los gitanos—, que es percibida por la sociedad española con características atribuidas a los inmigrantes extranjeros, pese a ser sus miembros españoles. Los gitanos se identifican con «el otro», «el diferente» que provoca recelo y desconfianza debido a una serie de estereotipos negativos sobre esa etnia extendidos en la sociedad española, que, en general, los considera pobres, marginados, delincuentes, mentirosos, que no quieren integrarse ni trabajar ni ir a la escuela. Mantiene hacia ellos, pues, una actitud segregacionista basada en la diferencia cultural.

Pese a una creencia generalizada, Barbadillo demuestra¹⁰ que el rechazo al extranjero no viene determinado por la situación de competencia en el merca-

⁸ BARBADILLO. *Op. cit.*, págs. 158 y 160.

⁹ BARBADILLO. *Op. cit.*, pág. 174.

¹⁰ BARBADILLO. *Op. cit.*, pág. 178.

do de trabajo. El extranjero no es percibido por la sociedad española como aquel que impide acceder a un puesto de trabajo, aunque muchas veces se declare lo contrario, sino que el rechazo se origina en el ámbito de los valores y las creencias. La misma autora destaca también el sentimiento de culpa que experimentan los ciudadanos españoles en su relación con los extranjeros. «Existe –afirma– una sensación generalizada de malestar, de injusticia, de reconocimiento de situaciones de marginación que no obtienen de la sociedad española el trato que, en la conciencia colectiva, se estima como “justo”. Sin embargo, la culpa no tiene capacidad para generar cambios importantes en la esfera de los valores que presiden la forma de intercambio con el extranjero»¹¹.

La sociedad española, en opinión de Barbadillo, ha reforzado en los últimos años «la tolerancia hacia las ideas y opiniones de los demás, pero ha restringido la tolerancia hacia las personas y sus ambientes». El valor libertad prima sobre el valor igualdad. Es decir, los españoles aceptan la libertad de las personas para decidir el país en el que desean vivir y trabajar, pero a continuación apoyan «una serie de restricciones que, básicamente, expresan la no vinculación personal con el inmigrante, la falta de compromiso o de implicación en la forma en que se desarrolla su vida, y la no asunción de responsabilidades hacia ese “otro”»¹².

El reflejo en los medios de comunicación

Estos valores dominantes en la sociedad española, y en concreto también en la catalana, se reflejan lógicamente en la actitud de los medios de comunicación ante las minorías étnicas, pero también, como recuerda Van Dijk, «la prensa influye poderosamente sobre las opiniones prevalentes acerca de los temas étnicos». Por tanto, «es muy importante que la información relativa a los asuntos étnicos sea periódicamente adecuada, responda a la multitud de temas relevantes en una sociedad multicultural y manifieste, en especial, una actitud de respeto hacia los inmigrantes, los refugiados y las minorías en general»¹³.

¿Ocurre realmente así en los medios de comunicación catalanes? Para intentar averiguarlo, analizaré en estas páginas algunos estudios existentes

¹¹ BARBADILLO. *Op. cit.*, pág. 178.

¹² BARBADILLO. *Op. cit.*, pág. 185.

¹³ VAN DIJK. *Op. cit.*, pág. 12.

sobre la cuestión y transcribiré las opiniones de sus responsables en estos temas. En primer lugar, es preciso acotar de qué minorías hablamos y, en segundo término, cuáles son los medios de comunicación concernidos.

Las minorías étnicas consideradas son las que previamente han sido definidas como aquellas que generan más rechazo o desconfianza en la sociedad, es decir, los inmigrantes procedentes de países árabes, y más concretamente del Magreb; los inmigrantes originarios del África negra, y los gitanos.

En cuanto a los medios de comunicación catalanes, aunque a veces es inevitable en estudios o análisis referirse al conjunto de España, he considerado especialmente los que son específicos de Cataluña, es decir, aquellos cuyas decisiones editoriales se toman en Barcelona, por la sencilla razón de que los medios nacionales que tienen edición en Cataluña sostienen en estas cuestiones la misma línea que sus casas madres. En concreto, en televisión, TV-3; en radio, Catalunya Ràdio y COM-Ràdio, y en prensa escrita, los diarios de Barcelona *La Vanguardia*, *El Periódico* y *Avui*, y *El Punt*, de Girona. Todos los medios audiovisuales mencionados son públicos (TV-3 y Catalunya Ràdio dependen de la Generalitat y COM-Ràdio de la Diputación de Barcelona) porque apenas inician ahora sus balbuceos los escasísimos medios audiovisuales de carácter privado estrictamente catalanes.

Las minorías en las televisiones

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha publicado recientemente un estudio titulado *La imatge de les minories ètniques a les televisions de Catalunya* (*La imagen de las minorías étnicas en las televisiones de Catalunya*)¹⁴, en el que analiza de forma cuantitativa y cualitativa –con estudios parciales sobre gitanos, magrebíes y africanos subsaharianos– el trato a estos grupos.

El estudio cuantitativo¹⁵ define en primer lugar qué es una minoría acudiendo al texto aprobado en 1952 por la Subcomisión para la Prevención y la Protección de las Minorías de la Organización de las Naciones Unidas, que considera minorías «...aquellos grupos no dominantes en una población, que tienen, y quieren preservar permanentemente, tradiciones o características étni-

¹⁴ *La imatge de les minories ètniques a les televisions de Catalunya*. Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC). Barcelona. Enero, 2000.

¹⁵ CARLES LÓPEZ y SOLEDAT BALAGUER. *La imatge de les minories ètniques a les televisions de Catalunya. Aproximació quantitativa*. CAC. Barcelona. Enero, 2000. Págs. 48 a 53.

cas, religiosas o lingüísticas marcadamente diferentes del resto de la población». Cita también el *Diccionario de Sociología* cuando dice que el término *minoría* «en Derecho Internacional se aplica a los grupos instalados en determinados territorios que se diferencian del resto de los súbditos del Estado por sus características culturales o étnicas»¹⁶, y el estudio *Minories ètniques i premsa europea d'elit* (*Minorías étnicas y prensa europea de élite*)¹⁷. Según este estudio de Rodrigo Alsina y Martínez Nicolás, las características de una minoría étnica son: 1) El grupo es percibido por la mayoría de la sociedad como diferente a partir de alguna combinación de los rasgos siguientes: lengua, raza, religión y territorio de origen. 2) Las personas de la minoría étnica están en una situación de poder no equitativa en relación con los ciudadanos de otros grupos étnicos. 3) Los miembros de la minoría étnica se perciben a sí mismos como diferentes. 4) Los componentes de la minoría étnica participan en actividades compartidas que han sido construidas en torno de su (real o mítico) origen común y de su cultura.

Estas razones determinaron la inclusión en el estudio del CAC de los africanos subsaharianos y los magrebíes, así como los gitanos, por los mismos motivos ya mencionados anteriormente. El estudio abarca la programación de las siete cadenas generalistas herzianas terrestres que se ven en Catalunya (TVE-1, La 2, TV-3, Canal 33, Telecinco, Antena 3 y Canal +), entre las ocho de la mañana y las doce de la noche durante la semana del 19 al 25 de septiembre de 1998, un total de 784 horas de las que se seleccionaron 112 horas en las que aparecían las minorías objeto del trabajo.

En el apartado de Noticias, la minoría más presente fue la del África negra, con un 62 % del total de noticias, mientras que los gitanos sólo ocupan poco más del 5 %. El porcentaje más importante de noticias corresponde a temas de inmigración, con más de un 40 % (un 50 % de las referidas a África negra), mientras que un 62,5 % de las noticias referidas a los gitanos son de sucesos, y un 36 % de las noticias del Magreb tratan de derechos humanos. El 61 % de las noticias de minorías son de Internacional, no hay ninguna de Economía y sólo en dos ocasiones constituyen la apertura del informativo. De

¹⁶ SALVADOR GINER, EMILIO LAMO DE ESPINOSA y CRISTÓBAL TORRES. Alianza Editorial. Madrid, 1998. Citado por Carles López y Soledat Balaguer. *Op. cit.*, pág. 48.

¹⁷ RODRIGO ALSINA y MARTÍNEZ NICOLÁS. «Minories ètniques i premsa europea d'elit». Revista *Anàlisi. Quaderns de Comunicació i Cultura*, del Departamento de Periodismo y de Ciencias de la Comunicación de la UAB. Barcelona, 1997. Citado por Carles López y Soledat Balaguer. *Op. cit.*, pág. 48.

un total de 154 noticias, 125 (más del 80 %) ocupan lugares secundarios. Las cadenas públicas prestan más atención a las minorías que las privadas (TVE-1 y TV-3 acaparan casi un 25 %), pero en más del 60 % de los casos se habla de diferentes minorías sin su intervención directa.

En cuanto a los personajes pertenecientes a minorías, sólo 4 (todos del África negra) de 82 obtienen una percepción negativa. Los magrebíes obtienen una percepción positiva o neutra en todos los casos, y los gitanos obtienen todos una percepción positiva. En conjunto, el 55 % de los personajes obtienen una percepción positiva; el 40 %, neutra, y sólo el 5 % negativa.

De las 238 secuencias referenciadas, más de un 60 % corresponden a África negra, un 30 % al Magreb y un 5 % al pueblo gitano, sólo en dos se observa el uso de términos estereotipados y únicamente en 13 se detecta la utilización de lenguaje *primitivo*.

Las conclusiones de este estudio cuantitativo –cuyas limitaciones son conocidas– pueden resumirse así: la etnia gitana tiene, en general, poca presencia, pero con una visión positiva; magrebíes y africanos tienen un tratamiento similar, citando en todos los casos el origen étnico y con pocas referencias culturales o de contexto que ayuden a entender los conflictos que protagonizan; la visión eurocéntrica está presente, sobre todo en los documentales, mientras que los reportajes sobre el terreno resaltan la situación de subdesarrollo desde parámetros occidentales. La visión general positiva o neutra significa que las minorías representadas están formadas por «buenos» y no hay «malos», excepto los fundamentalistas islámicos y los dictadores del África negra. Esta visión, concluye el estudio, también formaría parte de un nuevo estereotipo.

Los africanos

El primero de los estudios cualitativos¹⁸ estudia la presencia de los africanos subsaharianos y del África negra en las televisiones que se reciben en Cataluña durante la cuarta semana del mes de septiembre de 1998, así como en determinados programas emitidos en el curso del mismo año. En total, son 132 horas de programación. Las conclusiones aprecian una creciente preocupación por mejorar el tratamiento que recibe África. En la información cultural se

¹⁸ LOLA LÓPEZ y GUSTAU GUERIN (Centre d'Estudis Africans). *La imatge de l'Àfrica negra a les televisions*. CAC. Barcelona. Enero, 2000. Págs. 3-4 y 11 a 14.

observa una especial sensibilidad por el tema de la inmigración, sin discriminar a los africanos, y lo mismo ocurre en la información deportiva. Sin embargo, los espacios dedicados a la política africana tienen una cierta tendencia catastrofista. De momento, dice el estudio, no se ha producido una auténtica ruptura con la imagen clásica de los africanos, de carácter racista.

Muchos de los estereotipos que presentan al continente africano como un medio hostil o un medio «natural» se mantienen. Los documentales y algunas teleseries presentan a los africanos con discursos etnocéntricos y en algunos casos hasta racistas, pero donde la imagen estereotipada es especialmente grave es en las películas, que muchas veces ofrecen «una visión negativa y ridícula del continente y de sus sociedades», señala el estudio. África es frecuentemente un continente extraño habitado por personas que practican raras costumbres. La publicidad y algunas teleseries presentan también una visión estereotipada del negro, aunque intentando que sea positiva.

Dentro de un tratamiento que oscila actualmente entre la corrección política y los mensajes alarmistas, el análisis destaca la aproximación catastrofista a la realidad de África, donde no parece que ocurra nada bueno: los programas están centrados habitualmente en problemas sociales o en catástrofes naturales. «En muchos casos, se eligen las imágenes más cruentas, se generalizan hechos aislados o se utiliza un vocabulario impactante para reforzar el dramatismo». La herencia colonial se traduce, por otra parte, en un tratamiento paternalista, de carácter ya no racista, sino cultural, reflejado en la idea de que los africanos son inferiores a los europeos y, por tanto, necesitan la ayuda occidental para mejorar su situación. Se observa, sobre todo, en programas religiosos, en la gran mayoría de las películas –protagonizadas por europeos, con los africanos desarrollando labores secundarias–, en bastantes documentales y en algunas teleseries.

Últimamente ha aumentado la calidad y la sensibilidad en el tratamiento de los temas de la inmigración, sobre todo en los programas dedicados específicamente al fenómeno. También los valores de la solidaridad y de la cooperación internacional están cada vez más presentes en las televisiones, y se empiezan a utilizar incluso como argumento publicitario.

Esta nueva imagen de África es, no obstante, una consecuencia del pasado colonial y de su revisión crítica. Por una parte, al negro se le considera bien dotado para los deportes, la música, la danza y la fiesta, y, por otra, refleja el sentimiento de culpa de los europeos hacia las poblaciones africanas, con lo que se genera el nuevo tópico del negro bueno. «El mayor peligro –dice el

estudio— que comporta la nueva imagen estereotipada del negro es una resurrección del esencialismo (...). Pese a que la nueva visión de los africanos se presenta como antirracista, fomenta un nuevo tipo de discriminación al dar más importancia al color de la piel de un individuo que a sus características personales. Este tratamiento es muy frecuente en la publicidad, en los programas infantiles y en las teleseries norteamericanas, pero comienza a extenderse a los debates y a las teleseries españolas».

Los magrebíes

Para analizar la imagen de la minoría magrebí —una de las más rechazadas, según todas las encuestas—, el estudio cualitativo encargado por el CAC¹⁹ se basó en el trabajo cuantitativo del propio CAC consistente en recoger toda la información sobre el Magreb y el Islam emitida por las siete cadenas antes mencionadas durante 1998. En total, el estudio cualitativo analizó 93 noticias relacionadas con el Magreb: 48 referentes a la inmigración, 34 a Argelia, y el resto a otros temas.

El estudio obtiene unos resultados mucho más esperanzadores que en el caso anterior. Los viejos estereotipos que perviven muy posiblemente entre la gente, no aparecen en la información televisiva: la única excepción, según los autores, es la aparición del término *ilegal* para referirse a los inmigrantes clandestinos. Tampoco se observan valoraciones de comportamientos atribuibles a unas supuestas características étnicas. Sin embargo, se destacan los aspectos más dramáticos de la relación entre la inmigración y la pobreza y se echa en falta un mayor conocimiento de la cultura islámica y magrebí en los informativos diarios.

En los programas analizados —hay que recordar que se trata de 1998— había pocas referencias al impacto en la población de la presencia de los inmigrantes, dato que variaría probablemente si el estudio abarcara también los dos años posteriores, en los que han empezado a proliferar los conflictos de este tipo: El Ejido, Lepe, Terrassa, Totana, etcétera.

Aunque las noticias del Magreb son escasas y parciales, en relación a la importancia económica, social e histórica de la región para España, el tono de

¹⁹ ALFONSO CARLOS BOLADO, CARLES BRUCET, JUAN MANUEL MEDINA y YOLANDA ONGHENNA. *La imatge del Magrib a les televisions de Catalunya*. CAC. Barcelona. Enero, 2000. Págs. 33-34 y 45 a 47.

la inmensa mayoría es políticamente correcto. «En ningún caso –dice el estudio– se critica a los musulmanes en general y a los magrebíes en concreto por el hecho de serlo; ni tampoco se los califica por las consecuencias de la pobreza o de la ignorancia más allá del apunte sociológico», con excepción de los islamistas radicales argelinos.

Pero en este caso se cae también en el paternalismo. «El desprecio, teñido de miedo, del otro ha sido sustituido con la más bienintencionada amabilidad. Se ha transformado en paternalismo y autocomplacencia». Los autores creen, de todas formas, que es difícil escapar del paternalismo porque algunos de los elementos que lo inducen son ciertos y estiman que los defectos de la información sobre el Magreb son más fruto del desconocimiento que de una actitud más o menos malévola.

El pueblo gitano

El estudio cualitativo sobre el tratamiento de los gitanos en las televisiones en Cataluña²⁰ empieza por reconocer que el pueblo romaní se siente bastante comprendido y aceptado en esta comunidad, donde no hay tantos problemas de convivencia como en otras zonas de Europa.

Del análisis de 39,5 horas de televisión dedicadas a la comunidad gitana en 1998 en las siete cadenas que se ven en Cataluña se desprende que existe aún un enorme desconocimiento de la realidad gitana; se generaliza en exceso; los gitanos no se utilizan como fuente informativa en muchos de los programas a ellos dedicados; la información tiene casi siempre un enfoque social, y se percibe que en las redacciones no hay periodistas especializados en materia de racismo, xenofobia y minorías étnicas, incluida la comunidad gitana, por lo que los temas gitanos se tratan con poca profundidad.

Los estereotipos heredados describen a los gitanos como «delincuentes, indigentes o traficantes de droga», que engañan al resto de los ciudadanos o «son artistas salvajes». En ocasiones, señala el estudio, aparecen en la televisión documentos periodísticos manifiestamente racistas. Las generalizaciones injustas se traducen en que la delincuencia, la pelea, el don artístico, la mendicidad y las barracas son consustanciales al pueblo gitano.

²⁰ SERGI RODRÍGUEZ y SEBASTIÁN PORRAS. *El tractament del poble gitano a la televisió a Catalunya, 1998*. CAC. Barcelona. Enero, 2000. Págs. 19-20 y 25 a 27.

Las informaciones relacionadas con los gitanos se emiten casi siempre en las secciones de sociedad y sucesos, alguna vez en la de espectáculos y raramente en las de cultura, economía o religión. «Los gitanos aparecen como personas con unas costumbres, más que como una comunidad con una cultura».

Los autores se detienen en nueve programas, de los cuales tres son de TV-3. Dos obtienen un buen calificación y el tercero recibe duras críticas, entre otras la de que se hace referencia al origen étnico de los protagonistas de la noticia del atropello por un vehículo de un niño y el posterior linchamiento del conductor en el barrio de Nazaret, de Valencia. En este sentido, Francesc Vallverdú, asesor lingüístico de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV), el organismo que engloba a la televisión –TV-3– y a la radio autonómicas –Catalunya Ràdio–, recomienda que «el término *gitano-a* sólo habría de ser usado en un contexto en que el aspecto étnico o cultural fuera relevante para la noticia». También rechaza la expresión «de raza gitana» e incluso la de «etnia gitana». Asimismo, declara «absolutamente inadmisibile» el uso de *paio-a* (payo en castellano) porque en catalán significa una cosa distinta y porque «es una designación caló netamente racista (es cierto, a la defensiva, pero al fin y al cabo, racista)»²¹.

TV-3 no dispone hasta el momento de un libro de estilo que aborde estos temas, aunque se está culminando su elaboración. El director de Informativos de la cadena, Josep Maria Torrent, tiene claro que la inmigración es «uno de los temas de los próximos años»²². Tiene claro asimismo que por inmigración se entiende la que procede de fuera de las fronteras españolas y no se puede utilizar el término para los catalanes procedentes de otras zonas de España, como ocurría a veces hasta 1993-94. En espera de las normas que recogerá el futuro libro de estilo, TV-3 intenta respetar la diferencia, según Torrent, y evitar las connotaciones peyorativas, «aunque a veces se cuelan cosas», como el término *ilegal*, que está prohibido en los informativos siguiendo la recomendación del Colegio de Periodistas de Cataluña. De todas formas, opina que *sin papeles*, que suele sustituir a *ilegales*, es «forzado y extraño, es una terminología importada de Francia». En cualquier caso, el director de Informativos de TV-3 prefiere *ilegales* a *indocumentados*, un término que también se utiliza.

²¹ FRANCESC VALLVERDÚ. *El català estàndard i els mitjans audiovisuals*. Televisió de Catalunya. Edicions 62. Barcelona, 2000. Pags. 93 y 99.

²² Entrevista con el autor. Mayo, 2000.

Otro trabajo sobre el trato de los medios de comunicación al pueblo gitano, del que es autor el presidente de la Unión Romaní y ex diputado Juan de Dios Ramírez-Heredia, abunda en las consideraciones del estudio sobre las televisiones²³ –los gitanos no son fuente informativa, la realidad gitana se aborda desde un punto de vista social, no hay especialistas, falta profundización– y añade otras. La prensa española, dice Ramírez-Heredia, rara vez publica en portada informaciones relacionadas con la comunidad gitana y «cuando lo hace es para destacar casi siempre asuntos que llaman la atención por su componente espectacular o morboso, como son las reyertas, la incautación de partidas de droga o, muy escasamente, la muerte de algún gitano famoso». Como también hacía el estudio sobre las televisiones, este análisis de la prensa destaca que «la utilización del término *gitano* es perversa en muchas ocasiones». Y asegura que «se da prioridad a los temas que dan pie al sensacionalismo o al morbo, por su espectacularidad, más que los que abordan desde una óptica positiva la vida de los miembros de la comunidad gitana». Esta queja viene avalada por el dato de que el 32 % de las noticias sobre gitanos fueron tratadas negativamente en el período 1995-96, según el análisis de las informaciones aparecidas en esos dos años –suelen publicarse entre 3.000 y 3.500 anuales– en 124 medios de comunicación españoles. Este porcentaje era considerado «preocupante» por Ramírez-Heredia, quien, sin embargo, reconocía que el 68 % restante fueron escritas en un sentido positivo.

Noticias negativas

En el curso *Comunicar la diferencia: cómo tratar en los medios de comunicación los problemas sociales*, celebrado en agosto de 1998 en El Escorial, la investigadora del CIPIE (Centro de Investigaciones, Promoción y Cooperación Interterritorial) Carmen de Miguel cifró en el 24 % el porcentaje de sucesos violentos y noticias negativas del conjunto de noticias aparecidas en la prensa española sobre inmigración y racismo entre abril y junio de ese año. La mayoría de ese 24 % se refería a redes y mafias, delitos cometidos por inmigrantes, estafas con documentaciones falsas y violencia hacia los inmigrantes. Un 28 % de las noticias hacían referencia a pateras, polizones, expulsiones, detenciones y control aduanero; casi un 14 %, a la actividad gubernamental en

²³ JUAN DE DIOS RAMÍREZ-HEREDIA. *La prensa española ante el pueblo gitano*. Citado por el informe anual de SOS Racismo. *Op. cit.*, págs. 199 a 201.

esta materia, y un 15 %, a las acciones de las organizaciones no gubernamentales (ONG).

Conclusiones similares se obtenían en otro estudio, titulado *Tratamiento de los inmigrantes no comunitarios en los medios de comunicación de Catalunya. 1996*, elaborado por el grupo de investigación Migración y Comunicación del Departamento de Comunicación Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y dirigido por Nicolás Lorite²⁴. El estudio analiza, entre el 22 de enero y el 18 de febrero, y entre el 6 de marzo y el 2 de junio de 1996, seis diarios (*El Periódico de Catalunya*, *La Vanguardia*, *El País*, *Avui*, *El Mundo* y *Abc*), los informativos de televisión de lunes a viernes en sus emisiones de tarde y noche, y los informativos radiofónicos de tarde de lunes a viernes. La cantidad de noticias sobre estos temas es, según el trabajo, «prácticamente insignificante». Pero de su análisis se desprende que las noticias referentes a inmigrantes no comunitarios están relacionadas con aspectos negativos, conflictivos o burocráticos; hay un olvido casi generalizado de los aspectos positivos; los inmigrantes carecen de voz como protagonistas, y priman las fuentes oficiales al elaborar las informaciones. A veces se juntan imágenes folclóricas y policíacas con informaciones en las que se hace referencia a los inmigrantes como sujetos pasivos y poco cualificados. En otras ocasiones, sigue el análisis, se distorsiona la noticia al ubicarla junto a otra información negativa o en secciones relacionadas con catástrofes naturales, crímenes o cualquier otra situación de índole negativa.

Los medios se defienden

Todas estas críticas responden a una situación real, aunque no siempre son igual de atinadas, muchas veces pecan de lo mismo que denuncian –la generalización, en este caso de los medios de comunicación– y no reconocen las dificultades con que tropiezan los medios, la precariedad con que trabajan –rapidez, escasez de fuentes, etcétera– o el esfuerzo que hacen algunos de ellos para mejorar el tratamiento de estos temas.

Los responsables de este tipo de información en *El Periódico de Catalunya*²⁵ aducen, por ejemplo, que hasta principios de los años noventa sólo

²⁴ NICOLÁS LORITE. *Tratamiento de los inmigrantes no comunitarios en los medios de comunicación de Catalunya. 1996*. Departamento de Comunicación Audiovisual de la UAB. Barcelona, 1996.

²⁵ Entrevista con el autor. Mayo, 2000.

existían las fuentes policiales, que proporcionaban una información sesgada y sin contextualizar, pero muy difícil de contrastar con otras fuentes. No había asociaciones de inmigrantes que funcionaran correctamente y todavía hoy las que existen no están muy bien organizadas, a excepción de SOS Racismo. La embajada o el consulado del país de origen del inmigrante no es tampoco habitualmente una buena fuente de información. Durante años, ha suplido estas carencias el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) y su organismo CITE (Centro de Información de Trabajadores Extranjeros).

La acusación de que la mayoría de las noticias son negativas, siendo cierta, se ha convertido ya en un tópico en sí misma, y debe ser matizada en el sentido de que prácticamente todas las noticias, por definición, son negativas. La noticia es la novedad y habitualmente las novedades tienen un componente negativo, de conflicto, porque la normalidad, que significa aburrimiento y todo va bien, no es noticia.

En cuanto a las críticas sobre la ubicación de las noticias de minorías o de inmigración junto a otras de carácter negativo, cualquiera que conozca cómo trabajan los medios de comunicación convendrá que eso no se produce ni más ni menos que con otro tipo de noticias y, desde luego, no de forma intencionada.

Todos los responsables de los medios de comunicación consultados coinciden en señalar la falta de normas escritas sobre el lenguaje de tratamiento de las minorías. En efecto, en el libro de estilo de *El País*²⁶ sólo hay una referencia que puede tener relación con este tema. En el apartado de *Expresiones malsonantes*, se afirma: «Nunca deben utilizarse palabras o frases que resulten ofensivas para una comunidad. Por ejemplo, *le hizo una judiada*, *le engañó como a un chino*, *eso es una gitanería*».

En el libro de estilo de *El Periódico de Catalunya*, se pueden encontrar tres referencias²⁷. La primera, en la entrada de *gitano*, donde se dice: «Los gitanos no constituyen una raza, por mucho que lo diga la Real Academia Española, sino una etnia. El hecho de que un individuo sea gitano no habrá de citarse en una información, salvo que sea fundamental para la comprensión de ésta. Quedan proscritas todas las expresiones que implican una forma de racismo: gitanería, gitanada, etcétera.» La segunda referencia está en la entrada *negro*, donde se puede leer: «No se debe mencionar que una persona es de raza

²⁶ *Libro de estilo. El País*. 11.ª edición. Ediciones El País, S. A. Madrid, 1996. Pág. 29.

²⁷ *Libro de estilo. El Periódico de Catalunya*. Ediciones Primera Plana, S. A. Barcelona, 1997. Págs. 111, 161 y 195.

negra a no ser que constituya un elemento importante de la información. Quedan prohibidas todas las expresiones despectivas que incluyan este término». La tercera referencia se halla en el término *racismo*: «Queda prohibida toda expresión que implique un tinte racista, salvo que corresponda a una cita textual. En los titulares no debe hacerse mención de la etnia u origen nacional de las personas salvo que esa circunstancia sea fundamental en la noticia. Esta norma debe ser especialmente respetada en cuanto se refiere a las informaciones sobre actos delictivos.»

Los demás medios de comunicación catalanes objeto de este trabajo, o no tienen libro de estilo o en él no hay referencias sobre el lenguaje y las minorías. *La Vanguardia* se rige por el sentido común y por la aplicación, con matices, del lenguaje políticamente correcto que, según su jefe de Edición, Magí Camps ²⁸, «pretende evitar la identificación innecesaria de algunos colectivos de otras etnias cuando este dato no es relevante desde un punto de vista informativo. Ahora bien –añade–, por la idiosincrasia de nuestra sociedad, mayoritariamente blanca, los rasgos étnicos acostumbran a ser pertinentes desde un punto de vista informativo, por lo que no debemos escatimar al lector un aspecto de la información que puede ser complementario». Camps precisa que «en la busca del equilibrio entre información y lenguaje políticamente correcto no debemos caer en eufemismos ridículos. Un blanco es un blanco, un negro es un negro y todos somos de color». Igualmente, explica que «el eufemismo *etnia gitana* puede ser pertinente en algunos casos, pero no debemos caer en el abuso. Los gitanos están muy orgullosos de serlo, por lo que la palabra *gitano* es sólo un insulto en último término». En cuanto al conflictivo término *ilegal*, el diario *La Vanguardia* se adhiere a la campaña lanzada por el Colegio de Periodistas de Cataluña *No em diguis il.legal, sóc persona com tu* (*No me lla- mes ilegal, soy una persona como tú*). «Además –recuerda el jefe de Edición– lingüísticamente es incorrecto: las personas no pueden ser ilegales, lo son las conductas o los actos, pero no los individuos. Como mucho, pueden estar en situación ilegal, sin papeles, sin documentación, en situación irregular, sin permiso de residencia, etcétera. Somos conscientes de que la palabra *ilegal* resulta muy cómoda para titular, pero vale la pena hacer un esfuerzo y evitarla como sustantivo o calificativo de persona.»

Para el director del diario en catalán *Avui*, Vicent Sanchis, «el problema no es tanto el término, sino cómo se usa», es decir, «que nunca hay que utilizar

²⁸ Entrevista con el autor. Mayo, 2000.

una palabra como insulto», y recuerda en este sentido la evolución contradictoria del lenguaje políticamente correcto con algunos ejemplos: «Primero se decía *ciego*, después se dijo *invidente* y ahora parece que se vuelve a preferir *ciego*. Antes se decía *subnormal*, después *minusválido*, ahora *discapacitado*, etcétera.» En su periódico no hay normas escritas, sino discusión constante sobre estas cuestiones, aunque, insiste, «a veces no es problema de semántica, sino de concepto». El director de *Avui* sostiene que el objetivo es «promover la integración y ayudar al débil o al desvalido», incluyendo a los inmigrantes o a las minorías, que suelen estar en esa situación en nuestra sociedad. «Cuando se escapan cosas, como palabras mal usadas, se rectifica o se corrige *a posteriori*», concluye²⁹.

Los representantes de la radio destacan igualmente la falta de normas internas en cada medio para abordar el tratamiento de las minorías. Joan Catà, jefe de Informativos de COM-Ràdio³⁰, acude también al sentido común y a los criterios generales emanados del Colegio de Periodistas para explicar la actitud de su cadena de radio. En espera de un libro de estilo que actualmente se está elaborando, aprecia en los medios públicos una mayor preocupación por estas cuestiones que en los privados. Esta sensibilidad es mayor –estima– en los informativos que en los programas de otro tipo. Catà destaca que debe primar siempre el valor informativo de un dato sobre la inclusión en las informaciones de características étnicas irrelevantes. Pero reconoce la dificultad de hacerlo. «En el caso de los incidentes xenófobos ocurridos en julio de 1999 en el barrio de Ca n' Anglada de Terrassa, ¿cómo huir del *nosotros* y *ellos*? ¿Había que decir *catalanes* y *magrebíes* cuando *ellos* también son catalanes?». El jefe de Informativos de COM-Ràdio, sin embargo, considera que en las Redacciones existe bastante sensibilidad ante estos temas, «a veces incluso excesiva», apunta, en referencia a los excesos del lenguaje políticamente correcto, y se muestra partidario de la existencia de un código de normas sobre el tratamiento de las minorías. «Intentamos corregir el lenguaje de agencia cuando no es adecuado y, sobre todo, el de la policía», señala.

Oriol Camps, jefe de la Unitat d'Actuació Lingüística (Unidad de Actuación Lingüística) de Catalunya Ràdio³¹, coincide en la falta de normas escritas, aunque subraya que no hay en la cadena de emisoras grandes conflictos ni

²⁹ Entrevista con el autor. Mayo, 2000.

³⁰ Entrevista con el autor. Mayo, 2000.

³¹ Entrevista con el autor. Mayo, 2000.

grandes debates sobre estos temas. La regla general, que goza de amplio consenso, consiste en la aplicación del sentido común y en el máximo respeto de los colectivos minoritarios. «La mención de la etnia sólo se incluye si tiene interés informativo, y es preferible la nacionalidad a la etnia. El término *ilegal* referido a los inmigrantes no se utiliza; es mejor *sin papeles* aunque complica la expresión.» Camps destaca que debe buscarse la mejor forma de expresar un concepto «procurando no ser insultante». De todas formas, reconoce asimismo la excesiva sensibilización que a veces se produce entre determinados colectivos. «También se dice *la policía busca a un belga...* y ello no significa que sea un ataque a los belgas», asegura. La velocidad con que hay que trabajar en la radio es un factor que influye también en la utilización del lenguaje. En ocasiones, el mal uso de algún término se debe a la precipitación con que se corrige. La Redacción analiza posteriormente lo ocurrido para que no se repita el error.

Las recomendaciones

Para que el trato a las minorías mejore debe producirse una evolución en la sociedad española, en general, y catalana, en particular, que se traduzca luego como reflejo en los medios de comunicación, pero también los periodistas y los responsables de esos medios deberían aplicar —de hecho, muchas veces ya lo hacen— una serie de recomendaciones surgidas de sus propios organismos profesionales y de las organizaciones que representan a los inmigrantes o a las comunidades minoritarias.

La principal en el ámbito de la sociedad es la actuación sobre el sistema educativo, ya que «podemos establecer una correlación positiva entre mayores niveles educativos y tolerancia o comprensión hacia la diversidad humana, percibida no tanto como perturbación o crítica hacia lo propio, sino más bien como alternativa sugerente»³². En las conclusiones de su investigación sobre extranjería, racismo y xenofobia en España, Patricia Barbadillo afirma que «junto a las medidas que favorecen la inserción del extranjero, que deberían ofrecerle la oportunidad de acceder al conocimiento de nuestra realidad, deben configurarse medidas de respeto que garanticen la posibilidad de que el extranjero pueda mantener aquellas pautas culturales que le son propias». Para ello, es imprescindible el ejercicio de la tolerancia, que «constituye un acto intencional, que demanda respeto para aquello que no compartimos; que implica, en

³² BARBADILLO. *Op. cit.*, pág. 195.

consecuencia, la aceptación de hábitos y modos de vida de los que no participamos». «En todo caso –añade Barbadillo–, la posibilidad de enriquecimiento que ofrece la diferencia está anclada, justamente, en la comprensión y en la tolerancia para asumir formas de vida que nos son ajenas, que nos son extrañas»³³.

Para los medios de comunicación, los diferentes estudios consultados ofrecen una serie de recomendaciones, algunas iguales y otras distintas según la minoría de que se trate.

El trabajo dirigido por Ramírez-Heredia aconseja, en primer lugar, que las personas implicadas en la producción informativa (empresas, profesionales), las organizaciones gitanas y las instituciones que trabajan por la promoción social de los gitanos adopten un compromiso conjunto para tratar de mejorar el tratamiento de los gitanos en la prensa. En segundo lugar, las organizaciones gitanas deberían convertirse en asesoras autorizadas o interlocutoras válidas de los medios para los temas relacionados con esa etnia. Además, el estudio propone promover la formación de los profesionales de la información en el terreno del racismo, la xenofobia y las minorías étnicas; evitar las generalizaciones, no mencionar el origen étnico si no es estrictamente necesario, tratar «en positivo» las informaciones, contrastar las informaciones con las personas directamente implicadas; y promover la elaboración de estatutos de redacción o códigos deontológicos dentro de las empresas periodísticas que recojan unos principios de conducta éticos en relación con las minorías étnicas³⁴.

En referencia más concreta a las televisiones, el trabajo del CAC sobre los gitanos³⁵ insta a: tomar conciencia del potencial que la televisión tiene en el fomento o en la limitación de actitudes discriminatorias; constituir consejos asesores de las empresas audiovisuales con presencia de las minorías; aprovechar las posibilidades formativas de la televisión infantil para educar en la tolerancia y la muticulturalidad; fomentar la presencia de las minorías en programas informativos de carácter general que no afecten específicamente a las minorías para normalizar la presencia de éstas en el medio; eliminar el sensacionalismo; incluir citas de personas cualificadas y expertas en el tema que se trate; presentar las noticias o los reportajes de forma correcta y respetuosa;

³³ BARBADILLO. *Op. cit.*, pág. 195.

³⁴ RAMÍREZ-HEREDIA. *Op. cit.*, págs. 202 y 203.

³⁵ SERGI RODRÍGUEZ y SEBASTIÁN PORRAS. *Op. cit.*, págs. 28 y 29.

controlar en los programas de participación o de debate las intervenciones que promueven visiones negativas de las minorías, y evitar la inclusión de imágenes no pertinentes.

El estudio del CAC sobre África ³⁶ sugiere el incremento de la presencia del continente en los más diversos programas de televisión; la huida de cualquier tipo de paternalismo; la participación directa de africanos en los programas; el combate contra el etnocentrismo; el aumento de la colaboración entre las televisiones que se ven en Cataluña y la industria cinematográfica africana; el estudio de la conveniencia de proyectar películas africanas, coproducir reportajes con televisiones africanas, realizar conjuntamente programas y contratar a profesionales africanos para los rodajes en el continente; la eliminación de la programación de los espacios que sean poco respetuosos con la realidad africana, y el incremento de la ayuda a las producciones locales de temática africana. Para estas últimas, el informe recomienda limitar el exotismo; elegir temas que reflejen aspectos positivos de las sociedades africanas; abordar los problemas que preocupan a esas sociedades; suprimir cualquier signo de etnocentrismo; evitar excesos melodramáticos; mejorar el uso del lenguaje evitando expresiones racistas o etnocéntricas; y mejorar la documentación relativa al continente africano.

Estas recomendaciones no impiden que el estudio reconozca que las producciones locales muestran mucha preocupación por no reproducir imágenes tóxicas, admita que se ha incrementado sustancialmente el número de programas que ofrecen una visión más correcta del continente africano, y alerte de que un exceso de dirigismo sobre los realizadores de los programas puede ir en detrimento de la calidad de la programación.

El trabajo del CAC sobre el Magreb ³⁷ hace unas interesantes reflexiones sobre el lenguaje políticamente correcto que «corre el riesgo –y cae en ocasiones– de convertirse en un lenguaje artificioso, destinado a ser poco creíble». Tras reconocer el avance que la corrección política ha significado en el trato a las minorías, los autores afirman que, como forma de autocensura, puede llegar a paralizar al periodista. «El concepto en sí mismo tiene un cierto regusto etnocéntrico; remite a valores, como la tolerancia o la comprensión, de los que somos conscientes que sólo pueden ser ejercidos desde una posición de supe-

³⁶ LOLA LÓPEZ y GUSTAU GUERIN. *Op. cit.*, págs. 14 y 15.

³⁷ ALFONSO CARLOS BOLADO y otros. *Op. cit.*, pág. 31.

rioridad; el respeto parece así como una concesión, destinada, sobre todo, a nuestra gratificación moral y con un cierto tono paternalista.»

Con las aportaciones del estudio cuantitativo, y de los cualitativos sobre África, el pueblo gitano y el Magreb, el pleno del CAC, en su reunión celebrada el 14 de junio de 1999, emitió por unanimidad un dictamen dirigido a las televisiones de Cataluña, a las que recomienda ³⁸:

1. PROGRAMAS INFORMATIVOS.

- Eliminar cualquier referencia al origen étnico de las personas siempre que no sea imprescindible para la comprensión de la noticia, ya que la condición étnica de las personas no determina su comportamiento.

- Los redactores de los informativos procurarán explicar las noticias referentes a las minorías étnicas dotándolas de los suficientes elementos para facilitar al telespectador la comprensión de las mismas en un contexto general y se evitará la ilustración de las noticias con imágenes que no se correspondan con los hechos explicados.

- Favorecer la emisión de noticias de otros ámbitos que no sean los de la inmigración, la delincuencia, los derechos humanos, las guerras.

- Velar por una correcta utilización de conceptos y evitar el uso de sinónimos que no lo son.

2. PROGRAMAS DOCUMENTALES.

- Los programas documentales no han de primar en exceso los reportajes etnográficos.

- Acentuar las opiniones de los interesados por encima de los comentarios en *off* o de las opiniones de europeos supuestamente expertos en la realización de documentales de producción propia.

- Programar preferentemente aquellas obras que no se limitan a resaltar los rasgos socio-económicos y culturales más *diferentes*.

3. PROGRAMAS DE DEBATE.

- Procurar siempre una presencia activa de representantes de las etnias analizadas cuando el debate verse en torno a problemáticas que les afecten.

³⁸ Dictamen 1/99 del CAC sobre el tractament de les minories ètniques a la televisió. *Op. cit.*, págs. 54 a 56.

- Incorporar personas competentes de las diferentes minorías estudiadas en debates que no tengan que ver estrictamente con los supuestos *problemas* que les afectan y promover también la presencia de mujeres de las diferentes etnias.

4. PROGRAMAS DE FICCIÓN (TELESERIES, TELEFILMES, PELÍCULAS)

- Animar a las diferentes cadenas a continuar la línea observada en la ficción dirigida a los niños: las minorías analizadas tienen una presencia, aunque minoritaria, absolutamente normalizada y positiva.

- Propiciar un mayor cuidado en la selección y compra de producciones audiovisuales de producción ajena dirigidas a todos los públicos para que la presencia de las minorías étnicas responda también a una visión normalizada.

- Incorporar a las teleseries y telefilmes de producción propia representantes de las minorías analizadas desarrollando *roles* normalizados.

Un seminario sobre estos temas celebrado del 27 al 29 de septiembre de 1995 en Estrasburgo (Francia), bajo el título *Derechos culturales, medios de comunicación y minorías*, consideró necesario el mantenimiento y el desarrollo de medios públicos para compensar el deslizamiento del derecho a la libertad de expresión hacia el derecho a la libertad de mercado y para conservar un estilo de hacer televisión y radio, dada la progresiva privatización de la industria mediática en toda Europa. En este sentido, uno de los participantes, Peter Wien, asesor del director de programas de la cadena franco-alemana ARTE –un ejemplo positivo en el tratamiento de estos temas–, explicó el caso de Alemania, donde existen leyes muy precisas sobre el tratamiento de las minorías y las mayorías en la radio y la televisión públicas.

Las televisiones públicas, y algunas privadas, asociadas en la Unión Europea de Radiodifusión (UER) se han preocupado en los últimos años por el trato a las minorías y por su representación mediante la adopción de declaraciones y códigos de conducta. La declaración de la UER, aprobada en octubre de 1994, establece que los asociados están obligados a «servir a la totalidad de la población de su país ofreciendo programas destinados a todas las capas de la población, incluidas las minorías». En otro punto, se insta a no ahorrar esfuerzos «para reflejar fielmente en nuestros programas y en nuestro personal la diversidad del carácter cultural, racial y lingüístico de nuestras sociedades»³⁹.

³⁹ *Droits culturels, médias et minorités. Rapport du séminaire tenu à Strasbourg. 27-29 septembre 1995*, por Marion Vargaftig, éditions du Conseil de l'Europe. Estrasburgo (Francia).

Las recomendaciones incluidas en el citado dictamen del CAC siguen la pauta marcada por las aprobadas en una reunión celebrada en Leganés (Madrid) el 20 de diciembre de 1997 (Año Europeo contra el Racismo y la Xenofobia), con la participación de periodistas de medios escritos y audiovisuales y Profesores de Universidades de Barcelona, Bilbao y Madrid, bajo el lema *Por una formación sin estereotipos racistas*. Aun a riesgo de algunas repeticiones, resumiré las recomendaciones que surgieron de aquel encuentro, en el que estaban representadas media docena de nacionalidades:

«1. Todo individuo es un ciudadano, un ser humano que tiene derecho a ser tratado y nombrado como tal.

2. Mencionar la pertenencia étnica, el país de origen, el color de la piel, la religión o la cultura sólo si esas informaciones son pertinentes.

3. Léxico. Se recomienda especial atención y rigor en la denominación de los individuos y grupos minoritarios, así como en la adjetivación.

4. Normalizar la convivencia y evitar las dramatizaciones. Evitar la tendencia a mencionar a los grupos minoritarios sólo en relación con conflictos, situaciones dramáticas, sucesos, delincuencia, etc.

5. Buscar un discurso informativo equilibrado, ecuánime y basado en fuentes plurales. Contrastar la información oficial.

6. Adoptar una actitud beligerante hacia el racismo. Vigilar especialmente las actitudes y manifestaciones de la extrema derecha, sin descuidar el racismo difuso en otras posiciones del espectro político.

7. Extremar la prudencia en la selección y el tratamiento de las imágenes.

8. En la información deportiva, evitar ofrecer espacio a expresiones racistas y símbolos de la extrema derecha. Evitar estereotipos chovinistas y étnicos»⁴⁰.

La autorregulación profesional

La autorregulación de la profesión periodística y la adopción de códigos deontológicos o de conducta es, sin duda, una de las mejores fórmulas para avanzar en el tratamiento adecuado de las minorías. La Federación Internacional de Periodistas dispone ya de un código de conducta. Los periodistas catala-

⁴⁰ *El lenguaje solidario en los medios de comunicación*. CC OO. Federación de Comunicación y Transporte. Citado en el informe anual de SOS Racismo. *Op. cit.*, págs. 204 a 206.

nes, por su parte, aprobaron en octubre de 1992, a iniciativa de su colegio profesional, el Código Deontológico. El último de sus 12 artículos apela a «actuar con especial responsabilidad y rigor en el caso de informaciones u opiniones con contenidos que puedan suscitar discriminaciones por razones de sexo, raza, creencia o extracción social o cultural».

Algo más de dos años después, el 15 de febrero de 1995, responsables de 24 medios de comunicación de Cataluña, el Colegio de Periodistas y la Consejería de Bienestar Social de la Generalitat suscribieron el convenio *Protección de la cultura y la imagen de las minorías étnicas en los medios de comunicación social*, un texto que sitúa la tolerancia y el respeto a la dignidad de las personas como premisa de la información y como referente para la publicidad, y compromete a las partes a destacar los valores positivos de las diferentes culturas y a erradicar mensajes que impliquen discriminación o menosprecio a causa del color, raza, sexo, religión o ideología. El entonces decano del Colegio de Periodistas, Josep Pernau, destacó en el acto de la firma que la autorregulación «ata» a los periodistas «mucho más que cualquier ley».

Finalmente, en diciembre de 1996, se constituyó el Consell de la Informació de Catalunya (Consejo de la Información de Cataluña), un organismo de arbitraje constituido por 15 personas y entre cuyas funciones se encuentra la de instar a los medios de comunicación a rectificar actuaciones profesionales que resulten lesivas para los principios contenidos en el Código Deontológico, así como resolver consultas presentadas tanto por los periodistas como por el público y elaborar un informe anual sobre sus actuaciones. Cualquier persona física o jurídica puede presentar un escrito de queja «por la lesión cometida por un medio de comunicación». Las resoluciones del Consell son públicas.

El Consell había nacido un mes antes, en noviembre de 1996, en la jornada de clausura del Tercer Congreso de Periodistas de Cataluña, que adoptó una serie de conclusiones, entre las que figuraban dos referidas a la xenofobia. En la primera se aconsejaba a los medios de comunicación la inclusión de periodistas, presentadores y actores de minorías étnicas en sus plantillas y programas, y en la segunda se reclamaba una formación «multiintercultural» de los periodistas y que se incluyera esa multiculturalidad en «todos los ámbitos educativos».

El Congreso aprobó también un Manual de Estilo, versión definitiva de una carta de intenciones sobre el tratamiento de las minorías étnicas en los medios de comunicación, elaborada por el grupo de trabajo Medios de Comu-

nicación y Minorías Étnicas del Colegio de Periodistas de Cataluña. El Manual de Estilo, que se acaba de reeditar, consta de seis puntos:

1. **No debe incluirse el grupo étnico, el color de la piel, el país de origen, la religión o la cultura si no es estrictamente necesario para la comprensión global de la noticia.** El Manual reconoce que existe la tendencia, en general inconsciente, a destacar estos aspectos, potenciada además por la presión del tiempo derivada de las rutinas de producción periodística.

2. **Deben evitarse las generalizaciones, los maniqueísmos y la simplificación de las informaciones. Los residentes extranjeros no comunitarios son tan poco homogéneos como los autóctonos.** El Manual reconoce en este punto la «buena intención» de los medios.

3. **No deben potenciarse las informaciones negativas ni las sensacionalistas. Debe evitarse la creación inútil de conflictos y dramatizarlos. Se ha de potenciar la búsqueda de noticias positivas.** El Manual precisa que «relacionar directamente términos como *invasión*, *brote*, *avalancha* o *grandes masas* con grupos o individuos inmigrantes perjudica sensiblemente la imagen social de los residentes extranjeros no comunitarios».

4. **Ecuanimidad en las fuentes de información. Deben contrastarse las institucionales. Se han de potenciar las propias de las minorías étnicas y tener un cuidado especial en las informaciones referidas a los países de origen. Publicar las rectificaciones como elementos habituales de calidad del medio informativo.** El Manual aclara: «Las fuentes de información más consultadas cuando cubrimos una información que afecta a un colectivo de inmigrantes o a un miembro de una minoría étnica son, por este orden, ministerios, expertos en inmigración, servicios sociales, ONG, fuerzas de seguridad, ayuntamientos, etc. Casi nunca se consulta a los inmigrantes. Las rutinas de producción informativa y la falta de informadores estables tienen gran parte de culpa».

5. **Responsabilización de los profesionales. La importancia de la ubicación física de la información. El efecto dominó. Utilización de material gráfico.** El Manual exhorta a contextualizar la información con el resto de informaciones que compartirán el espacio físico o herziano. «Se debe intentar que el aspecto negativo de una información –muertos, enfermedades, guerras...– donde aparecen aspectos étnicos, religiosos o culturales no influya, por su proximidad en el espacio informativo o por el momento de su difusión, en otras noticias más próximas a nosotros que tengan un referencial étnico, religioso y cultural similares. Una noticia negativa afecta –tal como lo haría una

ficha de dominó que cae encima de otra— a otras noticias que le sean próximas y tengan un referente común». Más adelante, añade: «Las imágenes (fotografías, vídeos, etc.) son los elementos más susceptibles de ser manipulados y su conocida elocuencia hace que sea necesario extremar la prudencia en el momento de seleccionar una imagen que puede transformar totalmente el sentido de una información».

6. Militancia periodística: hacia una multiinterculturalidad enriquecedora para todos. La potenciación de las informaciones en positivo. El Manual afirma: «La voluntad del profesional es de gran importancia para la búsqueda y la elaboración de noticias positivas en un contexto en el que las que encontramos son mayoritariamente negativas. Esto no quiere decir que se deba reflejar una realidad débil o esconder informaciones. Como información positiva, igual podemos considerar la cobertura de una acción positiva como las declaraciones en una información por parte de un miembro de un colectivo inmigrante, por ejemplo, o la presentación positiva en este sentido de cualquier información». A continuación, agrega que «otro nivel en este camino sería la potenciación de la aparición [...] de periodistas y presentadores de diversas minorías étnicas, y que tiene un gran efecto normalizador»⁴¹.

La mayoría de estas recomendaciones se van cumpliendo, con matices, como se ha visto, en los medios de comunicación catalanes. En la actualidad, la mayoría de los periodistas catalanes tienen, de entrada, una posición favorable hacia las minorías, intentan cuidar el lenguaje, no limitarse a las fuentes oficiales, sino buscar otras alternativas, y aproximarse a las causas profundas de los sucesos, como en el caso de la incesante llegada de pateras por el estrecho de Gibraltar, por ejemplo. Las *buenas intenciones* iniciales se reflejan ya en textos suscritos por los medios y en declaraciones solemnes. Este año llega la hora de hacer balance también en este campo durante la celebración del Cuarto Congreso de los Periodistas Catalanes.

Algunas iniciativas solidarias

El pasado 8 de marzo se celebró en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) un taller de prensa, radio y televisión sobre las minorías étnicas y los países del Sur, dirigido a

⁴¹ *Manual de Estilo sobre el tratamiento de las minorías étnicas en los medios de comunicación social*, Col·legi de Periodistes de Catalunya, Comissió Periodisme Solidari, Barcelona, 1996.

alumnos del último curso de la Facultad. Este taller forma parte de uno de los proyectos puestos en marcha por la Comisión de Periodismo Solidario del Colegio de Periodistas, denominado *Programa integral para la sensibilización de la profesión periodística catalana hacia la solidaridad Norte-Sur y la interculturalidad*, que cuenta con el apoyo de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la Asociación por el Progreso de la Comunicación.

La Comisión trabaja asimismo en la producción de un vídeo-guía de recomendaciones para acceder a los medios; la elaboración de una Guía Multicultural de la Comunicación, conjuntamente con la Fundació Etnòpolis (SOS Racisme); la creación de una red internacional de periodistas y comunicadores interesados en la relación Norte-Sur y su presencia en los medios, y la colaboración con la ONG Sitcom en la puesta en marcha de un espacio informativo multicultural en la televisión local *Barcelona TV*.

Algunos medios de comunicación catalanes incluyen en su programación o en sus páginas iniciativas solidarias de este tipo. Así, *TV-3* reserva desde hace dos años —el pasado 6 de mayo se emitió el reportaje número 100— un espacio en el *Telenotícies Migdia* de los sábados dedicado a las ONG. El espacio se creó a iniciativa de la televisión autonómica, que destina para elaborarlo dos redactores de la sección de Sociedad y su función consiste en dar a conocer las múltiples ONG que están implantadas en Cataluña.

El Periódico de Catalunya publica cada miércoles, desde el 10 de febrero de 1999, *La Agenda de la Cooperación*, una página incluida en la sección *El Día por Delante*, y dedicada a actividades de solidaridad. La agenda contiene una selección de los actos programados por diferentes asociaciones y ONG catalanas, con direcciones y teléfonos de contacto. El objetivo es acercar a los lectores la realidad de los pueblos y las culturas del llamado Tercer Mundo, a través de las iniciativas divulgativas y lúdicas que promueven las ONG, los Ayuntamientos y otras asociaciones. Los contenidos de la página se elaboran a partir de la información facilitada por el Fons Català de Cooperació (Fondo Catalán de Cooperación), en virtud de un convenio de colaboración suscrito por el diario y por esa entidad. El Fons CÀtala de Cooperació, un organismo sin ánimo de lucro que agrupa a 207 socios, un 90 % de los cuales son Ayuntamientos de Cataluña, se ocupa de promover entre la opinión pública un clima favorable para la consecución de un nuevo orden económico internacional más justo.

El formato de la página es similar al de un tablón de anuncios —con tres o cuatro piezas más destacadas y el resto en forma de guía—, ya que *El Periódico*

asume el papel de intermediario entre los lectores y los actos que se organizan. La intención del diario es que los lectores sepan qué actividades se llevan a cabo para que puedan establecer una relación directa con las entidades que las organizan, asistiendo a actos como fiestas, conciertos, exposiciones, mesas redondas, debates, jornadas, etc. En este espacio también se publican números especiales dedicados a estancias solidarias veraniegas en campos de trabajo del Tercer Mundo, establecimientos de *comercio justo* y otras iniciativas ligadas a la cooperación.

Una iniciativa similar se desarrolla en el diario en catalán de Girona *El Punt*. En septiembre de 1994, el diario firmó un convenio de colaboración con el Secretariado Permanente de la Coordinadora de ONG de Cooperación y Solidaridad de las comarcas de Girona, que agrupa a unas 40 organizaciones no gubernamentales gerundenses. En la parte expositiva del convenio, se dice que la empresa editora del diario, «en cumplimiento de sus principios fundacionales, ha de estar atenta a la realidad plural del ámbito social y territorial en que está inmersa para poder dar una mejor respuesta a las necesidades, inquietudes y valores del conjunto de la sociedad, entre ellos los que hacen referencia a la cooperación y la solidaridad». La Coordinadora tiene entre sus objetivos la denuncia, la sensibilización y el trabajo para conseguir una sociedad más justa y solidaria.

El Punt se compromete a publicar una página semanal en el diario y entre una y dos semanales en la revista dominical *Presència* sobre temas de cooperación y solidaridad como contribución a la campaña del 0,7 %. El espacio tiene una parte redaccional, a cargo de una periodista especializada, y una parte publicitaria, gestionada por las ONG, que aportan además cada semana informaciones y opiniones para elaborar las páginas. En la parte publicitaria se pueden incluir, gratuitamente, anuncios de instituciones, entidades u ONG que, sin ánimo de lucro, respondan al contenido del convenio. En opinión del director de *El Punt*, Emili Gispert, más importante que el contenido es el hecho de haber dedicado recursos económicos, mediante la especialización de una redactora, que mantiene una relación permanente con las ONG –se reúnen como mínimo una vez a la semana en Consejo de Redacción– y conoce de esta forma los problemas, las preocupaciones, las inquietudes, las dificultades y las opiniones de las personas que trabajan en estas asociaciones, a la vez que les acerca a los medios y a su manera de trabajar.

«Es la única manera –estima Gispert– de superar el estadio del uso del lenguaje políticamente correcto en el que estamos instalados y que nos deja a

todos tranquilos y satisfechos, pero engañados, porque no contribuye a mejorar el conocimiento de la diversidad social y cultural eliminando tópicos, prejuicios y visiones desviadas que alimentan la xenofobia». Para el director de *El Punt*, la relación directa y el intercambio de experiencias con las ONG ayuda a resolver «la cuestión de fondo», que es «ser capaces de impregnar las redacciones de una actitud positiva en el trabajo diario». «Tanto es así que a menudo comentamos –concluye– con los responsables de la coordinadora que lo celebraremos el día en que convengamos que no son necesarios páginas especiales ni convenios» de este tipo ⁴².

Ese momento no ha llegado todavía, pero algunas de las experiencias protagonizadas por los periodistas catalanes apuntan a que, pese a los estereotipos, los tópicos, las inercias, las ignorancias y las dificultades, algo se avanza en el camino hacia un tratamiento más respetuoso de las minorías étnicas.

JOSÉ A. SOROLLA

⁴² EMILI GISPERT I NEGRELL, Ponencia en las Jornadas sobre los medios de comunicación y las relaciones Norte-Sur, Barcelona, abril, 1999.

TRATAMIENTO DE LAS MINORIAS EN LOS INFORMATIVOS DE TV

Por VICENTE ROMERO,
periodista de TVE

El mayor desafío actual y futuro de los informativos de televisión aparece planteado en el terreno de la ética. El correcto tratamiento de los contenidos continúa en el centro del debate, en una etapa de vertiginosos avances técnicos, que se traducen en un constante aumento de las facilidades de transmisión y recepción de las imágenes, la inmediatez en la elaboración y difusión de las noticias, y la accesibilidad a fuentes de documentación.

El problema de fondo afecta a todos los aspectos de la actualidad, ya que durante la producción de las noticias y reportajes, los periodistas raramente cuestionan los límites y las insuficiencias del sistema político vigente, ni tampoco las cada vez más evidentes contradicciones de un sistema económico que tiende a una globalización acrítica de sus fundamentos y procedimientos y parece inmune a cualquier análisis sobre la desigualdad crónica en que se basa. Así, los medios en general –y especialmente la televisión– tienden a ofrecer una visión uniforme e inmutable de los marcos generales de la política y la economía.

Tan solo en las cuestiones de ámbito social inmediato (principalmente en los temas locales y sucesos) suele advertirse un cierto afán crítico de fondo. Así, resulta evidente la diferencia de planteamientos –e incluso de tono– que ofrecen las informaciones sobre casos de violencia en el hogar o malos tratos a

la infancia, atropellos administrativos, y sentencias judiciales o acciones de la Justicia contrarias al sentir popular.

Donde resulta más notoria la necesidad de un constante y profundo examen de los contenidos informativos es precisamente en los temas sociales más inmediatos, y en especial en los relacionados con las minorías. Las noticias protagonizadas por inmigrantes o gitanos, o relacionadas con estos grupos, son las que acusan de forma más directa y repetida la necesidad de que la profesión periodística encare el desafío ético de su correcto tratamiento, sin sacrificar el rigor profesional y la conciencia personal a las crecientes exigencias de mayor rapidez en la elaboración y difusión de las noticias.

Sin embargo, los aspectos éticos de la información suscitan mínimas preocupaciones en las empresas y son objeto de cuidados muy reducidos, frente a la constante actualización de conocimientos técnicos que requiere la realización de los programas informativos en televisión. Así, mientras que todas las empresas organizan cursos para el aprendizaje o adecuación del personal en el manejo de nuevos tipos de cámaras o equipos de montaje, manipulación, almacenamiento y transmisión de la imagen y el sonido, se presta una mínima atención al correcto tratamiento de los contenidos.

Además, el tratamiento de las informaciones se ve condicionado por las exigencias de urgencia, cuando no de inmediatez, en la difusión de las noticias, y el correcto planteamiento de algunas cuestiones que constituyen motivos de permanente inquietud y polémica sociales suele depender finalmente de la buena intención o incluso de la intuición de los periodistas. El ritmo en constante aceleración de la televisión (el mayor de todos los medios, sin los horarios fijos de cierre de la prensa escrita, y con mucha mayor elaboración técnica que la radio) obstaculiza, cuando no llega a impedir, la mínima serenidad y reflexión en el trabajo. Lejos de buscar la documentación imprescindible sobre cuestiones culturales de carácter minoritario, o de contrastar hechos y opiniones con fuentes emanadas de esos medios culturales minoritarios, los periodistas caen en rutinas perniciosas y acaban reflejando de modo inconsciente los valores dominantes, lo que causa una reproducción permanente de los estereotipos acuñados a lo largo de años, sin que se cuestione jamás su validez ni mucho menos los prejuicios a los que aquéllos suelen obedecer.

El aumento de la inmigración y, por tanto, de las noticias relacionadas con de minorías étnicas en España, es una realidad fácil de constatar. También, la periódica aparición de brotes de racismo en la sociedad española, tanto frente a la presencia creciente de inmigrantes magrebíes y subsaharianos, como a

los más antiguos problemas de convivencia con grupos gitanos. Sin embargo, frente al innegable incremento de la conflictividad social en los sectores sociales en mayor contacto con esas minorías, el tratamiento de las informaciones periodísticas en la mayoría de los casos continúa basándose en el recurso mecánico a estereotipos, y reproduciendo así viejos prejuicios.

Ante esta situación, que se hace patente de forma repetida, ninguna de las televisiones españolas se ha planteado la adopción de medidas correctoras adecuadas. Se puede afirmar que no existe consciencia de tal necesidad. Las empresas no han buscado la especialización de redactores en la problemática de las principales minorías sociales, ni mucho menos en el conocimiento de sus pautas culturales específicas. Y en los consejos de redacción –allá donde existen éstos o figuras profesionales semejantes– como en las reuniones de planificación cotidiana de los informativos, rara vez surge un debate en profundidad sobre el correcto tratamiento de las noticias relacionadas con minorías. Ello explica –que no justifica– la falta de normativas específicas en cada medio, así como el que no se adopte (aunque fuera parcialmente) o adapte algún código deontológico profesional, como el propuesto por el Colegio de Periodistas de Cataluña en 1997, que al menos contiene un punto dedicado específicamente al tratamiento de las informaciones sobre las minorías. Ni siquiera los distintos «libros de estilo», en las empresas que los han desarrollado, contienen referencias suficientemente precisas para garantizar enfoques correctos, limitándose generalmente a cuestiones obvias en el empleo del lenguaje.

Cuando Televisión Española (TVE) era la única televisión en España y ejercía el monopolio de la información oficial a través de la pequeña pantalla, se promulgó una normativa general sobre su funcionamiento que contenía una importante referencia expresa al tratamiento de las minorías. Los denominados «principios básicos de programación» todavía en vigor fueron aprobados por unanimidad en el Consejo de Administración del Ente Público RTVE el 28 de julio de 1981, siendo Director general de RTVE Fernando Castedo Álvarez, con el título de «Principios básicos y líneas generales de la programación de los Medios dependientes del Ente Público». En su punto tercero, apartado 3.1, sobre «La información y la opinión», quedó establecido que *la sensibilidad social [...] exige un cuidadoso uso de aquellos términos de índole calificativa –tales como «gitano», «homosexual», «parado», «extranjero», etc.– que pudieran ser utilizados o interpretados de forma peyorativa, o relacionados con hechos condenables en aparente relación causa-efecto, o que pudieran*

inducir actitudes de marginación. Esa exigencia de hacer «cuidadoso uso» del idioma también aparece implícitamente contenido en el párrafo siguiente del mismo texto: *La cualidad esencial de la noticia debe ser su plena objetividad. Los elementos que la conforman deben describirse con precisión, rechazándose todo tipo de argumentaciones que pudieran condicionar en el público una valoración parcial o equívoca del hecho.*

Aunque no se refiere expresamente al respeto por las minorías, este texto resulta perfectamente aplicable al tratamiento informativo de las mismas. Sin duda, tales «principios básicos» resultan insuficientes, pero no cabe duda sobre su importancia aún limitándose al lenguaje, ya que el empleo de un solo término equívoco o despectivo condiciona gravemente la percepción del contexto de las noticias, sobre todo cuando existe una inquietud social y un contexto de antiguos prejuicios. Curiosamente, los «principios básicos» no tuvieron reflejo en el «Libro de Estilo de los Servicios Informativos de TVE», redactado posteriormente por Miguel Pérez Calderón, ni tampoco en el «Manual de Estilo de TVE» de Salvador Mendieta.

El primero de ellos, el «Libro de Estilo de los Servicios Informativos de TVE» (Miguel Pérez Calderón, Servicio de Publicaciones del Ente Público RTVE, 1985) muestra una casi absoluta insensibilidad social, planteando las cuestiones de normativa del lenguaje únicamente en el terreno de la corrección gramatical. No dedica ni una línea al tema del respeto por las minorías, ni siquiera cuando aborda el tema de *la influencia de la radio y la televisión en la sociedad*. Y ello pese a que su propio autor escribiera en su página 38 que «*un Libro de Estilo tiene que ser un repertorio de normas de actuación, de advertencias y de reglas, un manual de redacción para escribir y hablar en nuestro especial oficio (que, como repetidamente se ha dicho, no es exactamente el del escritor, aunque sea semejante y paralelo al de éste) con especial insistencia, pues, en los problemas específicos de nuestro trabajo y en los escollos que a diario encontramos en él, la forma de salvarlos y las equivocaciones en que podamos caer.*» Pero la propuesta de Pérez Calderón quedó limitada a unas mínimas normas reguladoras del *arte de hablar y escribir correctamente una lengua*. Cuestiones de gramática, no de ética.

El segundo trabajo, el «Manual de Estilo de TVE» (Salvador Mendieta, Editorial Labor, S. A., 1993) tampoco enuncia preocupación social alguna ni plantea los riesgos en el uso del lenguaje al tratar el tema de las minorías, aunque establece normas sobre el empleo de gentilicios, vocablos equívocos e insultos. Cabe señalar que, frente a esta ausencia, resulta chocante el cuidado

puesto por el autor en numerosas precisiones sobre *tratamientos y preferencias* a tener en cuenta en el protocolo de autoridades asistentes a actos oficiales. Así, pese a que Fernando Lázaro Carreter, como Director de la Real Academia Española, afirme cortésmente en el Prólogo de este Manual de Estilo no haber *hallado objeciones importantes que oponerle*, el trabajo de Mendieta es claramente insuficiente. Ni siquiera hace referencias concretas al empleo de expresiones ambiguas o ambivalentes, ni a las posibles connotaciones despreciativas, xenófobas o incluso racistas, de términos o expresiones muy habituales que pesan decisivamente en el contexto de informaciones concernientes a minorías.

Ninguno de estos dos trabajos ha sido nunca materia de consulta en los Servicios Informativos de TVE. De hecho, la mayoría de los integrantes de las redacciones de los telediarios y de programas como *Informe Semanal* o *En Portada* desconocen su existencia. Nunca tuvieron utilidad alguna y ambos han quedado justamente olvidados.

Alfredo Urdaci, Director de los Servicios Informativos de TVE, admite que *ante la carencia de normas precisas, el respeto por las minorías en los contenidos informativos se debe generalmente a la sensibilidad de los redactores, ya que el tratamiento de las noticias se deja a su libre albedrío. Y hay que reconocer que en la redacción se tratan esos temas con sumo cuidado, especialmente todo lo concerniente a gitanos y discapacitados. Está demostrado que existe una alta conciencia social entre los informadores, aunque cada vez se trabaja más de prisa, con menos posibilidad para la reflexión y la consulta de fuentes.*

Para Urdaci, los problemas reales de las minorías no tienen una atención suficiente en las televisiones y lo atribuye *tal vez a que las minorías no vendan, a que la audiencia prefiera otros asuntos menos molestos para sus conciencias, y tanto desde los informativos como desde los programas de ocio se busca incidir en temas de consumo masivo, porque una cosa es lo que trates de predicar desde el púlpito y otra lo que en el fondo piensa la gente.*

Preguntado si se echa en falta una normativa más precisa que establezca pautas estrictas para el planteamiento informativo de cuestiones relacionadas con minorías, el Director de los Servicios Informativos de TVE responde que sí: *dejar todo al buen juicio personal de cada redactor supone tanto el riesgo de caer en arquetipos y prejuicios como, en el extremo contrario, en enfoques paternalistas; para conjurar ese riesgo, sería interesante contar con una normativa, con un código deontológico que garantizase tanto las formas de trata-*

miento correctas como la consulta de las fuentes adecuadas. Pero no debería ser una normativa desarrollada fuera de las redacciones e impuesta a los periodistas, sino que quienes tratan con materiales informativos sobre minorías deberían tener voz en el debate y redacción de dichas normas para garantizar su eficacia.

Sin embargo, Alfredo Urdaci observa que las organizaciones representativas de distintos grupos minoritarios no suelen dirigirse a los Servicios Informativos de TVE exigiendo tener voz en las informaciones que les conciernen, ni siquiera para ofrecerse como posibles fuentes consultivas. *Son muy pocas las que, como Iniciativa Gitana, envían algún fax o llaman por teléfono y piden tener una presencia en las informaciones sobre asuntos puntuales que les conciernen.*

En las televisiones privadas las cosas no son muy diferentes que en la pública. Ernesto Sáenz de Buroaga, Director de Informativos de Antena 3, reconoce que en esta cadena *no existe normativa alguna sobre el tratamiento de la problemática de las minorías sociales* y admite que *el tema no suele tratarse en profundidad, sino sólo a partir de noticias generadas por conflictos y/o desgracias, ya sean la tragedia sin fin de las pateras con inmigrantes clandestinos o la discriminación de niños gitanos en un colegio como en Barakaldo; sólo entonces encuentra sitio en el minutado de los informativos, y escaso.* Según su propia experiencia, cuando los noticiarios refieren hechos dramáticos que afectan a *las mayorías olvidadas de las que provienen nuestras minorías* —como los trágicos conflictos de hambrunas o persecuciones étnicas en África—, un importante sector del público evita su contemplación y zapea o apaga el televisor, especialmente cuando este tipo de informaciones se ofrece a la hora de cenar. Sin embargo, Buroaga considera que *proporcionar esas informaciones a los espectadores constituye una obligación moral, aunque conlleve una disminución de los índices de audiencia.*

Tampoco en los informativos de Antena 3 existe un código deontológico, y su Director de Informativos se muestra contrario a su existencia, considerando preferible una *sensibilización de la redacción* ya que entiende que *no sería bueno tener que recurrir a él para decidir cómo tratar cuestiones que lo que requieren es intuición, sensibilidad, humanidad y conciencia por parte de los profesionales de la información, para abordarlas sin generar más rechazos sociales o sin agravar los ya existentes.*

Buroaga señala como *una ventaja* que la media de edad de su redacción sea de treinta años, por entender que ello garantiza una mayor sensibilidad per-

sonal ante cuestiones sociales, simpatía por las ONG y las inquietudes que canalizan, e incluso una cierta inclinación a tomar partido por los más débiles. Admite la difusión de imágenes duras (y cita como ejemplo las de cadáveres de inmigrantes en las playas andaluzas, o de drogodependientes inyectándose) *como parte de una realidad que no se debe ocultar; son secuencias desagradables, pero que ofrecen visiones de la realidad, frente a las realidades falsas de programas de televisión como «El Gran Hermano».*

En cuanto a la posible presencia en pantalla de algunas organizaciones sociales de minorías como forma de contraste y matización de las informaciones, Ernesto Sáenz de Buroaga lamenta que la premura en la redacción y montaje de las noticias no permita la deseable consulta con fuentes pertenecientes a los grupos concernidos, ya que muchas veces no resultan fácilmente accesibles. Además, el Director de los informativos de Antena 3 coincide con su homólogo de TVE, Alfredo Urdaci, en que *generalmente estas entidades no se dirigen a nosotros, no llaman ni presionan para hacerse oír.* En definitiva, que las vías de comunicación con representantes de las minorías sociales resultan insuficientes e inoperantes.

Los mayores grados de atención a las minorías y de sensibilidad en el tratamiento de sus problemas corresponden a algunas cadenas públicas autonómicas, como Canal Sur y Telemadrid. Esta última puso en marcha recientemente un programa informativo específicamente dedicado a las principales minorías sociales, titulado «Sin Fronteras». Un empeño loable, pero de escasa trascendencia, ya que, al estar destinado a un público exclusivamente formado por inmigrantes, su enfoque de los temas no resulta el más adecuado para que también interesara a un público generalista, brindándole la oportunidad de informarse mejor, gracias a un tratamiento más extenso y documentado de lo habitual en los espacios de «Telenoticias», así como de conocer problemas concretos y puntos de vista expuestos ante las cámaras por portavoces de distintos grupos de inmigrantes. Ubicado en la parrilla de emisiones de Telemadrid en un horario tan «restrictivo» como las nueve de la mañana de los domingos, «Sin Fronteras» apenas ha tenido repercusión.

Paradójicamente, al mismo tiempo que creaba este espacio para inmigrantes, Telemadrid mantenía en muchas de las noticias incluidas en sus informativos diarios el mismo tono neutro y el tratamiento impreciso –a veces incluso lastrado por el recurso a los estereotipos– común a todas las televisiones. Pero este tipo de contradicciones es frecuente en el mundo de la televisión, no sólo en España: se ofrecen programas de planteamientos distintos –cuando no

claramente opuestos— sobre el mismo tipo de contenidos, en emisiones destinadas a dos públicos muy diferenciados. Una dualidad éticamente inaceptable, que responde a una concepción de fondo inconfesable pero asentada en el inconsciente colectivo: *la separación de la sociedad en dos bloques*. Un «*nosotros y ellos*», que tienden también a manifestar en su trabajo los informadores, que se dirigen a *un público nuestro establecido y otro marginal*. En definitiva un *nosotros* del que forman parte activa los periodistas, y un *ellos* al que pertenecen los inmigrantes de comunidades étnicas distintas, y los españoles de grupos sociales con problemáticas muy distintas pero siempre situados en los márgenes del sistema: gitanos, drogodependientes, homosexuales...

De este modo la *sensibilidad* de los redactores, su *alta conciencia social* y el *sumo cuidado* al elaborar las informaciones, a las que hacía referencia Alfredo Urdaci hablando de los telediarios de TVE, e incluso esa *tendencia a tomar partido por los más débiles* de la que hablaba Ernesto Sáenz de Buroaga, se traducen habitualmente en un simple tono bienintencionado. Y el tratamiento de las noticias relacionadas con las minorías, en particular con gitanos e inmigrantes, contiene finalmente un mensaje *integrador* en *nuestra* sociedad. Un mensaje positivo, pero cuyos límites se encuentran precisamente en la voluntad de *integración*, sin entrar en mínimas consideraciones sobre peculiaridades y condicionantes sociales, ni mucho sobre el respeto de las diferencias culturales de fondo y el mantenimiento de señas de identidad como garantías para una *convivencia integradora*. En suma, confiar a la conciencia y/o la sensibilidad de los periodistas el *tratamiento correcto* de las informaciones sobre las minorías, sin definir expresamente un marco social de trabajo y unas concepciones sociales precisas, supone asumir un evidente riesgo de paternalismo.

Hay que reconocer, sin embargo, que —tal vez como fruto último de la propia *presión* de estos temas en el minutado de los informativos— durante los últimos meses algunas cadenas de televisión se han esforzado en la producción de noticias y reportajes propios sobre aspectos de fondo de cuestiones relacionadas con minorías sociales. Como ejemplos podrían citarse las crónicas en Telemadrid sobre inmigración magrebí, realizadas durante el mes de junio por un equipo de enviados especiales a Tetuán y Ceuta; o las tandas de informaciones sobre ONG y acciones humanitarias que Tele 5 está emitiendo, agrupadas en bloques semanales, durante todo este año. Pero, aunque se trata de experiencias positivas —sobre todo por su propio significado *interno*— no dejan de ser excepciones puntuales, incluso claramente diferenciadas en los paquetes informativos donde se incluyen. Incluso cabe sospechar que obede-

cen más a un cierto afán de *cosmética política* por parte de las empresas, que a una voluntad correctora de insuficiencias y defectos crónicos en el tratamiento informativo.

En 1998, el Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) realizó un estudio sobre el tratamiento de las minorías étnicas y culturales –principalmente gitana, magrebí y subsahariana– en distintas televisiones del estado español: TVE, los canales autonómicos catalanes TV3 y Canal 33, y las privadas de ámbito estatal Tele 5, Antena 3 y Canal +. Se visionaron 784 horas de programación, de las que fueron seleccionadas para su análisis 112 horas, emitidas entre el 18 y el 26 de septiembre de 1998. Los datos del estudio fueron presentados el 14 de julio de 1999, y obtuvieron un amplio reflejo en las secciones de televisión de la prensa diaria.

Una de las conclusiones de dicho estudio fue que las televisiones públicas dedican mayor atención a las minorías que las privadas. Es lógico. La televisión estatal en primer lugar, y las autonómicas después, son también las que realizan mayores esfuerzos en las tareas informativas. Y las que están estatutariamente definidas como servicios públicos. Sin embargo, esa mayor cantidad de minutos, e incluso el mayor cuidado en la presentación de las informaciones sobre minorías, no significa que no acusen defectos comunes con las privadas, sobre todo por el empleo de los mismos estereotipos. Aunque el presidente del CAC, Lluís de Carreras, proclamara en la presentación del citado informe que *«cada vez es más frecuente la utilización de un lenguaje políticamente correcto sobre todo en lo referente a informativos y documentales y al desconocimiento de la realidad cultural y social de los colectivos a los que se hace mención»*, también tuvo que denunciar como un hecho que las televisiones siguen *«tendiendo a reproducir estereotipos sobre minorías y tratan esas noticias con cierto paternalismo.»*

El resultado estadístico de las 112 horas de programación analizadas por el CAC establecía que el 62 por 100 de las noticias sobre minorías correspondía a las pertenecientes al África negra, mientras las referidas a magrebíes se reducían a un 9 por 100, y los asuntos relacionados con la comunidad gitana quedaban limitados a un 5 por 100. Por temática, el primer lugar correspondía a la inmigración, convertida en *tema estrella* con un 40 por 100, seguido por guerras o violencia (17 por 100) y desastres naturales (14 por 100). Quedaba patente que de los países de origen de las minorías étnicas presentes en España, se informa casi exclusivamente sobre hechos dramáticos, lo que produce una visión de conjunto caótica, sin que casi nunca se expliquen sus causas de

fondo, ni se ofrezcan datos complementarios sobre contexto político y económico, ni tampoco claves culturales para facilitar la comprensión de los hechos.

Luis de Carreras llegó a comentar que cuando se incluyen datos estadísticos sobre esos países se hace casi exclusivamente para subrayar su dramática realidad social y su atraso o *exotismo*. Cabría añadir a sus palabras que jamás se mencionan responsabilidades históricas —como las herencias perversas del colonialismo—, ni el sometimiento de las estructuras económicas nacionales a los intereses de grandes corporaciones multinacionales que determinan el monocultivo y fijan los precios de materias primas, o el papel de las entidades financieras internacionales que imponen determinados marcos políticos y sociales, como limitaciones salariales, control de gasto social, etcétera. Tampoco suele hacerse referencia a las raíces del endeudamiento externo, ni en el insuperable lastre que éste supone. Ni siquiera suelen mencionarse ya los condicionantes geopolíticos, que durante la época de la guerra fría llegaron a traducirse en militarismos y conflictos bélicos por delegación.

Las principales conclusiones del informe del CAC resultan asumibles por amplias en su formulación y evidentes en su necesidad urgente: eliminar referencias a orígenes étnicos cuando no sea imprescindible citarlos para la comprensión de la noticia o no estén en el origen de la misma, aportar mayor información contextual, evitar sinónimos equívocos y ampliar la recogida de opiniones en el seno de las minorías afectadas.

El estereotipo más repetido, y también el más antiguo, es el que afecta a la principal minoría étnica española: los gitanos. En la introducción al trabajo «El Pueblo Gitano / Manual para periodistas» (editado en 1988 por Unión Romaní) escribe Juan de Dios Ramírez-Heredia que en la *«rutina productiva de los medios de comunicación las minorías étnicas, especialmente el pueblo gitano, suelen llevar la peor parte. Cada día asistimos impotentes a la difusión de informaciones relacionadas con algún miembro de nuestra comunidad en las que, por el tratamiento dado por los periodistas, se atribuye a todo el grupo un hecho protagonizado por un solo individuo. De esta manera se construyen una serie de estereotipos que, con el tiempo, calan en el conjunto de la ciudadanía y determinan su actitud frente a un pueblo que, como el gitano, no tiene más defectos ni virtudes que el resto: es, sencillamente, distinto. Esta práctica se agrava con el ritmo cada vez más vertiginoso de producción y consumo informativo que hace que los periodistas apenas dispongan de tiempo para documentarse y contrastar su información»*.

Al abordar el tratamiento «sesgado» que los medios de comunicación –no solo los españoles, también los europeos en general– dan a la comunidad gitana recurriendo a estereotipos, la Unión Romaní plantea que «*todavía existe un enorme desconocimiento de la realidad gitana.*» Ese evidente desconocimiento de la realidad autóctona del pueblo gitano, que forma parte de la ciudadanía española, y la ignorancia de sus costumbres resulta totalmente injustificable en una sociedad que se supone culta y democrática. Para paliarlo, se recurre a estereotipos que se perpetúan e incluso se agravan, mediante la repetición de imágenes de marginación que alimentan viejos prejuicios discriminatorios.

Así, se denominan «tribus» a los grandes agrupamientos gitanos, ignorando sus orígenes históricos; y el conjunto de sus antiquísimas leyes se considera como meras prácticas tradicionales, llegando a presentar la venganza sangrienta como una costumbre. Se identifica a los gitanos –como también a los inmigrantes– de forma automática con gente pobre y sucia, que practica la mendicidad y/o la delincuencia. De un gitano siempre se espera que se tome la justicia por su mano, confundiendo su solidaridad de grupo con la formación de bandas, y se cree que va siempre armado, al menos con una enorme navaja. En cuanto a la modificación de los estereotipos, la más dramática entre cuantas se han producido recientemente tiende a identificar a los núcleos de población gitana marginada con *supermercados de la droga*, dando a entender muchas veces que esa pobreza no constituye una condena social sino una forma de enmascarar la riqueza obtenida del indigno negocio del narcotráfico. Casi como única variante *positiva* de estos atroces estereotipos aparece el gitano *integrado* que actúa en espectáculos folklóricos y *disfruta* de cierta notoriedad en la llamada prensa del corazón.

En general, al referirse en las noticias de televisión a la minoría gitana suele plantearse implícitamente la *necesidad de su integración social*, como si con ello se persiguiera una *normalización cultural* que, mediante la aceptación de un marco social ajeno a la historia y las tradiciones propias de ese pueblo, sirviera para *homologar* las diferencias étnicas en una suerte de *convivencia por sometimiento*. La mayor perversión ideológica se alcanza cuando las informaciones conllevan un mensaje de *asimilación* como forma de integración social. Por eso, la Unión Romaní recomienda diferenciar cuidadosamente tales conceptos al elaborar las informaciones relacionadas con gitanos, e insiste en hablar del *acceso de los gitanos* a la educación, el trabajo o la vivienda, pero manteniendo sus propios rasgos culturales, en lugar de promover una mera integración.

En otro estudio realizado por la Unión Romaní en julio de 1998, (titulado «Periodistas contra el racismo. La Prensa española ante el pueblo gitano»), tras analizar 7.500 textos aparecidos en 124 publicaciones durante 1995 y 1996, se alcanzaban unas conclusiones perfectamente aplicables a los informativos de televisión: la premura de tiempo en las redacciones, la *comodidad* de los periodistas, y la práctica generalizada de rutinas en su trabajo, son causas de que no se contrasten debidamente los datos ni se consulten distintas fuentes, tareas siempre imprescindibles pero especialmente determinantes cuando se trata de minorías étnicas con culturas diferentes.

Sergio Rodríguez, periodista gitano (en este caso el dato étnico es relevante) y coordinador del estudio, aseguraba que «*los periodistas abordan la realidad gitana desde un punto de vista más social que cultural. Esto supone una visión sesgada, acostumbrando al lector a pensar que los gitanos no generan noticias sobre otros temas*». Otro de los autores del trabajo, el periodista (también gitano) Sebastián Porras, señala que la mayoría de las informaciones caracterizan a los gitanos casi exclusivamente como *delincuentes o artistas*, empleando unos estereotipos cuya aceptación supone *considerar a los gitanos como gentes difíciles para la convivencia*. Es cierto que los textos, tanto en prensa escrita como en televisión, suelen complementarse con imágenes de niños descalzos, con mocos y el culo al aire, viviendo en una barraca. Y que ello supone un enfoque distorsionado del conjunto de la realidad gitana, ya que mientras se insiste siempre en las altas tasas de analfabetismo, jamás se citan datos como la actual presencia de trescientos gitanos en las aulas universitarias. El citado estudio concluía que aunque el 61,15 por 100 de las informaciones examinadas se consideraba *positivo*, todavía se daba un 31,10 de planteamientos *negativos*.

Para valorar la importancia de la televisión, la Unión Romaní llega a afirmar que «*un espacio de 30 segundos en un informativo de alguna cadena estatal en prime time, en el que se difunda un texto basado en alguno de los estereotipos con los que cargan los romá, puede echar por tierra el trabajo de muchos meses de las organizaciones gitanas*». Más conscientes que nadie del impacto social de la televisión, las empresas de este medio tendrían que extremar el cuidado de sus mensajes con materiales informativos tan delicados como son los concernientes a las minorías. Deberían imponer un control en el manejo del lenguaje, precisando en los libros de estilo la correcta utilización de imágenes, términos y expresiones, descartando aquellos que los propios gitanos evitan para referirse a su comunidad. Y también impulsando la crea-

ción de códigos deontológicos por parte de los profesionales de la información, que sirvan de referencia a su trabajo. Pero, sobre todo, hay que insistir en la necesidad de una mayor formación ética de los profesionales. En universidades y escuelas de periodismo e imagen, además de las materias puramente técnicas e incluso por encima de ellas, habría que impulsar conocimientos no académicos de todos los aspectos de la realidad social en que se mueven las minorías. Porque el problema de un correcto tratamiento de las informaciones no se limita a cuestiones formales en el empleo del lenguaje o la reiteración de estereotipos, sino que exige soluciones basadas en criterios sociales de fondo.

La fijación de estereotipos sociales no se reproduce únicamente a partir de las noticias de ámbito local o nacional relacionadas con las minorías, sino que comienza en la información internacional, y ésta resulta muchas veces determinante en el desarrollo de concepciones erróneas que se aplican posteriormente a hechos ocurridos en el contexto radicalmente distinto de nuestra realidad inmediata. Incluso la forma aparentemente ingenua de caracterizar como *exotismo* algunos comportamientos, costumbres, creencias, leyes e incluso paisajes distintos a los de nuestro inmediato entorno, acaba por establecer una *diferencia* que se basa en la primacía indiscutible de *nuestros valores*, dentro de una visión general de nuestra pretendida superioridad cultural. Ese *exotismo* constituye un primer e inadvertido escalón en el proceso de la deformación de la realidad en el tratamiento informativo, incluso llega a contener elementos indirectamente xenófobos.

Raramente se trata a otras culturas con el respeto y el rigor debidos. Como ejemplo más repetido en la práctica, cabe observar la identificación automática del Islam con el *fanatismo religioso*, olvidando de modo sistemático su espíritu de tolerancia. El repetido cliché del *integrismo islámico*, equiparando a todos los musulmanes con los militantes de grupos integristas de carácter más violento: un despropósito semejante a la identificación de los católicos con los minoritarios sectores más integristas de la fe cristiana.

En la información sobre desastres naturales y conflictos bélicos en algunas de las naciones más castigadas del empobrecido sur, la presentación de la pobreza como algo consustancial e inevitable, sin analizar sus causas, define a sus gentes como *atrasadas e incapaces*. Finalmente, la falta de contextualización de los hechos dramáticos sugiere una cierta *propensión* de pueblos enteros hacia situaciones de violencia, que caracteriza a los estereotipos sociales como originarios de pueblos *inclinados a la violencia* no sólo por sus terribles circunstancias actuales, sino también por su cultura ancestral cuando no por su

propia naturaleza. De este modo, se deduce que cuando algunos integrantes de esos pueblos se convierten en inmigrantes cabe esperar de ellos comportamientos semejantes a los observados en las situaciones de desastres nacionales exhibidas por los telediaros.

Pero los errores en el enfoque de la problemática de las minorías, como la injusticia de las transposiciones mecánicas o el recurso a estereotipos, y el reflejo de viejos prejuicios sociales que tienden a contemplar como fuente de «problemas sociales» la presencia de comunidades de inmigrantes o gitanos, no son *vicios profesionales* exclusivos de los periodistas, sino que a veces resultan notorios en el conjunto de la sociedad. Todo ello constituye —por dar un ejemplo— el telón de fondo de los alarmantes datos arrojados por un estudio realizado en 1998 por el sociólogo Manuel Martín Serrano, según el cual un 26 por 100 de los jóvenes españoles mantiene actitudes discriminatorias de naturaleza racista.

Ni siquiera las más altas personalidades políticas, incluso los miembros del gobierno más directamente concernidos por la problemática de las minorías, están libres de los *pecados comunes* en el tratamiento de las cuestiones relacionadas con ellas. Así, el mismísimo ministro del Interior afirmó (el pasado 16 de mayo, durante el acto de toma de posesión del Delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración) que «*la inmigración es el problema número uno para la convivencia en España en la próxima década*». Mayor Oreja llegó a comparar la inmigración con el terrorismo al decir que «*si ETA es un problema del siglo XIX, la inmigración será la piedra angular de la convivencia en el siglo XXI*». El ministro planteó la necesidad de hallar fórmulas para asegurar la convivencia, afirmando que «*desde el concepto de la convivencia*» es como hay que plantear todo acercamiento al tema de la inmigración. Algo que susciben todas las organizaciones de derechos humanos y los distintos grupos que representan a colectivos de inmigrantes y/o minorías sociales. Pero el discurso de Mayor Oreja resultó poco afortunado. Se producía en el contexto del proyecto gubernamental de reforma de la polémica Ley de Inmigración (aprobada finalmente con los votos en contra del PP). Y sus palabras fueron enseguida contestadas por entidades como ATIME, que representa a trabajadores marroquíes.

¿Qué posición cabe adoptar a los periodistas conscientes de la situación así dibujada? Afirma Jean Ziegler que la última tarea, el último deber —último en el sentido de irrenunciable, no de postrero de un intelectual, de un periodista—, consiste en hacer que el lector, el espectador, recupere plenamente la capa-

cidad casi perdida de horrorizarse ante el horror. A base de contemplar escenas horribles en los telediarios, el público acaba por asumir inconscientemente que tales horrores no son *atrocidades excepcionales* sino *actos inevitables*, casi *consecuencias lógicas* de situaciones injustas, pero fatalmente incorregibles. Entonces el horror se admite como algo *natural* en determinados países, al menos en momentos puntuales. Y sus víctimas tienen *objetivamente* menos importancia: así, diez muertos de hambre en Etiopía *carecen de importancia*.

Hay que insistir ante los espectadores de los programas informativos que el horror nunca es *aceptable* ni *lógico*. Que la miseria y la violencia no son *consecuencias inevitables* de situación alguna, ni mucho menos resultan consustanciales a la cultura o la historia de ningún pueblo. Convendría, por ejemplo, recordar que la barbarie nazi —con campos de exterminio y hornos crematorios, empleo de mano de obra esclava y utilización de seres humanos en experimentos, incluso el aprovechamiento de cuerpos de víctimas del exterminio físico de minorías para fabricar jabón— no han tenido parangón en ningún país tercermundista: ni siquiera en la Camboya de Pol Pot se llegó a tales extremos, ni las matanzas tribales en Ruanda resultaron más atroces que las limpiezas étnicas en Bosnia. Por no hablar de la guerra española, con hechos puntuales tan atroces como haber toreado hombres en Badajoz.

La «Declaración de Madrid: periodistas contra el racismo y la xenofobia» (firmada el 25 de marzo de 1998 por organizaciones profesionales y sindicales de periodistas de Alemania, España, Francia, Irlanda, Italia, Portugal y Reino Unido) estableció que «*no se puede ser neutral ante el racismo y la xenofobia*». Una frase similar a la que ha repetido muchas veces Juan de Dios Ramírez Heredia, periodista y presidente de la Unión Romaní: «*en la lucha contra el racismo no cabe la objetividad. El periodista no puede militar en el mismo campo de los racistas.*» Aquella declaración de Madrid denunciaba la existencia de prejuicios y estereotipos periodísticos al informar sobre personas o grupos étnicos, sociales, religiosos o culturales diferenciados. Y recomendaba promover, en el marco de una cultura de paz y democracia, «*el rechazo de la difusión acrítica de mensajes racistas y xenófobos*», así como la «*potenciación de valores educativos y formativos para un correcto conocimiento de las minorías.*»

Frente a las tan repetidas teorías sobre la *objetividad informativa*, consideradas como principio profesional fundamental e irrenunciable, y expuestas casi como un dogma de fe en todas las facultades y escuelas de periodismo y televisión, los periodistas deberíamos proclamar y ejercer el derecho a cuestionar los

límites de esa objetividad en el tratamiento de determinadas realidades. Antes que meros informadores, los periodistas somos personas que nos vemos directamente afectados por las circunstancias sociales; personas que debemos examinar de forma crítica la realidad en que nos movemos y reaccionar frente a ella, que tenemos el derecho a indignarnos ante la injusticia y a hacer patente nuestra indignación, que no podemos reprimir nuestros sentimientos de dolor o impotencia ante las tragedias humanas para limitarnos a exponerlas de modo *objetivo*, sin investigar sus causas y señalar a sus responsables y beneficiarios últimos.

Los periodistas debemos ser capaces de transmitir a los espectadores de los informativos de televisión nuestras propias emociones ante el horror o la injusticia, mediante encuadres enfáticos en el rodaje, con un manejo adecuado de los adjetivos en el texto y la entonación precisa en su lectura, y con una selección intencionada de imágenes en el montaje. Si lo logramos, evitaremos que se produzca la *deshumanización de la información* como última y más perversa consecuencia de la aplicación del *dogma de la objetividad*. Y conjurando el riesgo de que el espectador *objective* las tragedias, combatiremos una mentalidad enfermiza que se acostumbra a la desigualdad y a la violencia, y que no valora igual la tortura, el hambre, la opresión, la enfermedad o la muerte, según se produzcan en *naciones atrasadas* o en los países desarrollados de nuestro entorno. La información no puede ser fría, aséptica, cuando habla de principios éticos universales y de derechos irrenunciables. No reclamo *posturas militantes*, pero sí una *subjetividad ética*, una actitud comprometida con los valores esenciales del ser humano. Porque debemos estar conscientes de que el tratamiento de este tipo de noticias puede y debe actuar como revulsivo social, o como fulminante de actitudes solidarias. Como proclama Bernard Kouchner, fundador de Médicos Sin Fronteras y actual máximo responsable de Naciones Unidas en Kosovo: «*sin imágenes no hay indignación; sin imágenes la injusticia sólo golpea a los desdichados; el gran enemigo de las dictaduras y del subdesarrollo son las imágenes. Utilicémoslas.*»

VICENTE ROMERO

LAS MINORÍAS Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: RÉGIMEN JURÍDICO Y PROPUESTAS PARA LA ELABORACIÓN DE UN CÓDIGO DEONTOLÓGICO

Por CARLOS R. FERNÁNDEZ LIESA,
Profesor titular de Derecho
Internacional Público

SUMARIO: I. SOCIEDAD INTERNACIONAL, LIBERTAD DE INFORMACIÓN Y MINORÍAS: a) *El reconocimiento jurídico internacional de la libertad de expresión y de información.* b) *Cambios en la sociedad internacional, medios de comunicación y derechos humanos.* c) *La necesidad de un desarrollo progresivo de los estándares éticos de los medios en relación con las minorías.* II. EL TRATAMIENTO DE LAS MINORÍAS EN LOS CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS PERIODÍSTICOS. III. EL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN E IGUALDAD. EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA PROTECCIÓN DE LAS MINORÍAS: a) *Principio de no discriminación e igualdad.* b) *El impulso por los medios de comunicación de medidas de acción positiva en favor de las minorías.* c) *Medios de comunicación y lucha contra las discriminaciones indirectas.* IV. IDENTIDAD, PLURALISMO Y PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA LUCHA CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA: a) *Derecho a la identidad, valor del pluralismo y papel de los medios de comunicación en una sociedad democrática.* b) *El papel de los medios de comunicación en la educación en los derechos humanos y de las minorías.* c) *El papel de los medios de comunicación en la lucha contra el racismo y la xenofobia.* V. LA NECESIDAD DE IMPULSAR EL ACCESO Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS MINORÍAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: a) *El insuficiente desarrollo del derecho de acceso en el ordenamiento español.* b) *La tendencia en el Derecho internacional de fomentar y*

favorecer la participación y acceso de las minorías a los medios de comunicación y el papel de éstos. VI. EL DERECHO INTERNACIONAL Y LOS PERIODISTAS AL SERVICIO DE LA PAZ: LA PROHIBICIÓN DE TODA PROPAGANDA EN FAVOR DE LA GUERRA: a) *La propaganda, instrumento de la política exterior de los Estados.* b) *La prohibición de la propaganda en favor de la guerra.* c) *Otros aspectos objeto de desarrollo progresivo en el Derecho internacional.* VII. LA PROHIBICIÓN DE APOLOGÍA DEL ODIOS NACIONAL, RACIAL O RELIGIOSO QUE CONSTITUYA INCITACIÓN A LA DISCRIMINACIÓN Y LA RESPONSABILIDAD ÉTICA DE LOS PERIODISTAS. VIII. LA RESPONSABILIDAD PENAL INDIVIDUAL INTERNACIONAL DEL PERIODISTA POR INSTIGACIÓN DIRECTA Y PÚBLICA A LA COMISIÓN DEL DELITO DE GENOCIDIO Y DE CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD. IX. REFLEXIONES FINALES SOBRE LA ELABORACIÓN DE UN CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: a) *Sobre las personas y grupos desfavorecidos destinatarios de la protección.* b) *Sobre las obligaciones y los deberes ético-jurídicos de los profesionales de la información y de los medios de comunicación.* c) *Sobre el control del cumplimiento del código: la necesidad de crear un órgano de control externo a los medios.*

Con carácter previo debemos indicar, para no entrar en un debate interminable¹, que en este estudio utilizaremos una *noción muy amplia de minorías que incluye a los miembros de las minorías en su acepción jurídica inter-*

¹ Sobre el concepto jurídico de minoría utilizado en Derecho internacional *vid.* MARIÑO MENÉNDEZ, F. M., «Desarrollos recientes en la protección internacional de los derechos de las minorías y de sus miembros», en especial el punto III, en *La protección internacional de las minorías*, MARIÑO MENÉNDEZ, F. M.; DÍAZ BARRADO, C. M.; FERNÁNDEZ LIESA, Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales, Madrid, 2001. *Vid.*, además, CAPOTORTI, F., *Estudio sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas*, Naciones Unidas, Nueva York, 1991; DÍAZ BARRADO, C. M., *La protección de las minorías nacionales por el Consejo de Europa*, Edisofer, Madrid, 1999; GONZÁLEZ VEGA, J., «La protección internacional de las minorías en Europa», *Cursos de derechos humanos de Donostia-San Sebastián*, vol. I, Derechos de las minorías, UPV, 1999, pp. 49 y ss; CONTRERAS MAZARIO, J. M., «La protección internacional de las minorías religiosas: algunas consideraciones en torno a la declaración de los derechos de las personas pertenecientes a minorías y al Convenio-marco sobre la protección de las minorías», *Anuario de Derecho internacional*, vol. XV, 1999, pp. 159-203. *Vid.*, por lo demás, desde una perspectiva general, en la doctrina española, de la protección internacional de los derechos humanos y de las minorías: ESCOBAR HERNÁNDEZ, C., *La protección internacional de los derechos humanos*, caps. XXVII y XXVIII, «Instituciones de Derecho internacional público», Díez de Velasco, 12.^a ed., Tecnos, Madrid, 1999, pp. 535-585; GONZÁLEZ CAMPOS, I., SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, L. I., ANDRÉS SÁENZ DE SANTAMARÍA, M. P., *Curso de Derecho internacional público*, Civitas, 1998, pp. 719-757; REMIRO BROTONS, A., RIQUELME CORTADO, R. M., ORIHUELA CALATAYUD, E., DÍEZ-HOCHLEITNER, J., PÉREZ-PRAT DURBAN, L., *Derecho internacional*, Mc Graw Hill, Ciencias jurídicas, 1997, pp. 1021-1057; CARRILLO SALCEDO, J. A., *Soberanía de los Estados y derechos humanos en el Derecho internacional contemporáneo*, Madrid, Tecnos, 1995; del mismo autor, *Dignidad frente a la barbarie: la Declaración Universal de Derechos Humanos, cincuenta años después*, Madrid, Trotta, 1999.

nacional, pero también a los inmigrantes, las subminorías (mayorías en el Estado y minorías en una región) y otros grupos vulnerables. La razón de ello es que el objeto de este trabajo es eminentemente práctico, con la finalidad de contribuir a la elaboración de un código de conducta que no parece razonable que únicamente se aplique a los miembros de las minorías, o las minorías en cuanto tales, entendidas en sentido jurídico, dado que éstas tienen una problemática jurídica específica en la sociedad internacional distinta a la del tratamiento por los medios de comunicación del conjunto de grupos humanos en situación de vulnerabilidad.

En este estudio indagamos en las diferentes dimensiones que pueden verse afectadas en el desarrollo de los estándares éticos y también jurídicos, sobre la protección de las minorías y de los grupos vulnerables en el contexto del ejercicio de la profesión periodística y de la labor de las empresas informativas.

I. SOCIEDAD INTERNACIONAL, LIBERTAD DE INFORMACIÓN Y MINORIAS

a) **El reconocimiento jurídico internacional de la libertad de expresión y de información**

En el orden internacional contemporáneo se produce un cambio de orientación debido a la inserción en la Carta de las Naciones Unidas de un *principio constitucional de protección internacional de los Derechos Humanos*, es decir, de todas las personas, con independencia de criterios de reciprocidad interestatal, o de regímenes convencionales regionales específicamente protectores de determinadas personas o derechos. Ya durante la II Guerra Mundial surgió la idea, recurrente en momentos singulares de la historia, de crear un nuevo orden mundial, auspiciada por Estados Unidos². En la concepción de Roosevelt –mensaje de 6 de enero de 1941– se debía basar en cuatro pilares (la libertad religiosa, la seguridad internacional, el derecho de estar al abrigo de las necesi-

² Lo mismo había ocurrido durante la I Guerra Mundial, impulsado por el Presidente Wilson, y ocurriría después de la caída del muro, impulsado por el Presidente G. Bush. Vid. KAMINSKY, C.; KRUK, S., *Le nouvel ordre international*, Que sais-je?, Puf, París, 1993, 127 pp; REMIRO BROTONS, A., *Civilizados, bárbaros y salvajes en el nuevo orden internacional*, McGraw Hill, Ciencias jurídicas, Madrid, 1996, 222 pp; MERLE, M., *La crise du Golfe et le nouvel ordre international*, Économica, París, 1991, 113 pp.

dades), entre los que cabe destacar la *libertad de expresión*, elemento lógico en la perspectiva conceptual liberal de los derechos humanos que promocionaron los Estados vencedores de la guerra (a salvo la Unión Soviética y, posteriormente, sus países satélites).

Desde ese momento, en el Derecho internacional entra también la preocupación por los principios de la libertad de expresión y de información. Así, la *Res. 59 (1) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada en 1946* señala que:

«La libertad de información es un *derecho humano fundamental* y piedra de toque de todas las libertades a las cuales están consagradas las Naciones Unidas (...). La libertad de información requiere, como elemento indispensable, la voluntad y la capacidad de no usar y no abusar de sus privilegios. Requiere, además, como disciplina básica, la obligación moral de investigar los hechos sin prejuicio y difundir las informaciones sin intención maliciosa.»

Antes incluso de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre marzo y abril de 1948, se celebró en Ginebra una *Conferencia sobre la libertad de información y de prensa* que estableció ciertos principios generales. Así, se concebía la libertad de información como un derecho fundamental, no sólo de los gobiernos o de las agencias informativas, sino del pueblo; se rechazaban los monopolios informativos y se establecían ciertos límites frente a la libertad de expresión³.

Pocos meses después, la *Declaración Universal de Derechos Humanos*, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, indicaba en su artículo 19:

«Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.»

El *Pacto de Derechos civiles y políticos* de 1966 precisaba aún más, en el artículo 19 al señalar que:

«1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

³ Entre los mismos se hacía referencia a motivos tales como la seguridad nacional; incitar a las personas a alterar mediante la violencia el sistema de gobierno o a promover desórdenes; incitar a las personas a cometer actos criminales; o actos obscenos o peligrosos para la juventud; o difamatorios contra las personas; o que infrinjan derechos artísticos; o frente a la difusión sistemática o deliberada de información falsa o distorsionada que afecte a las relaciones amistosas entre los pueblos o los Estados.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión: este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.»

Del mismo modo, el artículo 20 [1, a) y d)] de la *Constitución española* protege el derecho a expresar y difundir los pensamientos ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

Pero estas libertades de expresión y de información tienen determinados límites jurídicos y en relación con los mismos es exigible, además, un comportamiento ético de los periodistas fundamentalmente por lo que se refiere a la protección de las minorías y grupos vulnerables, como veremos a lo largo de este estudio.

b) Cambios en la sociedad internacional, medios de comunicación y derechos humanos

La denominada *mediatización de las relaciones internacionales* no es una novedad, y los especialistas han analizado desde hace tiempo su alcance, técnicas e impacto⁴. Pero la *creciente importancia que tienen los medios de comunicación en los Estados y en la sociedad internacional del tiempo presente*, los cambios en la sociedad internacional⁵ y la configuración de una nueva estructura de las comunicaciones⁶, *exigen una profundización y una mayor responsabilidad y exigencia en la dimensión axiológica de su labor*.

⁴ Vid. COLARD, D., *Les relations internationales de 1945 à nos jours*, 7.^a edition, Armand Colin, París, 1997, p. 84.

⁵ Ahora se puede decir que vivimos en un mundo más pequeño e interdependiente, en el que habitan nuevos actores, nacen nuevas normas, crecen los mercados, se reduce el espacio y el tiempo, cambia de sentido la noción de fronteras y en el que perduran y se agudizan las desigualdades económicas y tecnológicas.

⁶ Mediante la que aparece la nueva distinción –junto a la clásica de los que tienen y los que no tienen– de los que «saben y los que no saben» –en términos de acceso a las nuevas tecnologías. Cfr. *Informe sobre el desarrollo humano 1999*, Ediciones Mundi-Prensa, Madrid, 1999, p. 57.

A ello no es ajeno el consabido fenómeno de la *globalización* y, en particular, la revolución informática y el impacto de las nuevas tecnologías de la comunicación en el ámbito de los derechos humanos. Por lo que respecta a lo primero, cabe señalar, brevemente, que la globalización es un factor de transformación del sistema mundial, que genera *potencialidades y riesgos para los medios de comunicación* y su papel en el ámbito de los derechos humanos y de las minorías.

Entre las *potencialidades*, cabe resaltar la progresiva aparición de una conciencia planetaria que hace más relevante el papel de los Medios como instrumentos de canalización y de focalización de la opinión pública en torno a determinados temas de «interés» para la opinión pública mundial. Así, esto ha producido un incremento de la preocupación por los problemas medioambientales, humanitarios y de los derechos humanos, por la democracia, fomentando la aparición de nuevos valores más ampliamente compartidos.

Entre los *riesgos*, cabe indicar que el ciber mundo genera la dualización de la humanidad (junto al mundo institucional el mundo de las fuerzas vivas, estas últimas poco sometidas a un control democrático), en medio de espacios virtuales en los que se desterritorializa el territorio y donde se reducen los espacios políticos (la razón política es sustituida por la razón técnica; el ensanchamiento del espacio económico y social no se ve acompañado de una similar amplitud del espacio político). Esto puede provocar y en algunos ámbitos así sucede un mayor déficit democrático, una cierta deslegitimación del Derecho y del Estado. Para algunos, como A. Minc, supone una vuelta a la Edad Media, es decir, al crecimiento de zonas grises, sin autoridad, donde la desintegración en casillas (en expresión de Naef) era la característica predominante.

Por lo que se refiere a lo segundo, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación generan potencialidades y riesgos para los derechos humanos, en particular por cuanto que es un medio que está sirviendo para la difusión impune de mensajes y materiales de alto contenido racista, frente a los que el legislador debe adoptar medios de reacción judiciales más eficaces, que exigen una mayor cooperación internacional, y en relación con los cuales deben tener una obligación de diligencia las empresas que operan en ese sector.

Así, recientemente en el *Tribunal de Alta Instancia de París*⁷, la empresa *Yahoo* intentó persuadir a la justicia francesa de la «dificultad de instalar filtros (y de su ineficacia, dado que eran evitables) para evitar que los franceses pudiesen adquirir a través de ese portal objetos con reproducciones de los botes de gas

⁷ Vid. Asunción SERENA, *El Mundo*, de 12 de agosto de 2000, p. 22.

mortal Zyklon B, utilizados en los campos de muerte, o brazaletes con la cruz gamada. La LICRA (*Liga internacional contra el racismo y el antisemitismo*) y la UEJF (*Unión de estudiantes judíos de Francia*) habían denunciando a la empresa exigiendo que se filtrase el acceso al sitio de subastas y pidiendo sanciones de 33,2 millones de pesetas diarios. El portal francés Yahoo.fr dispone de vínculos a los *webs* de subastas inculpadados, por lo que el fiscal B. Fos ha solicitado la opinión de tres expertos para que respondan a dos preguntas: una, si Yahoo ha hecho todo lo que está en su mano para aplicar la sentencia (impedir el acceso de franceses al sitio de subastas); y dos, cuáles son todas las soluciones posibles para aplicar un filtro eficaz, aunque no sea infalible.

Consciente de esta *nueva problemática*, en relación con la cual las soluciones tecnológicas y jurídicas no están todavía elaboradas, en las conclusiones preparatorias de la *Conferencia europea contra el racismo* (de 25 de mayo de 2000) se llama la atención de los Estados sobre la necesidad de cooperar para responder frente a la diseminación de material racista por Internet, a incrementar la cooperación judicial, establecer mecanismos de intervención y responsabilidades, así como una obligación de diligencia de las empresas que operan en el sector, a suprimir los contenidos ilegales, y a utilizar ese medio para concienciar a los internautas, especialmente a los niños, sobre el problema de la difusión de mensajes racistas por Internet.

El Derecho debe regular estos nuevos problemas que la tecnología plantea a los derechos humanos, y que están suponiendo una transformación del caldo de cultivo en el que se configura la opinión pública⁸, en un contexto en el que algunos autores, como Sartori⁹, llegan a decir que la «videocracia está fabricando una opinión sólidamente heterodirigida que aparentemente refuerza, pero que en sustancia vacía, la democracia como gobierno de opinión». Hoy es, por tanto, muy relevante, la formación de los periodistas sobre sus deberes en una sociedad democrática. En este sentido es destacable, asimismo, el creciente papel que tiene la opinión pública en la sociedad internacional contemporánea y los vínculos de su acción con la promoción de una ética universal¹⁰.

⁸ La opinión pública, señala el profesor A. TRUYOL, debería ser, en principio y por definición, algo espontánea. Pero, como apunta este autor, las condiciones de organización y de técnica de toda índole en la difusión y presentación de las noticias, acrecientan las posibilidades del Estado y de los grupos privados más fuertes en la configuración y manipulación de la opinión pública. TRUYOL SERRA, A., *La sociedad internacional*, Alianza Universidad, 1991, p. 169.

⁹ SARTORI, G., *Homo videns. La sociedad teledirigida*, Taurus, Madrid, 1998, p. 72.

¹⁰ Vid. DUPUY, P. M., «Considerations sur l'opinion publique internationale dans ses rapports avec le droit», *Les relations internationales à l'épreuve de la science politique*, Mélanges M. Merle, Economica, París, 1993, pp. 303-310; MERLE, M., «Le Droit international et l'opinion

c) **La necesidad de un desarrollo progresivo de los estándares éticos de los Medios en relación con las minorías**

Los Medios tienen una responsabilidad ética que deben asumir y reforzar, siendo ineludible el respeto de los principios y reglas jurídicas así como de unos *principios éticos compartidos universalmente como base de su acción*. Y ello es así especialmente en la defensa de los *derechos humanos* y, *muy particularmente de los derechos de las minorías*, donde se están multiplicando los problemas ¹¹ derivados de la acción (o inacción) de los medios de comunicación.

Algunos instrumentos internacionales elaborados fundamentalmente en la UNESCO ponen de manifiesto el nexo existente entre la labor de los medios de comunicación y la promoción de ciertos valores de ética pública internacional, aludiendo a la *dimensión axiológica que exige el ejercicio de la libertad de opinión, de expresión y de información*.

En este sentido, el 28 de noviembre de 1978 la vigésima reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura proclamó la *Declaración sobre los principios fundamentales relativos a la contribución de los medios de comunicación de masas al fortalecimiento de la paz y la comprensión internacional, a la promoción de los derechos humanos y a la lucha contra el racismo, el apartheid y la incitación a la guerra*. En la misma se considera que los medios de comunicación constituyen un factor esencial para avanzar en la difusión más amplia de la información relativa a ciertos objetivos y principios de universal aceptación. Cabe sintetizar, a mi juicio, tres reflexiones en torno a esa Declaración:

- a) En primer lugar, el hecho de que la labor del periodista es un factor esencial para el «*fortalecimiento de la paz y de la comprensión internacionales*» (art. II.1), al promover el conocimiento de la situación de los derechos humanos y a hacer «oír la voz de los pueblos oprimidos (...) y todas las formas de discriminación racial y de opresión (...)».

publique», *RCAD I*, vol. I, 1973, pp. 377-411; CALDUCH CERVERA, R., «El público, la opinión pública y las relaciones internacionales: Actuaciones para un estudio de los procesos de comunicación en la sociedad internacional», *Pensamiento jurídico y sociedad internacional. Estudios en honor del profesor A. Truyol Serra*, I, Centro de Estudios de la Universidad Complutense, 1986, pp. 251-271.

¹¹ Vid. WEERAMANTRY, G., «The Media as a threat to human rights. Part. I. Problems and trends. Part. II. An Agenda for Action», *Justice without frontiers: furthering human rights*, Kluwer Law international, 1997, pp. 279-374.

b) En segundo lugar, los medios, al difundir la información relativa a los ideales, aspiraciones, culturas y exigencias de los pueblos deben «*contribuir a eliminar la ignorancia y la incompreensión entre los pueblos, a sensibilizar a los ciudadanos de un país a las exigencias y las aspiraciones de los otros, a conseguir el respeto y dignidad de todas las naciones, de todos los pueblos y de todos los individuos, sin distinción de raza, de sexo, de lengua, de religión o de nacionalidad, y a señalar a la atención los grandes males que afligen a la Humanidad, tales como la miseria, la desnutrición y las enfermedades*» (art. III.2). Todo ello supone colaborar en la lucha *contra el racismo, el apartheid, la propaganda belicista y la reducción de las tensiones internacionales*.

c) En tercer lugar, la declaración resalta el papel que tienen los medios en la *educación* (art. IV), fundamentalmente de los «jóvenes en un espíritu de paz, de justicia, de libertad, de respeto mutuo y comprensión, a fin de fomentar los derechos humanos, la igualdad de derechos entre todos los seres humanos y naciones, y el progreso económico y social».

El grupo de trabajo (de minorías) de la Subcomisión de prevención de la discriminación y protección de minorías de las Naciones Unidas, creado con objeto de supervisar el desarrollo progresivo y la aplicación de la *Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas*, aprobada por la Asamblea General, el 19 de diciembre de 1992 (Res. 47/135), identifica como un ámbito de acción necesario el *papel que los Medios de comunicación pueden tener en favor de la tolerancia y del impulso al multiculturalismo, estimulando así la existencia de condiciones que den una mayor efectividad, conocimiento y goce de los derechos*.

Durante la tercera sesión de trabajo del Grupo de Minorías, celebrada el 7 de mayo de 1997, el Sr. Ahmed Khalil presentó un *Working Paper* titulado *The rights of minorities and the role of the media*¹², con objeto de empezar a establecer algunos elementos del debate. Llega a la conclusión de que «es necesario prestar mayor atención al papel de los Medios en la promoción de los Derechos Humanos y, en particular, de los derechos de las minorías».

La efectividad de muchos derechos humanos y de las minorías depende, muy especialmente, de la *concienciación y difusión* sobre los mismos. Incluso, ello ocurre así en países plenamente democráticos en los que, como señala Khalil (p. 4) «la libertad de expresión y de información no aseguran por sí solos la protección de los derechos de las minorías, pudiendo existir, aunque sea de manera latente, tendencias asimilacionistas». Aunque en cada país las

¹² E/CN.4/Sub.2/AC.5/1997/WP.4.

situaciones y los problemas difieren, los medios de comunicación pueden contribuir a fomentar el pluralismo y el multiculturalismo, en el respeto del Derecho a la identidad, individual y colectiva, de las personas pertenecientes a las minorías, así como del grupo mismo.

Los medios de comunicación, sin embargo, suelen por lo general tratar «los temas de derechos humanos y de minorías de manera intermitente y restringida, con ocasión de grandes conmemoraciones (Día internacional de los derechos humanos, cincuentenario de la Declaración Universal de Derechos Humanos) o de graves violaciones y crímenes internacionales (en este caso, normalmente introduciendo preocupantes elementos de selectivismo y criterios políticos)»¹³. *No habría así una interiorización de la función que, en el día a día, juegan los medios de comunicación en la defensa de los derechos humanos y de las minorías, en cada sociedad, interna o internacional.*

En algunos países, las minorías étnicas (o los pueblos autóctonos) tienen sus propios medios de comunicación, como los aborígenes en Australia, los inuits en Groenlandia, los nativos americanos en Estados Unidos y Canadá o los mapuches en Chile, y en su conjunto promueven el multiculturalismo y constituyen una resistencia a la asimilación –aunque sólo sea por el hecho de su mera existencia–, facilitando el mantenimiento de lenguas minoritarias, la preservación de su identidad, de su cultura, de su religión, etc.

Pero esto ni está generalizado ni es suficiente. *El mantenimiento del pluralismo (no sólo político, en una democracia, sino también cultural, social) en una sociedad depende(rá) de que la mayoría dominante (política y culturalmente) acepte y se acomode al pluralismo, respetando y aun promocionando la diversidad.* Al igual que se protege la biodiversidad ecológica la diversidad humana es una riqueza por sí misma que debe ser respetada –también por respeto a la dignidad de «los otros»–, igual que debe respetarse la libre elección individual en cuanto al autorreconocimiento como perteneciente a un grupo (o a ninguno); pero partiendo de la presunción *iuris tantum* de que los miembros de las minorías desean seguir manteniendo sus características diferenciales (de lengua, religión, cultura). En caso contrario, se acaba fomentando la *asimilación forzosa o sutil*, como muestra la historia y que, en algunos casos, se produce a la inversa, como evidencian en la actualidad las situaciones de diglosia existentes¹⁴.

¹³ En este sentido Khalil, cit., punto 7.

¹⁴ Vid. mi libro *Derechos lingüísticos y derecho internacional*, editorial Dykinson, Madrid, 1999, 180 pp.

En definitiva, *la protección de las minorías requiere una actitud de apoyo por la mayoría y por los medios de comunicación mayoritarios, de acciones positivas para superar la mera aplicación del principio de no discriminación, que no resuelve todos los problemas*. Pueden jugar un papel muy positivo, de muchas maneras —como iremos viendo— y, en todo caso, deberían dar más «preeminencia a la contribución de la minoría a la vida nacional que presentarla en términos de los problemas que crean a la mayoría»¹⁵. Y es que, por lógica, los medios mayoritarios que, como es obvio, son la inmensa mayoría, tienden a presentar la cultura de la mayoría, «salvo que realicen un esfuerzo consciente para no excluir la cultura minoritaria, sirviendo en este caso como vehículos para proyectar el multiculturalismo como un enriquecimiento de la sociedad»¹⁶.

II. EL TRATAMIENTO DE LAS MINORÍAS EN LOS CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS PERIODÍSTICOS

En 1998 se organizó un *seminario sobre el papel de los Medios en la protección de las minorías*, en el que los participantes adoptaron nueve recomendaciones para que fuesen impulsadas por el grupo de trabajo¹⁷ de minorías de la Subcomisión para la prevención de la discriminación (y la protección de las minorías) de las Naciones Unidas. Su finalidad es que el grupo influya en los Estados para que apoyen modificaciones en su comportamiento con las minorías, con la finalidad de alcanzar un entendimiento mutuo entre minorías y mayorías, para lo cual es necesario profundizar en una perspectiva multicultural. Entre otras, la primera recomendación presta especial atención a los *códigos deontológicos*¹⁸, al señalar que:

«(punto 1.a.) el grupo de minorías debería recomendar que las asociaciones de prensa y de periodistas *se autorregulen en cuanto a su ética profesional, desarrollando e implementado códigos de conducta para proteger a las minorías y promover su entendimiento intercultural a través de los “Medios”*. Un

¹⁵ En este sentido Khalil, conclusión núm. 3.

¹⁶ Khalil, conclusión núm. 4.

¹⁷ «Recommendations of the expert seminar on the role of the media in protecting minorities», en EIDE, A., *Prevention of discrimination against and the protection of minorities. Report of the working group on minorities on its fourth session*, Geneva, 25-29 de mayo 1998, E/CN.4/Sub.2/1998/18, 6 de julio de 1998.

¹⁸ También recomendaba impulsar esta vía el artículo VIII de la *Declaración sobre los principios fundamentales relativos a la contribución de los medios de comunicación de masas (...)*, de 1978, antes citada.

esfuerzo especial debe hacerse para asegurar que los representantes de las minorías se involucren; especial atención debe prestarse a las perspectivas interculturales en este proceso. Los Estados deberían asegurar la existencia y condiciones favorables para que este proceso pueda tener lugar.

«(punto 1.b) El grupo de trabajo debería consultar a los gobiernos, agencias especializadas y Organizaciones no gubernamentales (que incluyan minorías) sobre la relevancia de los códigos de conducta (...).»

Del mismo modo, una de las propuestas preparatorias sobre Conclusiones de la *Conferencia Europea contra el racismo* (la núm. 56) señala que:

«Debido a la influencia que los medios pueden ejercer y a su positivo papel en incrementar la concienciación, y teniendo en cuenta la necesidad de independencia de los medios, la Conferencia europea recomienda que los profesionales de los medios *deberían desarrollar códigos de conducta en relación con el combate del racismo en los medios de comunicación*. Estos códigos deberían realizarse con elevados estándares éticos (...).»

En España, la *Unión Romaní* ha propuesto en un *Manual para periodistas*:

«Avanzar en la autorregulación de la industria y la profesión periodística y promover la creación de estatutos de redacción o códigos deontológicos que recojan unos principios de conducta ética en relación con las minorías étnicas. Pocos sistemas de control se han revelado tan eficaces y democráticos a la vez como los realizados desde el propio seno de la profesión, por cuanto suponen una concienciación previa y evitan cualquier injerencia exterior.»

Estas conclusiones parecen indicar que, hasta el momento, en la mayoría de los países todavía no se han introducido en los códigos deontológicos de los periodistas y de los medios de comunicación disposiciones precisas sobre los medios y las minorías, poniendo de manifiesto, al mismo tiempo, su importancia.

Veamos ahora –sin ánimo de exhaustividad– cuál es el tratamiento que dan a la cuestión algunos de los principales códigos deontológicos, en función de que incluyan deberes de los profesionales de la información en el ámbito de los derechos humanos y de las minorías.

a) En primer lugar cabe hacer referencia a aquellos *códigos deontológicos* (y *libros de estilo, estatutos de redacción o idearios*) que no se refieren en absoluto, ni directa ni indirectamente, a los derechos humanos ni a los derechos de las minorías. Así ocurre con el código ético de conducta periodística de CNN+, con el dodecálogo de deberes del periodista ¹⁹, con los códigos

¹⁹ La *Asociación de editores de diarios españoles* imprimió, el 15 de octubre de 1990 (en edición no venal) este dodecálogo, formulado por el escritor don Camilo José Cela, conteniendo

deontológicos europeos formulados hasta los años ochenta²⁰, con los códigos deontológicos de periodistas especializados y técnicos y periodistas económicos²¹ e incluso con libros de estilo de periódicos de gran reputación²².

b) Otros códigos deontológicos introducen una *cláusula general de no discriminación*, con mayores o menores matices. Así se hace en el Estatuto de redacción de *El Periódico de Cataluña* de noviembre de 1993, establece entre los derechos y deberes de los periodistas (punto 5) que:

«Las informaciones no se publicarán nunca de forma que supongan algún tipo de discriminación por razones de ideología, religión, sexo, raza, procedencia social o cultural.»

El código deontológico recientemente aprobado por el *Sindicato de periodistas de Madrid*, indica (art. 15.2) que:

«El/la periodista deben evitar el uso de todo lenguaje discriminatorio ya sea por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.»

La Declaración de principios sobre la conducta de los periodistas, aprobado en el congreso de la FIP, celebrado en Helsingør en junio de 1986 indica (disposición 7) que:

las doce reglas básicas a las que a su juicio debe ajustarse el periodista en el ejercicio de su profesión.

²⁰ El primer código, de diciembre de 1918, elaborado por el *Sindicat National des Journalistes*; tampoco hace referencia a ellos el *código de conducta de la Federación internacional de periodistas (FIP)*, de 1954; ni la *Carta de Múnich, de 25 de noviembre de 1971*, formulada por los sindicatos de periodistas de la Comunidad Europea, así como los de Austria y Suiza (y adoptado por la FIP y la *Organization internationale des journalistes*), ésta con influencia en los países de Europa del Este, entonces bajo regímenes comunistas.

²¹ Así ocurre con el *código sobre normas éticas y deontología profesional del periodista especializado y técnico*, aprobado en el Congreso Iberoamericano de periodistas especializados y técnicos, celebrado en octubre de 1994 en Medellín (Colombia), o con el *código de conducta para los miembros de la Asociación de periodistas de información económica (APIE)* (aunque éste hace referencia en el p. 1.41 a que no deben utilizarse determinadas frases malsonantes como «le hizo una judiada», «le engañó como a un chino», «Eso es una gitanería»), con el *código de ética profesional de actualidad económica*, con las *líneas de conducta para los periodistas financieros del Press Council de Londres*, con el *reglamento de conflicto de intereses de la Dow Jones Company*, o con el *código de autodisciplina de los periodistas de Il Sole 24 ore*.

²² El libro de estilo de *The Washington Post* únicamente indica, con gran prepotencia: «Reconocemos absolutamente que el poder que hemos heredado como principal diario de la mañana en la capital del mundo libre conlleva responsabilidades especiales: escuchar a los sin voz; evitar todos y cada uno de los actos de arrogancia [el primero que deberían evitar es el de autocalificarse como lo hacen]; estar frente al público con educación y franqueza».

«El periodista se cuidará de los riesgos de una discriminación propagada por los medios de comunicación y hará lo posible para evitar que se facilite tal discriminación, fundamentada especialmente en la raza, el sexo, la moral sexual, la lengua, la religión, las opiniones políticas, así como el origen nacional o social».

c) *Otros introducen de manera indirecta algunos deberes de protección en relación con ciertos grupos humanos y a la luz de expresiones que deberían evitarse al referirse a los mismos.* Carecen, por lo general, de un tratamiento sistemático y global del problema, aun cuando suponen un avance al haber identificado algunos problemas de las minorías.

Así, en el *Libro de estilo de El País* (p. 1.41) se señala que:

«Nunca deben utilizarse palabras o frases que resulten ofensivas para una Comunidad. Por ejemplo, «le hizo una judiada», «le engañó como a un chino», «eso es un gitanería».

Y, posteriormente (p. 339) se especifica que «los gitanos no constituyen una raza, sino una etnia con rasgos físicos y culturales comunes. No puede hablarse por tanto de «individuo de raza gitana». El hecho de que una persona sea gitana no debe citarse en los informativos a no ser que constituya un elemento fundamental de la noticia. Podría hablarse de la discriminación que sufre un «barrio de gitanos», por ejemplo, pero nunca de que el protagonista de un información es gitano, si ello no aporta un dato sin el cual perdería sentido la noticia. Tampoco se pueden emplear expresiones despectivas como «esto es una gitanería» o «le hizo una gitanería». También se indica que (p. 307) «etnia no debe tomarse como sinónimo de raza» sino que significa «comunidad humana definida por afinidades raciales, culturales etcétera»²³.

El Mundo es el único medio de comunicación que se refiere, aunque de manera escueta, específicamente a las minorías, en su *Estatuto de redacción* (art. 2, pár. 2, del capítulo II sobre principios ideológicos del periodismo), al indicar que «será especialmente sensible a los derechos de las minorías». Por lo demás en el *Manual de estilo de El Mundo* se especifica (p. 111) que:

«las expresiones despectivas sobre etnias, religiones o grupos determinados están prohibidas, y deben vigilarse de cerca aquellos casos en los que aparentemente una mención no es racista, pero en el contexto resulta serlo: por ejemplo, la mención de determinados gitanos o marroquíes en sucesos en los que el origen

²³ *El País*, según la *Declaración del Presidente de P.R.I.S.A.*, de marzo de 1977 «debe ser un periódico liberal, independiente, socialmente solidario, nacional y europeo (...). Liberal, en opinión del Sr. Polanco significa, entre otras cosas, «estar dispuesto a comprender y escuchar al prójimo, aunque piense de otro modo».

de los implicados es tan irrelevante como si fuesen aragoneses, rubios o adventistas. Naturalmente, deben evitarse las expresiones despectivas como “le engañaron como a un chino”, “una merienda de negros” o “fue una judiada”.»

Por su parte, los *Principios básicos y líneas generales de la programación de los medios dependientes del ente público RTVE* (de 30 de julio de 1981) indican que:

«la sensibilidad social exige un cuidadoso uso de aquellos términos de índole calificativa –tales como gitano, homosexual, parado, extranjero, etc., que pudieran ser utilizados o interpretados de forma peyorativa, o relacionados con hechos condenables en aparente relación causa-efecto o que pudieran inducir actitudes de marginación.»

Es también destacable el *Ideario de la COPE* (aprobado por el pleno de la Conferencia Episcopal en reunión de 26 de abril de 1991), que es una cadena confesionalmente católica situada en el marco de los fines generales de la Iglesia y de su presencia evangelizadora en el ámbito de la opinión pública. En todo caso, en su Ideario, junto a fines específicamente vinculados a la orientación de la opinión pública con criterio cristiano, cabe señalar que:

«asume la defensa de los derechos humanos, tal y como se expresan en el Magisterio de la Iglesia y en los grandes acuerdos internacionales (...) promoverá sin fisuras la solidaridad entre los seres humanos de cualquier raza, país o condición (...) mostrará abiertamente su opinión preferencial por los pobres y los marginados (...) denunciará las injusticias (...) no considerará extranjeros ni a los pueblos ni a los hombres y mujeres de América Latina. Quiere con sinceridad prestar su voz y su voto a los pueblos del Tercer Mundo.»

d) Otros combinan el *principio de no discriminación junto a deberes específicos en relación con algunas personas y/o grupos vulnerables*. Así, el *código europeo de deontología del periodismo*, aprobado por unanimidad mediante una Resolución (de la que fue ponente el Sr. M. Núñez Encabo) por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el 1 de julio de 1993, establece en el punto 33 que:

«En la sociedad se dan a veces situaciones de tensión, de conflicto nacidas bajo la presión de factores como el terrorismo, la discriminación de las minorías, la xenofobia, la guerra. En estas circunstancias, los medios de comunicación tienen la obligación moral de defender los valores de la democracia, el respeto de la dignidad humana, la solución de los problemas a través de métodos pacíficos y de tolerancia, y en consecuencia oponerse a la violencia y al lenguaje del odio y del enfrentamiento, rechazando toda discriminación por razón de cultura, sexo o religión.»

O, finalmente, el *código deontológico de la profesión periodística*, promulgado por la F.A.D.E. (Federación de Asociaciones de Prensa de España), publicado por ABC el 6 de enero de 1994, indica en su artículo 7 que:

«El periodista extremará su celo profesional en el respeto a los derechos de los más débiles y los discriminados. Por ello, debe mantener una especial sensibilidad en los casos de informaciones u opiniones de contenido eventualmente discriminatorio, o susceptibles de incitar a la violencia o a prácticas inhumanas o degradantes: a) Debe, por ello, abstenerse de aludir de modo despectivo o con prejuicios, a la raza, color, religión, origen social o sexo de una persona, o a cualquier enfermedad o minusvalía física o mental que padezca. b) Debe abstenerse de publicar tales datos, salvo que guarden relación directa con la información publicada.»

e) Hay un *progresivo aumento de la concienciación, todavía no explicitado en la mayoría de los códigos deontológicos, en torno a estos problemas, que se ha plasmado en algunas recomendaciones de asociaciones de periodistas*, que son sugerentes y que empiezan a delinear algunos de los problemas esenciales de las minorías en los medios y de su deseable tratamiento informativo.

Así el *Sindicato de periodistas de la CGT de Francia* elaboró en 1997 unas *recomendaciones* para evitar el *racismo* y la *xenofobia* en las que señalaba, entre otras cosas:

1. Mencionar la nacionalidad, el país de origen, la pertenencia étnica, el color de la piel, orientación sexual, religión o cultura, sólo si esas informaciones son necesarias;
2. Evitar las generalizaciones y maniqueísmos injustificados.
3. Evitar la dramatización (...).
4. Asegurar la exactitud y el equilibrio en las informaciones (...).
5. Adoptar una mirada crítica sobre la extrema derecha, la xenofobia, el racismo y el antisemitismo.
6. En las informaciones deportivas, evitar los estereotipos chovinistas y étnicos (...).
8. (...) respaldar todas las reflexiones y acciones que tiendan a erradicar el racismo, la xenofobia y el antisemitismo en los medios de comunicación y en la sociedad.

El *Sindicato nacional de Periodistas del Reino Unido* elaboró unas recomendaciones para el tratamiento de las cuestiones raciales:

1. Mencionar la palabra gitano o *traveller* solamente cuando sea estrictamente necesario.
2. Elaborar noticias equilibradas exponiendo los puntos de vista de los gitanos o *travellers*, de la misma forma que el resto, consultando si es necesario a los gitanos o *travellers* del lugar.
3. Evitar caer en el sensacionalismo cuando se traten cuestiones en las que están implicados los *travellers* o gitanos, especialmente en sus relaciones con las comunidades establecidas.
4. Intentar ofrecer una cobertura suficientemente amplia y rigurosa de las vidas de los gitanos y *travellers* y sus problemas.
5. Intentar transmitir a la opinión pública que las comunidades de *travellers* y gitanos están compuestas por ciudadanos de

Gran Bretaña e Irlanda, cuyos derechos cívicos raras veces son adecuadamente reivindicados, y que sufren daños por el mal uso de los medios de comunicación. Estos ciudadanos tienen pleno derecho a que su contribución a la vida irlandesa y británica, especialmente en la cultura, sea ampliamente conocida y difundida.

Del mismo modo, *grupos de trabajo de la Asociación General de periodistas de Bélgica y del Colegio de periodistas de Cataluña han realizado recomendaciones* muy sugerentes. En este sentido el *grupo de trabajo sobre medios de comunicación y minorías étnicas (de Cataluña)* elaboró un manual de estilo en el que se indicaba:

1. No incluir al grupo étnico, el color de la piel, el país de origen, la religión o la cultura si no es estrictamente necesario para la comprensión global de la noticia. 2. Evitar las generalizaciones, los maniqueísmos y la simplificación de las informaciones. 3. No potenciar las informaciones negativas ni las sensacionalistas. Evitar crear inutilmente conflictos y dramatizarlos. Potenciar la búsqueda de noticias positivas. 4. Ser ecuanímes en la búsqueda de las fuentes de información [...]. 6. [...] Militancia periodística: hacia una multiculturalidad enriquecedora para todos.

De gran relevancia e interés resulta el *Manual para periodistas propuesto por la Unión Romani*²⁴, pensado a la luz de los problemas específicos del pueblo gitano en los medios de comunicación, pero que es un útil marco de referencia de los deberes éticos que deben asumir los periodistas en el tratamiento de las minorías y grupos vulnerables. En el mismo, entre otras cosas, se recomienda:

– Evitar las *generalizaciones, estereotipos y la mención al origen étnico de las personas* si no resulta estrictamente necesario para la comprensión global del mensaje.

– *Fomentar el tratamiento en positivo* de las informaciones relacionadas con los *romà* y contrastar adecuadamente las mismas con las personas directamente implicadas.

– *Abandonar los tratamientos sensacionalistas y amarillistas* para centrarse en un conocimiento real, profundo y alejado de leyendas, de los hechos noticiosos relacionados con los *romà*.

– *Evitar la difusión de informaciones que sean susceptibles de alentar la discriminación de toda una comunidad. La promoción de la Comunidad*

²⁴ *El pueblo gitano. Manual para periodistas*, Comisión Europea-Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales, Barcelona, 1998, 46 pp., en cuanto a las Recomendaciones en pp. 33-34.

gitana será posible sólo en la medida en que los periodistas asuman la tarea de difundir la *verdadera imagen de los romà*.

La conclusión que podemos extraer es que los derechos humanos y de las minorías no son un ámbito que reciban un tratamiento específico ni desarrollado con elevados estándares, hasta la actualidad, en la mayoría de los códigos que regulan la profesión periodística o la conducta de los medios, aunque progresivamente penetran este tipo de preocupaciones que es necesario desarrollar.

Finalmente, en cuanto a los efectos de estos códigos deontológicos el principal atañe a la concienciación de los profesionales de la información y de los propios medios sobre la importancia de su labor en la defensa de los derechos humanos y de las minorías y de ciertos valores de ética pública, como el pluralismo, la tolerancia o la igualdad. Además, pueden tener efectos jurídicos desde el punto de vista laboral y, en todo caso, son una defensa de la independencia en el desempeño de la función profesional de los periodistas. En este sentido, el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio, reguladora de la *cláusula de conciencia* de los profesionales de la información (BOE núm 147, de 20 de junio), se dispone:

«Los profesionales de la información podrán negarse, motivadamente, a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios éticos de la comunicación, sin que ello pueda suponer sanción o perjuicio».

III. PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN E IGUALDAD. EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA PROTECCIÓN DE LAS MINORÍAS

a) **Principio de no discriminación e igualdad**

El término *discriminación*, como señala el Comité de derechos humanos²⁵, debe ser entendido como «cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basa en cualquier motivo, como la raza, el color, el sexo, la lengua, la religión, la opinión política o de otra naturaleza, el origen nacional o social, la propiedad, el nacimiento u otro *status*, y que tiene el propósito o el efecto de anular o impedir el reconocimiento, el goce o el ejercicio, por cual-

²⁵ En su observación general sobre la no discriminación (1989).

quier persona, en una base de igualdad, de los derechos y libertades». La *prohibición de discriminación* constituye una regla convencional y consuetudinaria reconocida en el orden internacional y en los ordenamientos nacionales ²⁶.

Como hemos visto, diversos códigos deontológicos contienen un principio de no discriminación. El *impacto de esta regla en la protección de las minorías es positiva*, aún cuando no se dirige específicamente a ellas, al suponer la incriminación de aquellos actos o comportamientos que niegan a individuos o a grupos de personas la igualdad de trato con el resto de la población, razón por la cual se plasmó en el régimen de protección de minorías de la Sociedad de Naciones ²⁷. Pero la no discriminación sólo soluciona la mitad del problema para las minorías porque, como ya señalaron a finales de los años cuarenta, la Subcomisión de prevención de discriminaciones y el Secretario general de Naciones Unidas, la distinción entre *no discriminación e igualdad* deriva de que:

«aunque la protección de las minorías se inspira igualmente en el principio de igualdad de trato para todos, exige una acción positiva [...] destinada a salvaguardar los derechos del grupo minoritario, siempre y cuando los interesados (o sus padres, si se trata de menores) deseen conservar su idioma y cultura diferentes [...]. Las medidas de esta naturaleza se inspiran en el principio de igualdad, pues si un niño recibe instrucción en un idioma que no es su lengua materna, ello podría significar que no se le trata como a los niños que reciben instrucción en su idioma materno» ²⁸.

Incluso, ocurre que con la aplicación estricta del principio de no discriminación algunos países prohíben cualquier tipo de particularismo. Lo cierto es que la protección de las minorías por el principio de no discriminación repo-

²⁶ Vide Carta de las Naciones Unidas, artículos 1 y 55; artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículo 2 de los Pactos de 1966 de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; artículo 2.4 de la Convención para la Prevención y Represión del Crimen de Genocidio; artículos 2 y 5 del Convenio Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; artículo 14 del Convenio europeo de Derechos Humanos; artículo 14 de la Constitución española, etc. La mayoría de los derechos internos establecen el principio de igualdad y no discriminación. Algunos se refieren expresamente a la pertenencia a una minoría (Albania, Austria, Croacia, Eslovaquia).

²⁷ Así, por ejemplo, en el célebre artículo 2 del *Tratado de minorías con Polonia* se señalaba que se debía «asegurar la plena y completa protección de la vida y libertad, sin distinción de nacimiento, nacionalidad, lengua, raza y religión». Se trataba de una de las primeras disposiciones jurídico internacionales que, en el ámbito del Derecho internacional de los derechos humanos, establecieron tal extensión *rationae personae* de la protección.

²⁸ E/CN.4/52, sección V. Vide también CAPOTORTI, *Estudio sobre las personas...*, cit., p. 42, párs. 236 ss.

sa en un enfoque de «tipo individual» de la cuestión²⁹. Por ello, la distinción *conceptual entre no discriminación e igualdad* tiene importancia muy singular en relación con los derechos de las minorías³⁰.

b) El impulso por los medios de comunicación de medidas de acción positiva en favor de las minorías

La interpretación moderna del principio de igualdad, superadora de una visión formalista y cuyo objeto es la protección de la identidad minoritaria y de los derechos de los miembros de las minorías y de éstas hace necesario que se les aplique un tratamiento más favorable, hasta el momento en el que se alcance la igualdad de hecho y no sólo en derecho. El Tribunal Permanente de Justicia internacional ya depuró la distinción entre *igualdad de derecho y de hecho*, reconocida en los Tratados de minorías de la Sociedad de Naciones, tanto en el *dictamen sobre la situación de los colonos alemanes en Polonia*³¹, como en el *dictamen sobre las Escuelas minoritarias en Albania*. Este último se había planteado por la prohibición de escuelas privadas que Albania había introducido en su Constitución, en 1928, lo que de hecho llevaba a que las minorías griegas no pudiesen educar en su cultura, religión, lengua, etc., a sus miembros. El Tribunal señaló:

«Dos cosas son necesarias y son objeto de los Tratados. En primer lugar, asegurar que los nacionales que pertenecen a minorías de raza, de religión o de lengua se encuentran desde todos los puntos de vista en un plano de perfecta igualdad con los otros nacionales del Estado. En segundo lugar, asegurar a los grupos minoritarios medios apropiados para la conservación de sus caracteres étnicos, tradiciones y fisonomía particular. Las dos cosas están estrechamente vinculadas, puesto que *no habría verdadera igualdad entre mayoría y minoría si ésta estuviese privada de sus propias instituciones y, en consecuencia, obligada a renunciar a lo que constituye la esencia misma de su vida en tanto que minoría*»³².

El principio de igualdad formal no garantiza la igualdad sustancial, por lo que la correcta interpretación del primero exige aceptar las diferenciaciones

²⁹ En este sentido, «La Protection des minorités, Commission européenne pour la démocratie par le droit», Conseil de l'Europe, *Collection Science et technique de la démocratie*, núm. 9, p. 57.

³⁰ Vide, sobre ello mi trabajo *Derechos lingüísticos y derecho internacional*, cit. pp. 142 ss; HIGGINS, R., «Minority rights: discrepancies and divergencies between the international covenant and the Council of Europe system», *The dynamics of the protection of human rights in Europe. Essays in honour of Henry G. Schermers*, vol. III, Martinus Nijhoff Publishers, 1994, pp. 195-209, p. 199; MCKEAN, W., *Equality and discrimination under international law*, Clarendon Press, Oxford, 1985,

³¹ TPJI, serie B, núm. 6, pp. 24 ss.

³² TPJI, serie A/B, núm. 64, p. 17.

para hacer efectivos los derechos de las minorías, como en la actualidad reconocen los instrumentos internacionales. Como ha señalado el Comité de Derechos Humanos, la interpretación de la expresión «no se negará» que se utiliza en el artículo 27 del Pacto de Derechos civiles y políticos en relación con las minorías implica que los Estados tienen la

«obligación de asegurar que la existencia y el ejercicio de su derechos están protegidos frente a su denegación o violación. *Se requieren medidas positivas de protección no sólo contra los actos del Estado parte mismo, sean legislativos, judiciales o administrativos, sino también contra los actos de otras personas dentro del Estado [...] Medidas positivas pueden ser necesarias para proteger la identidad de una minoría y los derechos de sus miembros de gozar y de desarrollar su cultura y lengua y practicar su religión, en común con los otros miembros del grupo*»³³.

Así pues, los medios de comunicación y los periodistas son también destinatarios de esta disposición y deben realizar lo posible para coadyuvar a que se den las condiciones en las cuales pueden verse satisfechos los derechos de las minorías. Con independencia de lo que hagan los Estados para el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, *los Medios pueden realizar acciones positivas muy variadas para asegurar la igualdad de ciertos grupos o miembros de dichos grupos, en el ámbito de la cultura, de la lengua, de la religión, de la lucha contra discriminación por origen, orientación sexual, etnia, condición social etc.*

Entre estas medidas, a modo de ejemplo y sin ánimo de exhaustividad, cabe citar la posibilidad de fomentar el acceso y participación de las minorías en los medios, de realizar programas que resalten la diversidad cultural y difundan los aspectos positivos y la riqueza que las culturas minoritarias aportan, la posibilidad de ceder espacios informativos a los representantes de los medios (en radio, televisión o prensa escrita), de contratar como profesionales de la información a personas pertenecientes a minorías (aun cuando la idea de las cuotas siempre debe ser ponderada), la organización de cursos de especialización en derechos humanos y de las minorías para los profesionales, la participación de miembros de las minorías en órganos de control de la actividad periodística etc.

Las medidas de acción positiva deben adoptarse con criterios razonables y objetivos, sin vulnerar el estándar mínimo de derechos humanos y promo-

³³ Punto 6.1 del Comentario núm. 23, al artículo 27 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966.

viendo el pluralismo y el mutuo entendimiento entre los diversos grupos de una sociedad. Además, su duración debe continuar hasta tanto se estime que ya no son necesarias y deben realizarse siempre mediante técnicas de fomento y promoción, evitando las de carácter sancionatorio.

c) Medios de comunicación y lucha contra las discriminaciones indirectas

Ocurre que al igual que hay *discriminaciones directas*, existen *discriminaciones indirectas* que son más difíciles de erradicar mediante su prohibición, dado que no se identifican en el ordenamiento sino en la sociedad. La función de los *Medios* no es exclusivamente la de constituir un espejo aséptico de esa sociedad, sino que deben intervenir en ella en defensa de los valores de ética pública, de los derechos humanos, cuando de no hacerlo contribuyen a reproducir, difundir y, en definitiva, legitimar situaciones de discriminaciones indirectas, hondamente ancladas en la psicología colectiva.

Uno de los ámbitos donde el derecho y la sociedad ha tomado conciencia y, recientemente, ha adoptado algunas medidas jurídicas para combatir la discriminación indirecta es la *igualdad entre el hombre y la mujer*, fundamentalmente en cuanto al *principio de igual retribución por un trabajo de igual valor*, aun cuando hay otras dimensiones más vinculadas a la cultura que al derecho y en las que los progresos se alcanzan con cambios en la formación y en la concienciación individual y colectiva.

Con una problemática distinta, algo similar ocurre con las discriminaciones indirectas de las minorías, así como de otras personas y grupos desfavorecidos. Recientemente, la Comisión Europea proponía una definición de *discriminación indirecta por motivo de origen racial o étnico*, que sirve para comprender su sentido:

«Existirá discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o práctica, aparentemente neutro pueda, por su naturaleza, afectar negativamente a una persona o grupo de personas de origen racial o étnico (específico y exista el riesgo consiguiente de que cause un perjuicio concreto a dichas personas) salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima que no esté relacionada con el origen racial o étnico de la persona o grupo de personas, y salvo que los medios para la consecución de ésta sean adecuados y necesarios»³⁴.

³⁴ Propuesta modificada de Directiva del Consejo, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, Bruselas, 31 de mayo de 2000, COM (2000) 328 final, artículo 2.2.b).

Las discriminaciones indirectas en que incurren los profesionales de la información y los *Medios*, mediante ciertas prácticas o criterios que afectan negativamente a una persona o grupo de personas son la forma más extendida y más difícil de corregir de discriminación de las minorías y grupos vulnerables. Las formas a través de las cuales se producen estas discriminaciones son muy variadas:

En primer lugar, en la elección de *los temas objeto de información*. En esa decisión se producen discriminaciones indirectas cuando sólo se informa sobre una mínima parte de la realidad de un grupo humano, y con ello se acaba deformando la percepción que sobre ella tiene el conjunto de la sociedad. La *invisibilidad* de las minorías en los *Medios* (en los programas, en la publicidad, en las películas etc.) contribuye al desconocimiento del pluralismo cultural y social de una sociedad. Esa invisibilidad deniega el derecho a la identidad y a participar en la vida cultural, social, política y económica de un país.

Esto ha sido analizado *in extenso* en España en relación con el tratamiento informativo del *pueblo gitano*³⁵, donde la prensa aborda la realidad gitana desde un punto de vista social, apareciendo la mayoría de las referencias en la sección de sucesos, en alguna ocasión en la de espectáculos y en casi ninguna en las secciones de cultura, economía o religión. Los medios de comunicación sólo inciden, en muchas ocasiones, en noticias a las que se da un «tratamiento morboso» y superficial, donde se generaliza la conducta de un individuo a todo un grupo humano. El resultado es, como señala la *Unión Romani*:

«la imagen colectiva de los gitanos se concreta en una condición de artista o delincuente. La difusión masiva, y con un tratamiento morboso, de informaciones sobre actos delictivos o actividades artísticas protagonizadas por ciudadanos de etnia gitana, sea pertinente o no mencionar tal extremo, hace creer a los lectores que tales actividades son consustanciales al hecho mismo de ser gitano [...] acaban generando en el lector una imagen de que los gitanos son a la delincuencia, la pelea, el duende artístico, la mendicidad y a las chabolas lo que los británicos a las islas británicas, la lengua de Shakespeare, el humor negro o el té inglés. Se muestran como elementos de su identidad colectiva, inherentes a su forma de ser.»

Algunos medios son conscientes del problema, y en sus códigos deontológicos, manuales de estilo o estatutos de redacción alertan sobre el peligro

³⁵ ¿Periodistas contra el racismo? *La prensa española ante el pueblo gitano durante 1995-1996*, Unión Romani, 1997, 350 pp.

que implica utilizar determinados *términos*, que pueden ser despectivos con una comunidad.

Así, por ejemplo: le hizo una judiada, le engañó como a un chino, merienda de negros, los serbios hicieron una matanza, los árabes se niegan, los inmigrantes ilegales son, tiene unos negros que le hacen el trabajo, esto no se lo salta un gitano, deja de hacer el indio, andar con gitanerías...

Por ello, otra forma relevante de discriminación indirecta viene determinada por la *terminología*, algo que debe ser objeto de especial atención por los profesionales de la información. Al usar ciertos términos se perpetúan prejuicios sobre colectivos enteros, en muchas ocasiones inconscientemente –por comodidad–, y se contribuye a fomentar en el subconsciente colectivo actitudes xenófobas o racistas. Eso ocurre notoriamente cuando se atribuye a un grupo entero las acciones criminales de una persona aislada, criminalizando así al colectivo. Por ello, indica Amin Maalouf que «parece importante que todos cobremos conciencia de que esas frases no son inocentes y de que contribuyen a perpetuar unos prejuicios que han demostrado, a lo largo de toda la historia, su capacidad de perversión y muerte»³⁶.

Se pueden poner muchos ejemplos. Cuando se utiliza el término *raza* en lugar de *etnia*, dado que la definición biológica, que es inexacta, no contiene referencias a la cultura, la lengua, la historia etc.

En relación con el *pueblo gitano*, no es conveniente utilizar, entre otros, los términos *clan* –que parece asociado a actividades delictivas–, *colectivo* –que no denota ninguna connotación familiar o cultural (por lo que es preferible utilizar el de comunidad)–, *reyerta* –que sólo se utiliza en relación con enfrentamientos entre dos o más gitanos–, *tribu* (en lugar de grupo), *patriarca* (en lugar de hombre de respeto) o *nomadismo* (en lugar de itinerancia)³⁷, etc.

O, por lo que se refiere al *tratamiento informativo del fenómeno de la inmigración*, las referencias a los denominados *inmigrantes ilegales* (expresión con la que se alerta a la población sobre el «peligro» que viene en las pateras) justifican, probablemente de manera inconsciente, las políticas de cierre de fronteras, algo que también se legitima cuando se habla de *oleadas o flujos de inmigrantes*. Siguiendo a J. de Lucas, cabe poner de relieve que el *frente antirracista debe librarse, en la actualidad, no en el plano biológico, sino en el cultural*. Señala este autor que en un tiempo en que nadie se quita de la boca «las proclamas de solidaridad, el factor más decisivo del incremento del racismo es la difusión de un mensaje de *emergencia social*, junto al argumento de la

³⁶ MAALOUF, A., *Identidades asesinas*, Alianza Editorial, Madrid, 1999, p. 33.

³⁷ En cuanto a esta terminología, vide *El pueblo gitano. Manual para periodistas*, Comisión Europea, Ministerio de Trabajo, Madrid, 1998, pp. 29-30.

saturación (el famoso “la barca está llena” que se empeñan en hacernos pasar por hechos inobjctables y que constituyen un considerable ejercicio de *desinformación*»³⁸.

Pero además de cuidar la terminología, debe resaltarse la necesidad de realizar un tratamiento informativo desde una perspectiva *intercultural*, que valore como una *riqueza, la diversidad y que no considere la falta de asimilación como una pérdida*.

Además, debe prestarse atención al hecho de que las minorías son una *fente informativa que debe ser consultada* al elaborar una noticia que les efecte³⁹. En muchas ocasiones se informa sobre las minorías sin conocer su opinión, bien sea por rutina, comodidad, celeridad o porque se acude a fuentes institucionales y agencias donde no participan.

También deberían evitarse los *estereotipos* mediante los que se resaltan los aspectos más negativos de (algunos miembros de) una comunidad, realizando *generalizaciones injustificables*, o bien aquellos exóticos y sensacionalistas. De diversas maneras los medios contribuyen a dar una imagen social de un pueblo muy superficial, al adoptar un fragmento de la realidad y difundirlo como la totalidad en sí misma⁴⁰. Esa *generalización* es injusta, al atribuir a un grupo humano las acciones negativas de una sola persona.

Para mejorar la situación y evitar estas discriminaciones indirectas es esencial el papel de los periodistas y de los medios de comunicación. Se deben elegir los temas objeto de información teniendo en cuenta la necesidad de resaltar el pluralismo cultural de una sociedad. Sería necesario que los profesionales de la información tuviesen la *formación* para evitar esas discriminaciones, siendo esencial que conozcan más a fondo la realidad de las minorías y valoren la riqueza que aportan a la sociedad y el valor del pluralismo y la diversidad.

En esto son relevantes las tareas de formación de los profesionales de la información, así como la observancia de los principios deontológicos que

³⁸ Vide DE LUCAS, J., *Puertas que se cierran. Europa como fortaleza*, Icaria, 1995, pp. 103-105; del mismo autor, en relación con estos problemas, *El desafío de las fronteras. Derechos humanos y xenofobia frente a una sociedad plural*, Temas de Hoy. Ensayo, Madrid, 1994.

³⁹ ¿Periodistas contra el racismo? *La prensa española ante el pueblo gitano durante 1995-1996*, Unión Romaní, 1997, p. 336.

⁴⁰ Es lo que los semiólogos denominan «el fragmento como un todo» (Roland Barthes), que lleva a los medios a ser un «espejo de fantasmas» (Romà Gubern). Vide ¿Periodistas contra el racismo? *La prensa española ante el pueblo gitano durante 1995-1996*, Unión Romaní, 1997, p. 338.

deben asumir como un desafío profesional, siendo conscientes de la labor que, en defensa de ciertos valores, tienen en la sociedad. También es aconsejable la creación de un órgano de control externo a los medios de comunicación.

Los *Medios* no sólo deben reflejar la sociedad asépticamente, dado que tienen una especial responsabilidad en una democracia, siendo necesario que contribuyan a cambiar los aspectos negativos de esa sociedad, en particular siendo conscientes de su papel educativo. Los *Medios* deben evitar la reproducción de los mensajes que sólo contribuyen a reconstruir una realidad desde la ideología nacionalista, etnocéntrica y excluyente del grupo dominante. Ésta es su principal función educativa en este ámbito, en el que pueden realizar una labor importante de formación en derechos humanos.

IV. IDENTIDAD, PLURALISMO Y PAPEL DE LOS MEDIOS EN LA LUCHA CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFobia

a) **Derecho a la identidad, valor del pluralismo y papel de los medios de comunicación en una sociedad democrática**

El artículo 1 de la citada Declaración (1992), sobre derechos de las minorías, dispone que los Estados deben proteger la identidad de las minorías y promover las condiciones para su promoción. La *protección de la identidad* obliga a los Estados a adoptar medidas de promoción de las características propias de las minorías y, en particular, de su cultura (*derecho a gozar de la propia cultura*), que incluye los valores, normas, ideas y modos de pensamientos y de vida que puedan verse asociados con uno o varios grupos sociales o nacionales.

Al proceso en función del cual los Estados buscan la desaparición de una cultura minoritaria (de sus valores, costumbre, lengua y otras características culturales) se le puede denominar *asimilacionismo*, que puede realizarse mediante técnicas sutiles o bien mediante la prohibición de cualquier manifestación cultural diferente a la mayoritaria. La búsqueda de la uniformidad, y la alergia a la diversidad cultural constituyen un lastre de la nacionalización de muchos aspectos de la vida cotidiana (lengua, cultura, religión...) de los individuos y de los grupos humanos, que tomó cuerpo con la formación de los Estados-nación en Europa. *Estos procesos no pertenecen al pasado, sino que están presentes en Europa y se han incrementado con los*

*cambios geopolíticos y territoriales que se produjeron desde la caída del muro*⁴¹.

Cabe poner diversos ejemplos de Estados democráticos que son fuertemente asimilacionistas. En *Grecia*, los tribunales griegos desestimaron la solicitud de creación de una asociación (*Casa de la civilización macedonia*), al entender que su objetivo era «promover la idea de que existe en Grecia una minoría macedonia», algo que sería contrario al «interés nacional de Grecia y, por tanto, a la ley». Frente a estas posiciones contrarias al respeto del pluralismo y al derecho a la identidad, el TEDH entiende que *la invocación de la conciencia de pertenencia a una minoría y la preservación y el desarrollo de la cultura de una minoría no podría considerarse que constituyen una amenaza para la sociedad democrática*⁴² (pár. 41), habiéndose producido una violación del artículo 11 CEDH.

El Sr. *Sadik*, candidato del partido político griego *Güve* (que representa a una parte de la población musulmana de la Tracia Occidental) fue condenado a una pena de prisión de dieciocho meses por los tribunales griegos (no convertible en sanción pecuniaria) por publicar comunicados en la prensa en los que se refería a la «comunidad turca de la Tracia Occidental», siendo anulada su candidatura a las elecciones por razones técnicas. El 30 de marzo de 1990, el Tribunal de apelación de Patrás estimó que la distribución de un folleto, en período electoral, en el que aparecían términos como «turcos», «musulmanes turcos», «minoría musulmana de la Tracia Occidental» o «comunidad turca», tenía por objeto introducir en los corazones de los ciudadanos el germen de la discordia, del odio y de la hostilidad hacia los cristianos griegos que viven en la misma región (Komotini), perturbando la paz pública. A juicio del Tribunal griego, los acusados debían saber que una minoría turca no es «reconocida» en la Tracia griega y que, si planteaban una cuestión tan sensible la paz entre cristianos y musulmanes griegos se vería comprometida. El TEDH no conoció del fondo del asunto al entender que no se habían agotado los recursos internos (pár. 34), conclusión a la que se opuso en su opinión disidente el juez Martens (y el juez Foighel), al entender que la calificación de «turcos» de la minoría musulmana no justifica la condena, desproporcionada, del Sr. *Sadik*. En la tensión entre mayoría y minoría (pár. 21) «las dos partes asumen su responsabilidad [...]».

Taylor ha indicado lúcidamente que el tránsito de la noción de *honor* –basado en la desigualdad–, al moderno concepto de *dignidad* –igualitario y universalista– llevó a que la democracia desembocase en una política de reco-

⁴¹ Vide PIERRE-CAPS, S., «Des conditions d'un patrimoine étatique commun: L'Etat multinational et l'Europe», *Le patrimoine constitutionnel européen*, Actas de la Comisión Europea para la democracia por el derecho, Consejo de Europa, Montpellier, 22-23 de noviembre de 1996, Colección Science et technique de la démocratie, núm. 18, 1997, pp. 111-136; vide, también, *Droits fondamentaux et citoyenneté. Une citoyenneté fragmentée, limitée, illusoire?*, VV. AA., Les éditions thémis, Montreal, 2000, 543 pp.

⁴² Asunto *Sidiropoulos c. Grecia*, sentencia del TEDH de 10 de julio de 1998 (57/1997/841/1047).

nocimiento igualitario, que ahora retorna en forma de exigencia de igualdad de estatus para culturas y sexos. En la esfera pública, éste es el origen de la *política de la diferencia* que busca la redefinición de la no discriminación mediante la exigencia de un trato diferencial⁴³. En todo caso, la existencia de las minorías es una cuestión de hecho, que no de su reconocimiento jurídico, y el derecho a la identidad lo tienen todas las minorías existentes.

Pluralismo cultural y protección de las minorías, sin embargo, no encajaron bien con el proceso de reconocimiento y generalización de los derechos humanos en la modernidad, porque en el paradigma liberal (o en el marxista) los derechos de las minorías se incluyen en el marco general de la protección de los derechos humanos, lo que no resuelve adecuadamente los problemas. En esa visión, el único destinatario de derechos es el individuo, careciendo de existencia e identidad el grupo en cuanto tal⁴⁴. Por ello, las respuestas jurídicas y sociales frente a la diversidad cultural están presididas, como señala De Lucas⁴⁵, por los principios de asimilación o de segregación, lejos de las exigencias de interculturalidad, negando la identidad básica y la posibilidad de diálogo entre culturas.

Pero no cabe entender la *democracia sin pluralismo*, lo que exige no sólo reconocer, sino, además, proteger los derechos de los miembros de las minorías y de éstas en cuanto tales. Y dentro de este pluralismo, la libertad de expresión (y de información) que consagra el artículo 10 CEDH vale tanto para las informaciones o ideas que son recibidas como favorables, inofensivas o indiferentes, como para aquellas que chocan o inquietan, salvo que supongan una incitación a la violencia o rechacen las reglas de la democracia.

Ésta es la doctrina establecida por el TEDH. Así, en los *asuntos Partido de la Libertad y de la Democracia*⁴⁶, *Partido Socialista*⁴⁷ y *Partido Comunis-*

⁴³ Vide, sobre esto mi libro *Derechos lingüísticos y derecho internacional*, Dykinson, Madrid, 1999, p. 132; TAYLOR, C., *El multiculturalismo y la política de reconocimiento*, Fondo de cultura económica, México, 1993, 159 pp., pp. 43-108, p. 59; KIMLICKA, W., *Liberalism. Community and culture*, Clarendon Press, Oxford, 1989; DE LUCAS, J., «¿Elogio de Babel? Sobre las dificultades del Derecho frente al proyecto intercultural», *Multiculturalismo y diferencia*, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 31 (1994), 15-39, p. 30; KOUBI, G., «Penser les minorités en droit», *Le droit et les minorités. Analyses et textes*, Bruylant, Bruxelles, Fenet y otros (Dir.), 1995, pp. 251-297, p. 263.

⁴⁴ SCHULTE-TENCKHOFF, *The rights of persons belonging to minorities to enjoy their own culture*, Working paper E/CN.4/Sub.2/AC.5/1997/WP.7, 21 de mayo de 1997, párr. 8, p. 3.

⁴⁵ DE LUCAS, J., *¿Elogio de Babel?...*, op. cit., p. 30.

⁴⁶ *Asunto Partido de la Libertad y de la Democracia* (Özdep) c. Turquía, demanda núm. 23885/94, sentencia de 8 de diciembre de 1999.

⁴⁷ *Asunto Partido Socialista y otros c. Turquía* (20/1997/804/1007), sentencia de 25 de mayo de 1998.

ta Unificado⁴⁸, fue condenada Turquía⁴⁹, entre otras cosas, porque estos partidos consideran que los kurdos son o una nación o una minoría distinta del pueblo turco, mientras que para el Tribunal Constitucional turco no se puede admitir la existencia de dos naciones o de minorías en Turquía, en detrimento de la unidad de la nación turca.

Los medios de comunicación y los periodistas deben evitar un tratamiento de la información que favorezca esas políticas asimilacionistas, valorando la riqueza del pluralismo y del multiculturalismo, sin cercenar y, por el contrario, promoviendo el mutuo entendimiento cultural de los grupos humanos y la posibilidad de que las personas elijan y puedan desarrollar libremente, y en condiciones óptimas, su identidad.

En este sentido, *otros asuntos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos muestran la importancia que tiene el mantenimiento del pluralismo de los Medios en una sociedad democrática y su relevancia para el mantenimiento de las condiciones que permiten que perviva la identidad de las minorías.*

El 1 de junio de 1992 el Tribunal de Seguridad del Estado de Estambul ordenaba la retirada de todos los ejemplares de la revista *Novedades y comentarios: la verdad*, que contenía una entrevista con un dirigente del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), organización ilegal, al considerar que emanaba de organizaciones terroristas y difundía propaganda separatista. En dicha entrevista, el dirigente del PKK criticaba la actitud de Estados Unidos con los kurdos y la política del Estado turco y se señalaba que la guerra del PKK en defensa del pueblo kurdo continuaría «mientras hubiese un ser viviente entre nosotros» (pár. 59); asimismo, se abogaba en favor del reconocimiento del derecho del pueblo kurdo a la autodeterminación y por la retirada del ejército turco del Kurdistán. El accionista de la revista, Sürek, y su redactor en jefe, Özdemir⁵⁰, fueron condenados, el 27 de mayo de 1993 por el Tribunal de Seguridad del Estado de Estambul, en virtud del Derecho turco, a diversas multas y el redactor en Jefe a una pena de prisión de seis meses.

El Tribunal turco estimó que se había acusado a las autoridades de haber masacrado y expulsado a los kurdos que viven en el Kurdistán, hecho apología del terrorismo kurdo y tomado posición en favor de la creación de un Estado separado

⁴⁸ *Asunto Partido Comunista Unificado de Turquía y otros c. Turquía* (133/1996/752/951), sentencia de 30 de enero de 1998.

⁴⁹ Sobre estos asuntos, véase, entre otros, el reciente trabajo de J. M. DE FARAMIÑAN, «Comentarios sobre el modelo democrático en torno a la reciente jurisprudencia del TEDH (a propósito de las sentencias del TEDH de 30 de enero y de 25 de mayo de 1998)», *Revista de Estudios Jurídicos*, 2/1999, Universidad de Jaén, marzo de 2000, pp. 33-47.

⁵⁰ *Asunto Sürek y Özdemir c. Turquía*, de 8 de julio de 1999 (demandas núms. 23927/94 y 24277/94).

para el pueblo kurdo. Los condenados demandaron al Estado turco ante el Tribunal de Estrasburgo, al entender que se había violado el artículo 10 CEDH (libertad de expresión y de información). El TEDH entendió que las medidas estaban «previstas por la ley» (pár. 43) y perseguían un «objetivo legítimo», la protección de la seguridad nacional y de la integridad territorial, la defensa del orden y la prevención del crimen, en un contexto en el que el movimiento separatista se apoya en métodos que hacen llamamiento a la violencia (pár. 51). Pero, por lo que se refiere al tercer requisito, la *necesidad en una sociedad democrática*, llega a la conclusión de que la condena de los demandantes fue desproporcionada en relación con los objetivos, e innecesaria en una sociedad democrática, habiéndose producido una violación del artículo 10 de la CEDH (pár. 64).

Del mismo modo, también condenó el TEDH a Turquía por haber tomado medidas desproporcionadas e innecesarias en una sociedad democrática (pár 55) en el *asunto Erdoglou*⁵¹, redactor en jefe de la revista *Oposición democrática*, que fue condenado a cinco meses de prisión y multa por «propaganda contra la indivisibilidad del Estado», al haber publicado una entrevista con un sociólogo, el Sr. Ince (condenado a su vez a dieciocho meses de prisión y multa) en la que se preveía un renacimiento cultural de los kurdos y se expresaban opiniones sobre la guerrilla PKK y su contribución a la sociedad kurda, declarando que la retirada de las tropas turcas y la evacuación de los puestos de policía en algunas regiones por el gobierno turco podían percibirse como el inicio de la formación de un Estado kurdo (párrs. 9 y 49). El TEDH analizó los términos de la entrevista, constatando que se trataba de la opinión de un sociólogo, que no aprobaba expresamente el papel del PKK en la lucha por la independencia kurda, ni incitaba a la violencia, sino que esencialmente analizaba la situación desde un punto de vista sociológico y analítico frente a las reacciones del Estado turco (pár. 51 y 52).

Por lo mismo fue condenada Turquía en el *asunto Incal*⁵² porque un miembro de la sección de Izmir del Partido del Trabajo del Pueblo había sido condenado por los tribunales turcos por haber distribuido el partido en la circunscripción de Izmir un *tract* que denunciaba las medidas adoptadas por las autoridades locales contra el pequeño comercio clandestino, que buscaría la depuración de los kurdos.

Los *Medios* deben fomentar el pluralismo, mostrando la diversidad y contribuyendo a proteger la identidad de todos desde una perspectiva intercultural y de fomento de la tolerancia, aun cuando no forme parte de la cultura mayoritaria, salvo que la libertad de expresión y de información sean utilizadas para incitar a la violencia o sin aceptar las reglas del juego democrático.

⁵¹ *Asunto Erdoglou e Ince c. Turquía*, sentencia de 8 de julio de 1999 (demandas núms. 25067/94 y 25068/94).

⁵² *Asunto Incal c. Turquía*, de 9 de junio de 1998 (41/1997/825/1031).

b) El papel de los medios de comunicación en la educación en los derechos humanos y de las minorías

La lucha contra fenómenos como el racismo y la xenofobia, o, más en general, la promoción y garantía de los derechos de las minorías depende de que existan un conjunto de condiciones en las que sea posible el goce y el disfrute de los derechos fundamentales, lo cual no depende sólo y exclusivamente de los poderes públicos, sino de toda la sociedad, al exigir un esfuerzo conjunto en el plano institucional, jurídico, social, informativo y educativo⁵³.

Bajo este prisma, los *Medios* juegan un papel esencial en la protección de los Derechos Humanos. En este sentido, la *Declaración y el programa de acción adoptados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, en Viena*, los días 14 a 25 de junio de 1993, reconocen el papel de los medios de educación, que cabría vincular con los fines generales de la educación en el Derecho internacional:

«punto 33 [...] la educación debe fomentar la comprensión, la tolerancia, la paz y las relaciones de amistad entre las naciones y los grupos raciales o religiosos [...] la educación en materia de derechos humanos y la difusión de información adecuada sea de carácter teórico o práctico, desempeñan un papel importante en la promoción y el respeto de los derechos humanos de todas las personas, sin distinción alguna por motivos de raza, sexo, color, idioma o religión, y debe integrarse en las políticas educativas en los planos nacional e internacional.»

«punto 39. [...] haciendo hincapié en la importancia de disponer de información objetiva, responsable e imparcial sobre cuestiones humanitarias y de derechos humanos, pide una mayor participación de los medios de información, a los que la legislación nacional debe garantizar libertad y protección.»

Más recientemente, la Asamblea General aprobó la *década para la educación en derechos humanos* (1995-2004) (Resolución 48/127), al entender que constituye una prioridad que contribuye a fomentar un concepto de desarrollo consistente con la dignidad de la persona humana y con la diversidad de grupos (entre los que cita a la infancia, las mujeres, jóvenes, discapacitados, personas mayores, pueblos indígenas, minorías...).

Asimismo, la UNESCO ha puesto de manifiesto el *papel de los Medios en la protección y promoción (así como en la educación en) de los Derechos humanos*. Junto a la Declaración de 1978, ya citada, debe hacerse referencia a

⁵³ Vide, entre otras muchas declaraciones, la *Resolución del Parlamento Europeo sobre el recrudecimiento del racismo y el fascismo en Europa*, de 9 de febrero de 1988, p. 2.

diversas resoluciones. Así, la *Resolución 104, adoptada en 1989 por la Conferencia General sobre la «Comunicación al servicio de la Humanidad»* en la que se incide, junto a principios consolidados (independencia, pluralismo, diversidad, libertad), en la necesidad de que los *Medios* contribuyan como un «instrumento» a promover y salvaguardar «la identidad cultural y el entendimiento entre los pueblos» así como la «educación a través de los *Medios*». O diversas resoluciones sobre su aportación a reducir la violencia, fomentar la paz y a su función educativa como servicio público⁵⁴.

Por lo que se refiere específicamente a las minorías, los *Medios* deben tener en cuenta que *la educación es el principal instrumento para el mantenimiento de su identidad*, para lo que es necesario adquirir un conocimiento apropiado de la lengua materna y de la cultura del grupo minoritario, siendo esencial no sólo un sistema educativo adecuado sino también su apoyo. Además, las personas pertenecientes a minorías deben adquirir el conocimiento de la lengua y culturas del Estado en el que residen y son sus ciudadanos y al que le deben lealtad, por lo que deben conocer la sociedad en sentido amplio.

En esta doble dimensión, que es aplicable tanto a las minorías como a los miembros de la mayoría, para fomentar la *interculturalidad*, la reproducción de identidades culturales es difícil en un contexto en el que las mismas no sean respetadas y promocionadas por los *Medios*. No debe olvidarse el hecho de que, en la actualidad, el papel de transmisión que antes tenían las comunidades y la familia se ha visto debilitado, siendo en parte sustituido por la escuela⁵⁵. Y en este proceso también deberían jugar un papel importante los medios de comunicación, desde un *espíritu que busque alcanzar el conocimiento de la sociedad en su conjunto por mayorías y minorías, así como su mutua aceptación y comprensión*.

c) **El papel de los medios de comunicación en la lucha contra el racismo y la xenofobia**

Sin entrar ahora en un debate conceptual sobre qué es el racismo y qué es la xenofobia, así como sus diferencias y dimensiones, puede resaltarse la especial responsabilidad de los *Medios* en dar una información que contribuya a

⁵⁴ Vide, entre otras, la Resolución 4.5 adoptada por la Conferencia General en 1995, así como la estrategia a medio plazo, 1996-2000, adoptada en 1995; la Resolución 4.6 adoptada en 1993.

⁵⁵ Vide, sobre esto, BENGUA, J., *Education and minorities*, E/CN.4/Sub.2/AC.5/1996/WP.3, pár. 2; SIEMINSKI, G., *Education rights of minorities: the Hague recommendations*, E/CN.4/Sub.2/AC.5/1997/WP.3, de 5 de mayo de 1997, con anexo.

sensibilizar a la opinión pública frente a estos fenómenos, adoptando medidas que permitan su prevención y dejando a un lado un concepto de independencia o de neutralidad que, a mi juicio, no debe aplicarse en estos casos ⁵⁶.

Los profesionales de la información, se ha señalado reiteradamente, pueden contribuir a la *eliminación de los prejuicios raciales y al fomento de las relaciones armónicas entre las distintas comunidades, estimulando la reflexión sobre la información ante fenómenos de violencia, sobre todo de tipo racial* ⁵⁷.

Además, pueden constituir un *órgano permanente de control y de denuncia, probablemente mucho más eficaz que los órganos ad hoc establecidos al efecto (promoviendo así la concienciación pública) sobre el peligro que representa el racismo y la xenofobia*, fomentando los valores de tolerancia y de solidaridad, y destacando, como ha señalado el Parlamento Europeo ⁵⁸, la «contribución positiva de los inmigrantes en la sociedad europea». No sólo deben proceder, por tanto, a la denuncia de las grandes violaciones, sino también de aquellas manifestaciones xenófobas más invisibles que sitúan a los inmigrantes o a las minorías en la marginalidad o en inferioridad con el resto de la sociedad.

Estas denuncias deben y pueden ir acompañadas de una *reflexión y de un debate públicos sobre las mejores medidas* que se pueden adoptar por los gobiernos y por la sociedad, para mejorar la situación. Además pueden favorecer la existencia de una sociedad que acepte, comprenda y asuma el *hecho multirracial y multicultural* ⁵⁹, evitando así uno de los factores que más contribuyen a las actitudes racistas y xenófobas, que es el «desconocimiento de la diversidad y la incomprensión hacia los demás» ⁶⁰, defendiendo los valores de una sociedad intercultural.

⁵⁶ En este sentido, *vide Declaración contra el racismo y la xenofobia del Parlamento Europeo, el Consejo, los representantes de los Estados miembros en el seno del Consejo y la Comisión*, de 25 de junio de 1986, punto 5.

⁵⁷ *Vide Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, relativa a la lucha contra el racismo y la xenofobia*, de 29 de mayo de 1990, punto 4.a.2.

⁵⁸ *Vide Resolución sobre el racismo, la xenofobia y el antisemitismo y el año europeo contra el racismo*, de 28 de julio de 1996; *vide*, asimismo, la *Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo sobre el Año europeo contra el racismo*, de 23 de julio de 1996.

⁵⁹ *Vide*. Dictamen del Comité de las Regiones sobre la propuesta de decisión del Consejo por el que se declara 1997 año europeo contra el racismo, de 13 de junio de 1996, p. 4.6.

⁶⁰ En este sentido, *Declaración del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo*, de 16 de diciembre de 1997, sobre el respeto de la diversidad y la lucha contra el racismo y la xenofobia (*DOCE* núm. C 001, de 3 de enero de 1998).

En definitiva, su labor es esencial para *generar actitudes antirracistas* mediante el apoyo a campañas publicitarias, la formación de profesionales, el desarrollo de los estándares deontológicos elevados, la participación de las minorías en los medios y el fomento de los valores de tolerancia y de solidaridad, poniendo de relieve la contribución de todos a la sociedad, incluyendo especialmente a las minorías, los inmigrantes y los grupos vulnerables.

En todos estos aspectos precedentemente señalados es conveniente fomar adecuadamente a los periodistas sobre su papel en la protección de los derechos humanos, de las minorías, de los grupos vulnerables y en la lucha contra el racismo y la xenofobia, por lo que sería deseable que las empresas informativas y las facultades competentes estableciesen dichas enseñanzas de manera estable o como cursos de formación regulares. En esta línea, la *conclusión número 2 del Seminario sobre el papel de las minorías en los medios de comunicación* instaba a realizar estos cursos para «sensibilizar a los periodistas sobre las cuestiones de discriminación y los prejuicios», especificando que es conveniente que en los mismos participen representantes de las minorías, así como ONGs, periodistas y otros especialistas en la cuestión.

V. LA NECESIDAD DE IMPULSAR EL ACCESO Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS MINORÍAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

a) El insuficiente desarrollo del derecho de acceso en el ordenamiento español

Las libertades de expresión y de información reconocidas por el artículo 20 de la Constitución española tienen una *doble naturaleza, carácter o valencia*⁶¹, al configurarse al mismo tiempo como *derechos subjetivos* y como *garantías institucionales del sistema democrático*⁶². En su dimensión objetiva,

⁶¹ Expresión ésta tomada de MARTÍN-RETORTILLO, L., *Derechos fundamentales y Constitución*, Cuadernos Civitas, 1988, p. 56. Vide, también, PECES-BARBA, G. (con la colaboración de R. de Asís Roig, A. Llamas Cascón y C. Fernández Liesa), *Curso de derechos fundamentales. Teoría General*, Universidad Carlos III de Madrid-Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1995, en especial, pp. 413 ss; PÉREZ LUÑO, A., *Los derechos fundamentales*, Editorial Tecnos, Madrid, 1991, 230 pp., en especial pp. 17-29.

⁶² Como indica el TC en sentencia de 14 de julio de 1981, los derechos fundamentales son «derechos subjetivos en cuanto que garantiza un *status* jurídico o la libertad en un ámbito de la existencia. Pero al propio tiempo son elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de la Comunidad nacional, en cuanto se configuran como marco de una convivencia humana justa y pacífica». *BOE* núm. 193 de 13 de agosto de 1981, FJ 5.

la libertad de información contribuye a garantizar la existencia de una *opinión pública libre*, indisolublemente ligada con el pluralismo político y, por ello, elemento necesario e imprescindible en un sistema democrático⁶³, garantía de su misma existencia⁶⁴.

En relación con las *minorías* debe hacerse referencia específica al artículo 20.3 CE, que dispone:

«La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el *acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos*, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.»

En sentido estricto, este *derecho de acceso* ha sido definido doctrinalmente⁶⁵ como «la facultad reconocida a los grupos sociales y políticos significativos de utilizar los medios de comunicación de titularidad pública para, en el ejercicio de sus libertades de expresión e información, transmitir y difundir sus ideas y sus doctrinas».

Este concepto constitucional es restrictivo. A los efectos de nuestro análisis, no debemos excluir ni a los medios de comunicación de *titularidad privada* ni a otras cuestiones conexas de gran relevancia como el llamado derecho de antena (de *creación de empresas informativas*) o la participación de las minorías en los *órganos de gestión de los medios*, aspectos todos ellos excluidos de la interpretación de ese derecho a la luz del desarrollo legislativo del texto constitucional. Nosostros utilizaremos como sinónimos los términos acceso y participación por cuanto que entendemos que, al menos en Derecho internacional, no tienen connotaciones distintivas.

Desde señalarse, no obstante, que se trata de una disposición novedosa, vinculada a la dimensión objetiva del derecho de la información, que persigue

⁶³ Sobre la libertad de información y de expresión como bases del sistema democrático, *vide*, entre otras, STC 12/1982, de 31 de marzo FJ 3, *BOE* de 21 de abril de 1982; STC 159/1986, de 12 de diciembre, FJ 8, *BOE* núm. 313, de 31 de diciembre de 1986; STC 165/1987, de 27 de octubre, *BOE* de 21 de noviembre de 1987; STC 176/1995, de 11 de diciembre, *BOE* de 12 de enero de 1995 etc.

⁶⁴ *Vide*, sobre esto, un amplio estudio de LLAMAZARES CALZADILLA, M. C., *Las libertades de expresión e información como garantía del pluralismo democrático*, Editorial Civitas, 1999, 386 pp.; *vide*, también, FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, A., GARCÍA SANZ, M., «Artículo 20. Libertad de expresión y derecho de la información», *Comentarios a la Constitución española de 1978*, Alzaga Villaamil, O., (Dir), tomo II, Cortes Generales-editoriales de derecho reunidas, VV. AA., Madrid, 1997, pp. 506-553, p. 515.

⁶⁵ LLAMAZARES CALZADILLA, M. C., *Las libertades de expresión e información como garantía del pluralismo político*, Civitas, Madrid, 1999, pp. 192-193.

asegurar el *pluralismo interno* de los medios ⁶⁶, mandando al legislador para que garantice el acceso de los *grupos sociales y políticos significativos*. La titularidad de este derecho se entiende doctrinalmente que corresponde a aquellos «grupos» explícitamente citados en la Constitución:

- Los partidos políticos –artículo 6.
- Los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales –7 y 28.
- Los colegios y organizaciones profesionales –36, 52.
- Las organizaciones de consumidores –51.
- Las confesiones religiosas –16.
- Los grupos lingüísticos –3.3, 20.3.

Así pues se reconocen en la Constitución dos grupos en los que cabe incluir algunas minorías (lingüísticas y religiosas). Pero, además, el artículo 20.3 se interpreta en el sentido de que el legislador (o los medios de comunicación) pueden considerar social y políticamente significativos a otros grupos, según un sistema de *numerus apertus*.

Algunas normas autonómicas parecen establecer el *derecho de acceso de las minorías* al referirse a los *grupos sociales y culturales de menor significación* ⁶⁷. Por su parte, la *Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de Radio y Televisión* ⁶⁸, indica en el artículo 24 (relativo al pluralismo democrático y al acceso a los medios de comunicación) que la disposición de espacios de RCE, RNE y TVE se concretará de modo que «accedan a estos medios de comunicación los grupos sociales y políticos más significativos. A tal fin, el Consejo de Administración, de acuerdo con el Director general, tendrán en cuenta criterios objetivos tales como representación parlamentaria, implantación sindical, ámbito territorial de actuación y otros similares».

⁶⁶ Vide PARADA VÁZQUEZ, J. R., y BACIGALUPO SAGGESE, M., «Artículo 20, 3. El control parlamentario de los medios de comunicación del Estado», *Comentarios a la Constitución de 1978*, op. cit., pp. 556-572, p. 564.

⁶⁷ En este sentido, artículo 21.2 de la Ley 5/1982, de 20 de mayo, de creación del Ente Público Radio Televisión Vasca (BOPV núm. 71, de 2 de junio de 1982); artículo 16 de la Ley 13/1984, de 30 de junio, de Creación, Organización y Control Parlamentario del Ente Público de Radio Televisión Madrid (BOMA núm. 158, de 4 de julio de 1984); artículo 21 de la Ley de 4 de julio de 1984, de Creación de la Entidad Pública RTVV y regulación de los servicios de radiodifusión y televisión de la Generalidad Valenciana (BOE núm. 213, de 5 de septiembre de 1984); artículo 20 de la Ley foral 16/1985, de 27 de septiembre, de Creación, Organización y Control Parlamentario del Ente Público Radio-Televisión Navarra (BON núm. 119, de 2 de octubre de 1985); artículo 21 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, de Creación, Organización y Control Parlamentario de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (BOAr núm. 46, de 22 de abril de 1987).

⁶⁸ BOE núm. 11, de 12 de enero.

i) Pero, por lo general, en el ordenamiento español cabe resaltar que los *grupos lingüísticos regionales minoritarios en el conjunto de España* tienen un tratamiento adecuado en los medios de comunicación. Como es sabido, uno de los modelos más avanzados en Derecho comparado de pluralismo lingüístico es el de *cooficialidad*—del castellano y de las demás lenguas españolas que sean oficiales en las Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos—, implantado por la Constitución española de 1978 y desarrollado por los Estatutos de Autonomía y las leyes de normalización lingüística⁶⁹. Modelo construido sobre la base de la realidad sociolingüística bilingüe que existe en España, en el entendimiento de que forma parte de un patrimonio cultural merecedor de protección (*vide* art. 3 de la Constitución) en su pluralidad (el denominado *principio constitucional de integración lingüística*).

En función de este modelo la libertad de lengua traslada a la libre elección del ciudadano el uso de una u otra lengua oficial, ello inspirado en el deseo de evitar el monolingüismo territorial, lo que no impide acciones de favorecimiento de aquellas lenguas que no estén *normalizadas*, siempre y cuando mediante las mismas no se vulneren los derechos lingüísticos de los ciudadanos⁷⁰.

En este sentido, cabe hacer referencia, por ejemplo, a la regulación establecida a los artículos 25, 26 y 27 (del capítulo IV relativo a los *medios de comunicación y las industrias culturales*) de la *Ley 1/1998, de 7 de enero, de Política Lingüística, de la Generalidad de Cataluña*⁷¹. Sin entrar ahora en las diversas controversias que se suscitan en torno a la constitucionalidad de algunos de sus artículos, o de su aplicación, cabe señalar que establece que en los *medios de comunicación escritos* y en los *medios de radiodifusión y televisión*

⁶⁹ *Vide*, sobre la interpretación constitucional de la *cooficialidad lingüística*, STC 82/1986, FJ 12, y STC 27/1996; sobre la *obligación de conocimiento del castellano*, obligación que no existe con carácter general en relación con las demás lenguas españolas, STC 56/1990, FJ 41, STC 30/1986. En cuanto a las *leyes de normalización* del euskera, catalán y gallego, SSTC 82, 83 y 84/1986. Sobre el *uso de las lenguas en el Senado*, STC 205/1990; sobre la *relevancia del derecho a la asistencia de intérprete*, STC 187/1991, FJ 3; sobre la *enseñanza obligatoria de las lenguas cooficiales* STC 337/1994 FFJJ 14 y 15; en cuanto al *etiquetaje de productos comerciales*, SSTC 27/1996 y 67/1996, FJ 5.

⁷⁰ *Vide* mi trabajo *Derechos lingüísticos y Derecho internacional*, Editorial Dykinson, Madrid, 1999, cit.

⁷¹ *Vide* los dictámenes que sobre la misma se realizaron por algunos profesores (Fernández, T. R.; Martín-Retortillo, S.; López Pina, A.; Prieto de Pedro, J.), por HERRERO DE MIÑÓN, M., por el *Consejo Consultivo de la Generalidad de Cataluña*, así como las sugerencias y recomendaciones del *Defensor del pueblo* y el texto de la ley en «Lenguas y Constitución», *Teoría y realidad constitucional*, núm. 2, segundo semestre 1998, UNED-Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1998, 292 pp.

públicos (gestionados por la Generalidad y por las corporaciones locales) la «lengua normalmente utilizada debe ser la catalana» (arts. 25.1 y 27.1); y en los *medios de radiodifusión y televisión de concesión*, como mínimo el «50 por 100 de los programas de producción propia deben ofrecerse en lengua catalana y como mínimo el 25 por 100 de la programación de música cantada debe ser de canciones interpretadas en lengua catalana o en aranés» (cfr., art. 26). Asimismo, se establece que se fomentarán *subvenciones* a publicaciones periódicas de ámbito local o comarcal redactadas total o mayoritariamente en catalán y a publicaciones de difusión general redactadas totalmente o mayoritariamente en catalán, según criterios de difusión, comercialización y uso de esa lengua (art. 27).

En relación con las industrias culturales, reguladas en los artículos 28 y 29, en noviembre de 1998 las grandes productoras y distribuidoras norteamericanas –*Fox, Columbia, United International Pictures, Disney y Warner Bros*–, así como otras distribuidoras independientes, agrupadas en la Federación de Distribuidores de Cine (FEDICINE), plantearon un recurso contencioso-administrativo frente al *Decreto 237/1998, de 8 de septiembre, del Departamento de Cultura de la Generalidad, sobre medidas de fomento de la oferta cinematográfica doblada y subtitulada en lengua catalana*, que sancionaba a los distribuidores de películas que no hiciesen, como mínimo, un número de copias en versión doblada íntegramente al catalán igual al número de copias dobladas al castellano o a otras lenguas, siempre que se distribuyesen en Cataluña 20 copias. La nueva regulación provocaba el tránsito de una política de medidas de acción positiva vía subvenciones a otra sancionatoria, algo que no estaba previsto por la Ley de 7 de enero de 1998 (en cuya disposición adicional quinta establece que la «presente Ley no establece sanciones para los ciudadanos y ciudadanas), por lo que el decreto fue suspendido cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por nulidad clara, ostensible, manifiesta y evidente a todas luces.

ii) En relación con otros grupos minoritarios (*como los religiosos, étnicos, nacionales, y por lo general los extranjeros, o grupos sociales en situación de vulnerabilidad específica*), la tímida interpretación del Tribunal Constitucional sobre los titulares, naturaleza y contenido del derecho de acceso pone de relieve *la importancia que, en este ámbito, pueden tener los periodistas y los medios de comunicación en la medida en que, en sus códigos deontológicos, o en las normas propias de la empresa, establezcan un régi-*

men de acceso y participación más favorecedor del que se deduce de la interpretación constitucional.

A la luz de la doctrina del TC, se trata de un derecho de *configuración legal*, que debe «ser articulado por el legislador»⁷², algo que no se ha producido con carácter general ni, por supuesto, en relación con las minorías; además, porque no constituye un *derecho de prestación*⁷³, por lo que no cabría interpretarlo en el sentido de que existe un «derecho a exigir el apoyo con fondos públicos a determinados medios privados de comunicación social o la creación o el sostenimiento de un determinado medio del mismo género y de carácter público»⁷⁴. Constituye pues, como señala la doctrina, un «mero derecho negativo de libertad o reaccional –y no un verdadero derecho de participación (aunque de configuración legal), lo que impide extraer de dicho precepto constitucional límites tangibles a la libertad de configuración de su contenido por el legislador»⁷⁵.

En relación con los *grupos religiosos* cabe señalar que los *acuerdos de cooperación del Estado con confesiones minoritarias* no se refieren a los medios de comunicación⁷⁶.

En relación con la religión católica, cabe recordar que el artículo XIV del *acuerdo de 3 de enero de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede, sobre enseñanza y asuntos culturales* (BOE núm. 300, de 15 de diciembre), indica que el «Estado velará para que sean respetados en sus medios de comunicación social los sentimientos de los católicos y establecerá los correspondientes acuerdos sobre estas materias con la Conferencia Episcopal española».

Por otro lado, en relación a los *otros grupos* no se establece ninguna disposición protectora, aun cuando algunos medios de comunicación empiezan a realizar acciones de concienciación con tal finalidad.

Lo único específico a lo que obliga la Constitución es a que «no se haga nada para impedir ese acceso»⁷⁷ y a no «denegar discriminatoria, o arbitrariamente por carente de fundamento legal, el acceso que la ley haga posi-

⁷² STC 63/1987, FJ 6.

⁷³ STC 86/1982, FJ 3.

⁷⁴ STC 6/1981, FJ 5.

⁷⁵ PARADA VÁZQUEZ, BACIGALUPO SAGGESE, cit., p. 570.

⁷⁶ Vide las Leyes 24, 25 y 26/1992, de 10 de noviembre, por las que se aprueban los acuerdos de cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, con la Federación de Comunidades Israelitas y con la Comisión Islámica, todas ellas de España (BOE núm 272, de 12 de noviembre).

⁷⁷ STC 6/1981, FJ 5.

ble [...]»⁷⁸. Estamos, por tanto, *en un ámbito en el que el papel de los códigos deontológicos puede ser muy relevante*.

b) La tendencia en el Derecho internacional de fomentar y favorecer la participación y acceso de las minorías a los medios de comunicación y el papel de éstos

El escaso desarrollo del ordenamiento español en este punto nos remite a lo establecido en algunos acuerdos internacionales –que también forman parte del derecho nacional–, así como a la tendencia que en el Derecho internacional y europeo se está formando en cuanto a la necesidad de promover una mayor participación de las minorías en la vida pública y, más específicamente, en los medios de comunicación.

i) La Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, no reconoce expresamente el *derecho de participación y de acceso de las minorías a los medios de comunicación*, aun cuando indirectamente se refiere a él cuando reconoce su derecho a la *identidad, a la propia cultura y a participar en la vida cultural, religiosa, social, económica y pública* (vide arts. 1.1, 2.1, 2.2, 2.5 y 4.2), así como a que los Estados adopten las medidas necesarias para alcanzar dichos objetivos, lo que puede hacerse efectivo a través de la promoción de la participación y del acceso de las minorías en los medios de comunicación.

Aunque de manera muy indirecta, cabe indicar que el artículo 25 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos reconoce el *derecho a participar en los asuntos públicos* [...], algo que, según la *Observación general número 25* (de 12 de julio de 1996), implica que deberán adoptarse *medidas positivas para superar toda dificultad concreta*, como las barreras lingüísticas [...] y otras que impidan a las personas con derecho de voto ejercer sus derechos de forma efectiva.

El artículo 15 del *Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales, del Consejo de Europa*, de 10 de noviembre de 1994, introduce un novedoso avance, en el derecho positivo regional europeo, al obligar a los Estados partes a *crear las condiciones necesarias para la participación efectiva de los miembros de las minorías en la vida cultural, social y económica, así como en los asuntos públicos*. Y al señalar no sólo que los Estados deben vigilar para

⁷⁸ STC 63/1987, FJ 6.

que se promueva un espíritu de tolerancia y de diálogo intercultural, sino que deben *tomar medidas eficaces, a través de los Medios (y de la educación) para fomentar el respeto y la comprensión mutua entre todas las personas.*

ii) En este sentido, y por cuanto se refiere a la *creación de medios de comunicación por los miembros de las minorías*, el *Convenio marco* de minorías del Consejo de Europa establece, en primer lugar, que los Estados deben vigilar que los miembros de las minorías *no se vean discriminados* ni en cuanto a los «regímenes de autorización» (en relación con la creación de empresas de comunicación de radio, televisión y cine) ni en relación con el *acceso* a los *Medias* (art. 9.1 y 2).

Además, por lo que se refiere a la *creación de medios de comunicación por las minorías*, los Estados están obligados a *no obstaculizar* su creación y a *vigilar* que, en la medida de lo posible y a la luz del régimen jurídico de la radio y de la televisión, se acuerde «a las personas pertenecientes a minorías nacionales la posibilidad de crear y utilizar sus *Medios*» (art. 9.3). El artículo 11.2.a), b), c), d), e) y f) establece que los Estados deben *fomentar y facilitar* la creación de estaciones de radio, cadenas de televisión, obras audiovisuales y órganos de prensa en lenguas regionales y minoritarias.

Cabe recordar aquí la jurisprudencia del TEDH en cuanto a *minorías y monopolios informativos*. En el *asunto Informationsverein Lentia y otros c. Austria*, de 28 de octubre de 1993, el Tribunal consideró que el Estado demandado había vulnerado el artículo 10 del CEDH, en la medida en que se había producido una injerencia desproporcionada con el objetivo perseguido en una sociedad democrática (pár. 43). Entre otros, la *Arbeitsgemeinschaft offenes radio* (Agora) solicitaba instalar en Carintia meridional una antena de difusión, en alemán y esloveno, para un programa no comercial de radio, cuyos promotores ya explotaban en Italia una estación móvil autorizada, por lo que, en 1988 solicitó una concesión que le fue denegada por las autoridades competentes. También se había denegado a una asociación de copropietarios de una residencia de 458 apartamentos y 30 comercios de Linz (*Informationsverein Lentia*) la creación de una red cerrada de televisión por cable, cuyos programas se hubiesen limitado a cuestiones de interés común relativos a los derechos de los miembros. Los demandantes consideraban que el monopolio austriaco era incompatible con el artículo 10 del CEDH (pár. 26), traduciendo la «voluntad de las autoridades de asegurarse el control político de lo audiovisual, en detrimento del pluralismo y de la libertad artística» (pár. 31). Para el Gobierno, el sistema de licencias permitía al Estado reglamentar los aspectos técnicos de la actividad audiovisual y asignar a ésta su lugar y su papel en la sociedad moderna (pár. 30). El TEDH recuerda el papel fundamental de la libertad de expresión en una sociedad democrática, que debe fundarse en el pluralismo del que el Estado es el último garan-

te (pár. 38). Como señala, «de todos los medios de asegurar estos valores el monopolio público impone las restricciones más fuertes a la libertad de expresión; a saber, la imposibilidad total de ejercerse de otro modo que por la vía de una estación nacional y, llegado el caso, de manera reducida, por una estación cableada local. Teniendo en cuenta su radicalidad, no estarían justificadas sino en caso de necesidad imperiosa» (pár. 39). Y, debido a los progresos técnicos, dichas restricciones no se pueden fundar en la actualidad en consideraciones como el número de frecuencias y de canales disponibles ni en las otras argumentaciones del gobierno austriaco que rechaza el Tribunal.

En el *Asunto ABC c. Austria*, de 20 de octubre de 1997, también se trataba de una asociación con objetivo no lucrativo, a la que se deniega, el 9 de enero de 1990, la autorización de crear y de explotar una estación radiofónica y la atribución de una frecuencia. Aunque, como recuerda el TEDH (pár. 28), el «régimen de monopolio podía contribuir a la calidad y el equilibrio de los programas, hay que examinar su conformidad con el artículo 10.2 y, en particular, si el Estado ha sobrepasado su «margen de apreciación», sometido a «control europeo», estricto como consecuencia de su importancia (pár. 30), llegando a la conclusión de que se había producido violación del artículo 10 porque ni existía «ninguna base legal que permitiese conferir una licencia de explotación a una estación distinta de la Oficina austriaca de radiodifusión (pár. 31). Ésa fue la situación hasta la aprobación de la ley sobre la radiodifusión regional (que entró en vigor el 1 de enero de 1994), modificada en 1997 como consecuencia de una sentencia del Tribunal constitucional, de 27 de septiembre de 1995, que había anulado ciertas disposiciones.

Finalmente, cabe señalar que la *Recomendación 6.a) del Seminario Minorías y Medios de Comunicación* indica que a la luz de los principios de pluralismo, igualdad y no discriminación «los Estados deben proveer los recursos e infraestructuras a las minorías que deseen establecer sus propios *Medios* y permitir que los obtengan de las autoridades locales o del extranjero».

iii) Por cuanto al *derecho de acceso y participación* de las minorías en los medios, el Convenio marco de minorías nacionales establece que los Estados adoptarán las medidas adecuadas para *facilitar el acceso (y participación)*, para promover la tolerancia y el pluralismo cultural. El acceso de las minorías a los *Medios* mayoritarios refleja la diversidad de una sociedad, por lo que la creación de medios minoritarios no debe ser excluyente de la participación de las minorías en los medios mayoritarios.

Sobre esto destacan los trabajos de la *Organización de Seguridad y Cooperación en Europa*, que tiene un Alto Comisionado de minorías nacionales —como instrumento de prevención de conflictos— para fomentar la *efectiva participación de las minorías nacionales en la vida pública*. El *Documento de la reunión de*

Copenhague sobre la dimensión humana de la CSCE, de 29 de junio de 1990, establece (punto 35) que los Estados participantes respetarán el *derecho de las personas pertenecientes a minorías nacionales de participar activamente en los asuntos públicos*, fundamentalmente en aquellos asuntos relativos a la protección y promoción de la identidad de dichas minorías. Ello implica adoptar medidas para crear y favorecer las *condiciones que permiten promover dicha identidad étnica, cultural, lingüística y religiosa de ciertas minorías*.

Aunque el desarrollo de esta disposición es todavía precario, y se está centrando en los aspectos políticos e institucionales, debe resaltarse que una de las medidas necesarias, como se señala en las *Lund Recommendations* (de septiembre de 1999)⁷⁹ consiste en impulsar la *autonomía cultural y/o personal, fundamentalmente de las minorías dispersas* (p. 17). Pero queda mucho por hacer tanto por lo que se refiere al desarrollo progresivo de las obligaciones de los Estados como a la efectiva participación y acceso de las minorías en los medios de comunicación.

En relación con la minoría europea por excelencia, el *pueblo gitano*, los resultados son todavía escasos. Como pone de relieve el Alto Comisionado de Minorías Nacionales de la OSCE⁸⁰, a pesar de un cierto cambio de tendencia en los últimos años, debido al actual dinamismo del movimiento romaní, los programas para el pueblo gitano están destinados al fracaso porque se realizan sin su participación y con poca conciencia de su cultura específica y necesidades.

Ello no obstante, ciertas realidades muestran un *cambio de tendencia positivo, en el que deben avanzar los periodistas y los Medios, siendo algo que pueden realizar perfectamente impulsando la autorregulación*. En un reciente cuestionario realizado a los países miembros de la OSCE, una de las preguntas era *¿En qué medida y con qué extensión las personas pertenecientes a las minorías tienen acceso a los Medios públicos en su propia lengua?* De las respuestas se deduce que existe la tendencia a incrementar las subvenciones a la prensa escrita en lengua minoritaria, de favorecer el acceso (en la legislación o en la práctica), durante un número de horas, a las minorías lingüísticas, a las

⁷⁹ Aprobadas por la *Foundation on inter-ethnic relations* (vide en osce.org/hcnm/documents/lund.htm). Asimismo, previamente habían aprobado las *Recomendaciones de La Haya sobre derechos educativos de las minorías* (1996) y las *Recomendaciones de Oslo sobre derechos lingüísticos de las minorías nacionales* (1999).

⁸⁰ *Report of the OSCE High Commissioner on National Minorities to session 3 (Roma and Sinti) of the Human dimension section f the OSCE review conference*, RC.GAL/2/99, de 22 de septiembre de 1999, p. 5.

radios públicas o a la televisión, o de permitir a un grupo minoritario la creación de su propia radio o televisión ⁸¹.

En Derecho comparado europeo, un modelo de participación de las minorías en materia de *radiodifusión y televisión* consiste en reconocer a las *minorías étnicas el derecho a utilizar cadenas nacionales de televisión o de radio durante un lapso de tiempo* determinado, con el objeto de producir, en su lengua, programas dirigidos a los miembros de sus minorías. Éste es el caso de Austria, Finlandia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Rumanía, Rusia, Eslovaquia, Suecia, Suiza. En algunos países, como Suiza o Finlandia, algunas estaciones de radio emiten únicamente en la lengua minoritaria.

En otros casos, como en Hungría o Italia, se acuerda la posibilidad práctica a los grupos minoritarios de *recibir programas de televisión o de radio de sus «naciones madres», mediante instalaciones técnicas apropiadas*. En general, la recepción de programas provenientes del extranjero es libre, en la medida en que lo permiten la situación geográfica y las posibilidades técnicas. En la misma línea, el artículo 9 del *Convenio marco* de minorías nacionales señala que el derecho a la libertad de expresión de una persona perteneciente a una minoría nacional comprende «la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas en la lengua minoritaria, sin injerencia de las autoridades públicas y sin consideración de fronteras». Del mismo modo, el artículo 11.2 de la *Carta europea de lenguas regionales y/o minoritarias*, de 5 de noviembre de 1992, establece el principio de libertad en la recepción directa de las emisiones de radio y de televisión entre países vecinos [...].

En países como Finlandia, Alemania o Austria los grupos lingüísticos y sociales están *representados en los órganos de administración de las cadenas nacionales* ⁸².

Por lo general, no parece que las minorías tengan establecidas importantes *web* propias en Internet.

iv) Empieza a haber *propuestas doctrinales para impulsar la participación de las minorías en los medios*. Así, en España el Dr. J. A. Rodríguez García, con objeto de impulsar la participación de los «grupos sociales» en los medios de comunicación, fomentando el pluralismo social y fortaleciendo el sistema democrático propone la creación de un *Consejo de la Comunicación*

⁸¹ Cfr. *Report on the linguistic rights of the persons belonging to national minorities in the OSCE Area*, en osce.org/hcnm/documents/linguistic-rights/report.html.

⁸² Vide «La protection des minorités», Commission Européenne pour la démocratie par le droit, Conseil de l'Europe, *Collection science et technique de la démocratie*, núm. 9, 1994, p. 70.

como órgano administrativo independiente de control de los medios de comunicación, compuesto por personas (que se guíen por el principio de participación y el respeto al pluralismo) que formen parte de *grupos sociales y políticos* entre los que incluye la representación de lo que denomina sectores poblacionales (en los que incluye a las minorías étnicas, así como a otros grupos desfavorecidos⁸³), cuyo ámbito de actuación se extendería a todos los medios de comunicación y cuyas múltiples funciones contribuirían a fomentar el pluralismo⁸⁴.

Por su parte, aunque de manera indirecta, la Comisión Europea propone la creación de un *organismo independiente* en cada Estado, responsable de analizar los problemas existentes, estudiar las posibles soluciones y proporcionar asistencia específica a las víctimas, en relación con la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, en desarrollo del artículo 13 TCE⁸⁵.

v) Finalmente, debe apuntarse que existen obligaciones internacionales específicas en relación con los niños y con los pueblos indígenas. De un lado, la *Convención relativa a los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989*, que reconoce la importante función que pueden desempeñar los medios de comunicación en la protección de los derechos de la infancia establece, en el artículo 17.d), que los Estados Partes:

«alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena.»

De otro lado, la *Convención número 169, relativa a los pueblos indígenas y tribales en países independientes*, adoptada el 27 de junio de 1989 por la Conferencia General de la OIT (y que entró en vigor el 5 de septiembre de 1991),

⁸³ Además, incluye a los partidos políticos, los sindicatos de trabajadores, las organizaciones empresariales, las confesiones religiosas, los colegios profesionales y organizaciones profesionales, las organizaciones de consumidores y usuarios, las organizaciones culturales y artísticas, las organizaciones institucionales y asociaciones relacionadas con el campo educativo, los medios de comunicación, federaciones deportivas y Defensor del Pueblo. Vide RODRÍGUEZ GARCÍA, J. A., *El control de los medios de comunicación*, Centro universitario Ramón Carande, Dykinson, Madrid, 1998, en especial, pp. 243-258.

⁸⁴ Vide, sobre el amplísimo elenco de funciones que propone el profesor Rodríguez García, pp. 254-256.

⁸⁵ Vide, reciente *propuesta de Directiva del Consejo, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico*, en especial considerando núm. 19, Bruselas, 31 de mayo de 2000, COM (2000), 328 final.

precisa en su artículo 30 que, con la finalidad de que puedan conocer sus tradiciones y culturas, derechos y obligaciones (en especial en lo que atañe al trabajo, posibilidades económicas, educación y salud, servicios sociales...), deberá:

«recurrirse, si fuera necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos.»

VI. EL DERECHO INTERNACIONAL Y LOS PERIODISTAS AL SERVICIO DE LA PAZ: LA PROHIBICIÓN DE TODA PROPAGANDA EN FAVOR DE LA GUERRA

a) La propaganda, instrumento de la política exterior de los Estados

El Derecho internacional se preocupó de los medios de comunicación por su impacto negativo en las relaciones entre los Estados, y no por sus efectos para los derechos humanos, que en gran medida carecían de reconocimiento jurídico internacional hasta bien entrado el siglo xx. El primer ámbito en el que se planteó un posible regulación de los límites a la difusión de ideas, informaciones y opiniones a través de los medios se refiere a la *Propaganda*. Whitton, profesor en la Universidad de Princeton en los años cuarenta, realizó diversas investigaciones ⁸⁶ sobre las limitaciones que el Derecho internacional imponía a la propaganda, diferenciada de la mera información por el objetivo que busca: persuadir, no informar.

Desde antiguo la propaganda ha sido utilizada por los Estados como un instrumento al servicio de los objetivos de la política exterior, no como instrumento de información. En la doctrina española, el profesor García Arias ⁸⁷ analizó diversos ejemplos históricos (entre otros, la leyenda negra contra España, campaña política de propaganda que habría sido fomentada por Holanda; así como la utilización de la guerra psicológica, con letra impresa, en la Primera Guerra Mundial; la guerra de las ondas, en la segunda; la guerra psicológica, en la guerra fría) de utilización de la propaganda en la guerra o, en tiempos de paz, al servicio de los objetivos de la política exterior. Whitton (que señalaba

⁸⁶ WHITTON, J. B., «Propaganda and international law», *RCADI*, 1948-I, t. 72, pp. 541-657; del mismo autor «La propagande internationale instrument de guerre ou de paix», *RGDIP*, 53, 1949-I, pp. 185-200.

⁸⁷ GARCÍA ARIAS, L., «La guerra psicológica», *La guerra moderna y la Organización internacional*, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1962, pp. 245-310.

que, durante la guerra fría, la propaganda estaba sobrecalentada) llegó a decir que «no es una exageración afirmar que las dos armas letales más importantes en la historia mundial, y aquellas más peligrosas para la humanidad, son el arma atómica y la propaganda radiofónica».

Como dato anecdótico de la importancia que, en las relaciones internacionales, pueden tener algunas informaciones, baste recordar el daño que sufrieron los españoles que tenían propiedades en Guinea (que fueron nacionalizadas), como represalia («carente de toda justificación», según el Tribunal Supremo⁸⁸) del gobierno de aquel país ante un programa de RTVE, y que fue objeto de reparación por el Estado español, al entender que existía un nexo mediato de causalidad entre el funcionamiento de ese «servicio público» y el daño sufrido por esas personas.

Lo cierto es que las relaciones internacionales se ven afectadas por mensajes que aluden a los *intereses esenciales de los Estados o que suponen un factor de conflicto en la sociedad internacional*. Muchos de los actos de propaganda constituyen simplemente el ejercicio de la libertad de expresión y de información. En otras ocasiones, por lo que se refiere a la antaño denominada propaganda difamatoria y subversiva⁸⁹, si carecen de veracidad y son apoyados por los Estados, pueden constituir una violación del *principio de no intervención en los asuntos internos*, siempre que busquen atentar contra la personalidad o los elementos políticos, económicos y culturales de otro Estado o para coaccionarlo, a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos. Ahora bien, como ha puesto de relieve la doctrina, será difícil «trazar la raya entre una influencia permitida y una intervención prohibida», exis-

⁸⁸ Los damnificados reclamaron al Estado español mediante una acción de responsabilidad patrimonial que fue aceptada y atendida por el Tribunal Supremo, en sentencia de 16 de noviembre de 1974, al entender que el acto de represalia «no era imputable a los mismos y siendo ajena a toda fuerza mayor, tenía un origen inmediato en un acto de represalia, generado por una información de Televisión Española, lesión patrimonial no satisfecha por la vía de la protección diplomática, y que aunque no entrañe, para el actuar de la Administración española, una conducta anormal y, menos lícita, es sin embargo, de las que también justifican una indemnización por conectarse, en un ciclo de causación con hechos imputados al ámbito del quehacer público y causales en aquel proceso al funcionamiento de los servicios públicos». Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 16 de noviembre de 1974, Ar. 4509. Vide un comentario en DÍAZ BARRADO, C. D.; FERNÁNDEZ LIESA, C. R., *Indemnizaciones a españoles privados de sus bienes en el extranjero*, 51, Tecnos, Madrid, 1993, 53 pp.

⁸⁹ Whitton realizó una clásica distinción entre propaganda difamatoria (ultrajes dirigidos contra la dignidad, el honor o el prestigio de un Estado extranjero, sus jefes o sus representantes), subversiva (aseveraciones públicas de un Estado, dirigidas contra otro Estado, con el objetivo confesado o tácito de incitar a los habitantes a la revuelta o de destruir el gobierno o la constitución) o de guerra.

tiendo una enorme dificultad para «probar el *animus* de coerción en ausencia de mecanismos institucionales que garanticen la observancia del principio»⁹⁰.

b) La prohibición de la propaganda en favor de la guerra

Mayor regulación ha recibido en el Derecho internacional la *propaganda de guerra*. Ya durante la época de la Sociedad de las Naciones se convocó una Conferencia internacional, celebrada en Ginebra, que redactó una *Convención sobre el uso de los medios de comunicación* (Broadcasting) *en la causa de la paz*, de 23 de septiembre de 1936, firmada por 22 delegaciones (y ratificada sólo por siete Estados, entre los que no se encontraban EE UU, Japón, Alemania o Italia), y que durmió el sueño de los justos. En todo caso, establecía ciertas obligaciones en relación con las actividades de propaganda a través de la radio⁹¹.

Después de la II Guerra Mundial la *Res. 110 (II), de 1947, de la Asamblea General de las Naciones Unidas*, condenó «toda propaganda destinada a provocar o estimular amenazas contra la paz, la ruptura de la paz o todo acto de agresión». Aunque esta resolución carecía de valor vinculante, siendo una recomendación, el 16 de diciembre de 1952 se abrió a la firma la *Convención sobre el Derecho Internacional de Rectificación* (que entró en vigor el 24 de agosto de 1962), en cuyo preámbulo se hacían referencias a la necesidad de «combatir la difusión de informaciones falsas o tergiversadas, que puedan ser perjudiciales para los Estados» y al deseo de «proteger así a la Humanidad contra el flagelo de la guerra, combatiendo toda propaganda que provoque o estimule cualquier amenaza a la paz»⁹².

⁹⁰ Cfr. REMIRO BROTONS, A.; RIQUELME CORTADO, R. M.; Díez-HOCHTLEITNER, J.; ORIHUELA CALATAYUD, E., y PÉREZ-PRAT DURBAN, L., *Derecho internacional*, McGraw Hill, Ciencias Jurídicas, Madrid, 1997, p. 91.

⁹¹ Así, el artículo 1 señalaba que se debían paralizar aquellas emisiones que incitasen a la población de un territorio a realizar actos incompatibles con el orden interno o la seguridad del Estado signatario, o el artículo 2 indicaba que las transmisiones no debían constituir una incitación a la guerra.

⁹² Para ello, consideraron que era necesario establecer la posibilidad de asegurar una publicidad adecuada a las rectificaciones, para lo cual se comprometieron, entre otras cosas, a que (art. II) cuando «un Estado contratante alegue que determinado despacho informativo, capaz de perjudicar sus relaciones con otros Estados o su prestigio o dignidad nacionales, es falso o tergiversado y tal despacho informativo haya sido transmitido de un país a otro por corresponsales o agencias de información de un Estado contratante o no contratante, y publicado y difundido en el extranjero, aquel Estado podrá presentar su versión de los hechos (a esto se le denomina comunicado) a los Estados contratantes en cuyos territorios haya sido publicado o difundido. Los Estados, en breve plazo y a más tardar en quince días (art. III), deberán distribuir el comunicado a las agencias informativas y corresponsables que ejerzan actividad en su territorio.

Pero será el *Pacto de Derechos Civiles y Políticos* (1966) el que establezca con carácter vinculante, en su artículo 20.1 que «toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por ley». Como ha señalado el Comité de Derechos Humanos en su observación general número 11 al artículo 20, de 20 de julio de 1983, «esta prohibición es compatible con el derecho a la libertad de expresión previsto en el artículo 19 y se extiende a cualquier forma de propaganda que amenaza con provocar un acto de agresión o de ruptura de la paz, en violación de la Carta de las Naciones Unidas». Por ello, no resultan contrarios al artículo 20.1 la «llamada al derecho soberano de legítima defensa ni al derecho de los pueblos a la autodeterminación y a la independencia, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas⁹³». Dicha disposición exige que «una ley indique claramente que la propaganda [...] es contraria al orden público, y prescriba una sanción en caso de violación».

Del mismo modo, el Derecho internacional prohíbe algunos actos de propaganda cuya finalidad sea atentar contra la *defensa o la seguridad del Estado*. Así, en el Derecho del Mar, por ejemplo, se considera que el Derecho de paso inocente por el mar territorial, deja de ser tan inocente cuando es perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño, algo que sucede cuando un buque realiza actividades como la mencionada⁹⁴.

c) Otros aspectos objeto de desarrollo progresivo en el Derecho internacional

Finalmente, cabe señalar que en el Derecho internacional el *desarrollo de nuevas tecnologías* que han dado lugar a la puesta en órbita de satélites artificiales, y que han ampliado las aplicaciones que exigen un alto grado de cooperación internacional (en el ámbito de las comunicaciones, de la difusión de programas de televisión susceptibles de recepción directa por el público y en la observación de la tierra –lo que tienen aplicaciones meteorológicas, sísmicas, detección de incendios, usos agrícolas, detección de recursos minerales, etc.), hace necesaria una regulación internacional, que parece no haber concluido con unos principios universalmente aceptados.

⁹³ De conformidad con el desarrollo de la Carta, cabe recordar que tienen derecho de autodeterminación los pueblos coloniales, los pueblos ocupados (ej: Kuwait cuando es ocupado por Iraq) o los pueblos sometidos a un régimen de graves violaciones de derechos humanos (Ej: *apartheid*).

⁹⁴ Vide artículo 19.1 y 2.d) de la *Convención sobre Derecho del Mar*, de las Naciones Unidas, firmada en Montego Bay, el 10 de diciembre de 1982.

En todo caso, cabe destacar la Res. A/37/92, de 10 de diciembre de 1982, sobre *principios que rigen la utilización por los Estados de satélites artificiales terrestres a los fines de la televisión directa internacional*, que no fue apoyada por unanimidad –ni por una mayoría significativa–, por lo que, siguiendo al profesor Pastor Ridruejo, cabe concluir que «en estas condiciones la cuestión de la difusión de la televisión directa por satélite no ha recibido una solución satisfactoria, ni siquiera operativa, desde el punto de vista del Derecho internacional»⁹⁵.

VII. LA PROHIBICIÓN DE APOLOGÍA DEL ODIO NACIONAL, RACIAL O RELIGIOSO QUE CONSTITUYA INCITACIÓN A LA DISCRIMINACIÓN Y LA RESPONSABILIDAD ÉTICA DE LOS PERIODISTAS

Entre los deberes y responsabilidades especiales de los periodistas y de los medios de comunicación (así como de todas las personas), con una relación implícita en la protección de las minorías por los medios de comunicación, el *Pacto de Derechos Civiles y Políticos* establece la siguiente limitación en el artículo 20.2, al indicar que:

«Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya una incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.»

⁹⁵ En dicha Resolución se establecían diversos principios, como que las actividades debían ser compatibles con los derechos soberanos de los Estados (incluido el principio de no intervención, y con el derecho de cualquier persona a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas proclamadas en los instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas. Del mismo modo, dichas actividades deben favorecer la libre difusión e intercambio de informaciones y conocimientos en los campos cultural y científico, contribuir al desarrollo de la educación y al progreso social y económico, en particular de los países en desarrollo, mejorar la calidad de vida de todos los pueblos y procurar una distracción dentro del respeto debido a la integridad política y cultural de los Estados, etc. De otro lado, la Res. A/41/65, de 3 de diciembre de 1986, de la Asamblea General de Naciones Unidas, sobre los principios de detección (de la tierra desde satélites artificiales) establece principios muy generales (las actividades deben realizarse en beneficio e interés de todos los países, cualquiera que sea su nivel de desarrollo económico, social o científico o tecnológico y teniendo especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo; han de conformarse al Derecho internacional; fomentarán la protección del medio ambiente y la de la Humanidad contra las catástrofes naturales; y el acceso a los datos del Estado observado tendrá lugar sin discriminación y en condiciones de precios razonables. Vide PASTOR RIDRUEJO, J. A., *Curso de Derecho internacional público y Organizaciones internacionales*, sexta edición, Tecnos, Madrid, 1996, pp. 466-470.

Por su parte, un año antes, la *Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial*, aprobada por la Resolución 2106 A (XX), de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 21 de diciembre de 1965 (y que entró en vigor el 4 de enero de 1969), establecía, en el artículo 4, que:

«Los Estados partes condenan toda la propaganda y todas las organizaciones que se inspiren en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o grupo de personas de un determinado color u origen étnico, o que pretendan justificar o promover el odio racial y la discriminación racial, cualquiera que sea su forma, y se comprometen a tomar medidas inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de tal discriminación»⁹⁶.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial realizó, en 1993, una Recomendación General (la número XV)⁹⁷, relativa al artículo 4, en la que se pone de relieve la importancia y el carácter vinculante de la disposición, que obliga a los Estados no sólo a promulgar las leyes pertinentes sino también a garantizar su eficaz aplicación, dado que las amenazas y actos de violencia racial conducen fácilmente a otros actos de esa índole creando una atmósfera de hostilidad. En particular las obligaciones que tienen los Estados [y todas las autoridades públicas, *vide* art. 4.c)] en relación con los apartados a) y b) del artículo 4, son las de sancionar los siguientes comportamientos:

- i) La difusión de ideas basadas en la superioridad o el odio racial.
- ii) La incitación al odio racial.
- iii) Los actos de violencia contra cualquier raza o grupo de personas de otro color y origen étnico.
- iv) La incitación a cometer tales actos.

⁹⁶ Se consideran tales actos, a la luz del artículo 1, «toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o cualquier otra esfera de la vida pública». En particular, se comprometen los Estados a [art. 4.a)] «declarar acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, así como todo acto de violencia o toda incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación». En el artículo 4.b) afirmaban el compromiso de «declarar ilegales y prohibir las organizaciones y actividades organizadas de propaganda que promuevan la discriminación racial e inciten a ella [...]».

⁹⁷ *Vide* en *Recopilación de las Recomendaciones Generales*, de 11 de febrero de 1999, CERD/C/365.

v) La financiación de actividades racistas, es decir las de los apartados anteriores.

vi) El artículo 4.b) obliga a los Estados a declarar ilegales las organizaciones (así como las actividades organizadas y otro tipo de propaganda) que promuevan o inciten a la discriminación racial.

En este sentido, en España cabe traer a colación la *sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de diciembre de 1995*, donde se resolvía un recurso de amparo en el que se pretendía la nulidad de una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, por la que se había condenado al Director de una publicación, en forma de *comic*, por la comisión de un delito de injurias como transgresora de la libertad de expresión, al contener un escarnio y humillación de las víctimas del holocausto en los campos de concentración nazis y una apología de sus verdugos.

En el choque entre dos derechos fundamentales, razona el Tribunal Constitucional (FJ 3), entre la libertad de expresión y el derecho al honor del pueblo judío en su conjunto (no obstante, su dispersión geográfica, que es el que recibe como tal grupo humano las inectivas, los improperios y la descalificación global, atacado a título colectivo y que, por tanto, en esa misma dimensión colectiva puede defenderse, estando legitimados para ello, por sustitución, personas naturales o jurídicas de su ámbito cultural y humano), a la luz del artículo 20 de la Constitución española (que reconoce el derecho a la libertad de expresión y de información) llega a la conclusión de que no cabría justificarlo dentro de la libertad de expresión. Y ello porque:

«la lectura del tebeo enjuiciado pone de manifiesto la finalidad global de la obra, humillar a quienes fueron prisioneros en los campos de exterminio, no sólo, pero principalmente, los judíos. Late en el mismo (FJ 5) un concepto peyorativo de todo un pueblo, el judío, por sus rasgos étnicos y sus creencias, una actitud racista, contraria al conjunto de valores proclamados constitucionalmente [...] un *comic* de esta naturaleza, que convierte una tragedia histórica en una farsa burlesca, debe ser calificado como libelo, por buscar deliberadamente y sin escrúpulo alguno el vilipendio del pueblo judío, con menosprecio de sus cualidades para conseguir así el desmerecimiento en la consideración ajena, elemento determinante de la infamia o la deshonra»⁹⁸.

⁹⁸ Cabe señalar que en el *comic* se relataban episodios cuyos escenarios eran los campos de concentración, donde los SS y los judíos aparecían como protagonistas antagonistas de conductas inhumanas, viles y abyectas, con predominio de aberraciones sexuales, expresiones insultantes (animales, carroña), haciendo apología de los verdugos, glorificando su imagen y justificando los hechos.

En otras ocasiones no es tan meridiano dilucidar el hecho de si la propagación de ideas y de opiniones racistas está o no cubierta por la libertad de información. Así, la primera vez que el *Tribunal Europeo de Derechos Humanos* conoció de un caso de difusión de «propósitos racistas» que denegaban a un grupo de personas la calidad de seres humanos, inclinó la balanza a favor de la libertad de información, en un controvertido fallo, en el que la opinión de los jueces disidentes entronca, sin duda, con una actitud deontológica exigible a los periodistas y a los medios de comunicación.

El asunto *Jersild c. Dinamarca*⁹⁹ se originó porque el Obispo de Alborg envió una queja al Ministro de Justicia como consecuencia de la emisión de un *magazine* de actualidad dominical (*Sondagsavinen*), en el que se «daba cuenta» de las actitudes racistas de los miembros de un grupo de jóvenes (denominados *Blousons verts-Gronjakkerne*) que se expresaron de manera injuriosa y despectiva frente a inmigrantes y grupos étnicos establecidos en Dinamarca. Así, entre otras muchas (la entrevista había durado seis horas, aunque sólo se emitieron diversos cortes), decían cosas tales como:

«los negros son bestias [...] las gentes deberían estar autorizadas a tener esclavos [...] los negros no son seres humanos, puedes verlo en la estructura de su cuerpo, gran nariz aplastada, con orejas en flor [...] miras un gorila y lo comparas con un mono y es lo mismo, los mismos movimientos, largos brazos, dedos y pies, misma estructura física y todo (...). Lo que hace el Ku Kux Klan es justo. Un negro no es un ser humano, y lo mismo cabe decir de todos los trabajadores extranjeros, turcos, yugoslavos y compañía etc.»

El periodista responsable de la entrevista, Jens Olaf Jersild, fue condenado por el Tribunal Supremo, que confirmó la condena de la Corte de Apelación y del Tribunal de Copenhague¹⁰⁰, como cómplice (junto al Jefe del servicio de actualidades de *Danmarks Radio*), estimando que había promovido las declaraciones, cuya difusión en la televisión constituía una infracción del artículo 226.b), del Código Penal. El Tribunal tenía especialmente en cuenta que no había habido ningún «comentario en contra» para restablecer el equilibrio. El periodista demandó al Estado danés, el 25 de julio de 1989, ante la Comisión Europea de Derechos Humanos, que el 8 de julio de 1993 concluyó (por 12 votos contra cuatro) que:

⁹⁹ Núm. 36/1993/431/510, sentencia del TEDH de 23 de septiembre de 1994.

¹⁰⁰ Fueron condenados a multa de 1.000-2.000 coronas danesas, respectivamente, o, subsidiariamente, a cinco días de prisión. Por su parte, el Tribunal de Copenhague también había condenado a los tres jóvenes racistas.

«se ha producido (por parte de Dinamarca) violación del artículo 10 del CEDH porque, entre otras cosas (FJ 28) el propósito injurioso tenía por efecto, más bien, ridiculizar a sus autores que promover sus puntos de vista racistas. La emisión daría la impresión de conjunto de que buscaba llamar la atención del público sobre una cuestión de gran preocupación para la sociedad: a saber, el racismo y la xenofobia.»

Por su parte, el TEDH también va a considerar que *Dinamarca había violado el artículo 10 del CEDH al condenar al periodista, teniendo en cuenta para ello el papel de la prensa en una sociedad democrática* ¹⁰¹. En esta línea, recuerda que *la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática*, por lo que las garantías que se deben acordar a los medios de comunicación revisten una importancia particular, para que puedan jugar su papel de *chien de garde public*; incidía en el hecho de apreciar si, en su conjunto, la emisión *tenía por objetivo al propagación de ideas y opiniones racistas* (pár. 36), algo que nadie defendía, por lo que entiende que «la injerencia en el ejercicio del derecho del interesado a la libertad de expresión no era necesaria en una sociedad democrática».

Sin entrar ahora a una valoración del fallo del Tribunal, cabe señalar que *los periodistas, desde una perspectiva deontológica, no deben ser neutrales frente a manifestaciones de tal calibre, racistas y xenófobas*. Por ello, con independencia de la vulneración por el Estado danés del artículo 10 CEDH, *se puede reprochar la conducta ética del periodista al no mostrar una actitud explícita de desaprobación de las declaraciones*. En esta línea son reveladoras las opiniones disidentes (el fallo tuvo a favor 12 votos y siete en contra). Así, en la *opinión disidente de los jueces Ryssdal, Bernhardt, Spielmann y Loizou* se señala que:

«el demandante debería haber añadido, al menos, una declaración clara de reprobación [...] Nadie puede excluir que ciertas fracciones de la opinión hayan encontrado en la emisión televisiva un apoyo a sus prejuicios raciales [...] Las buenas intenciones de un periodista no bastan en una situación como ésta, en particular cuando él mismo ha provocado las declaraciones racistas (pár. 3). Los medios deben tomar partido claramente en materia de discriminación y odio racial, idea introducida por la convención internacional sobre eliminación de todas las formas de discriminación racial.»

Y, por lo que respecta al conflicto entre *minorías y medios de comunicación*, estos jueces indicaban con buen criterio (pár. 5):

¹⁰¹ Vide, sobre ello, *Sentencia Observer y Guardian c. Reino Unido*, de 26 de diciembre de 1991, serie A, núm. 216, pp. 29-30, pár. 59.

«A la protección de minorías raciales no se le podría acordar un menor peso que la derecho de comunicar informaciones [...]».

Por su parte, en la opinión disidente común de los jueces Gölcüklü, Russo y Valticos, se señala:

«No admitimos que esta libertad (de expresión) pueda ir hasta llegar a promover el odio racial, el desprecio de otras razas distintas a las que pertenecemos y la apología de la violencia contra aquellos que pertenecen a esas razas en cuestión. Se ha querido justificar esta emisión considerando que crearía sanas reacciones de rechazo entre los auditores. Eso supone hacer prueba de un optimismo, como mínimo, que desmiente la experiencia. Una gran parte de la juventud actual, e incluso de la población de cualquier edad, desamparada por las dificultades de la existencia, el paro y la pobreza, puede estar dispuesta a buscar estos emisarios. Puesto que –y esto es importante–, el autor de la emisión no ha combatido verdaderamente los puntos de vista que presentaba, lo que habría sido necesario para contrabalancear el alcance, al menos para los telespectadores.»

Finalmente, cabe señalar con el TEDH ¹⁰² que en situaciones de conflicto y de tensión (por ejemplo, la situación en España en relación con las actividades terroristas y asesinatos de ETA) los «deberes y responsabilidades que acompañan el ejercicio de la libertad de expresión por los profesionales de los *Medios* revisten una importancia especial» (pár. 54), por lo que conviene «*examinar con una vigilancia particular la publicación de opiniones de representantes de organizaciones que recurren a la violencia contra el Estado*. Los *Medios* corren el riesgo de constituir un soporte a la difusión del discurso del odio y la incitación a la violencia». Pero, al mismo tiempo, cuando las opiniones no son de esta categoría, «los Estados contratantes no pueden prevalerse de la protección de la integridad territorial, de la seguridad nacional, de la defensa del orden y de la prevención del crimen» (pár. 54) para limitar las libertades.

¹⁰² *Asunto Erdoglu e Ince c. Turquía*, sentencia de 8 de julio de 1999.

VIII. LA RESPONSABILIDAD PENAL INDIVIDUAL INTERNACIONAL DEL PERIODISTA POR INSTIGACIÓN DIRECTA Y PÚBLICA A LA COMISIÓN DEL DELITO DE GENOCIDIO Y DE CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD

No es ocioso recordar el importantísimo papel que tuvieron los medios de comunicación durante el fascismo y el nazismo, incitando a la comisión de actos criminales a la población o legitimando las atrocidades nazis contra los derechos humanos, de las minorías y de grupos vulnerables. Hitler o Mussolini habían hecho una sofisticada labor propagandística, de la que fue máximo planificador Goebbels, Ministro de propaganda del Tercer Reich. Mediante ceremonias y artes visuales, con la propaganda escrita o hablada y utilizando y manipulando el arte y la cultura se buscó crear una «nueva psicología colectiva» y, con el tiempo «un hombre nuevo»¹⁰³.

Este nuevo hombre llegó a perder su libertad dentro de una telaraña icónica de la que no podía sustraerse si carecía de unos valores éticos muy sólidos. Por ello, como señala Argullol¹⁰⁴, Hitler fue probablemente el primero en comprender en su profundidad y alcance el nuevo poder de la representación icónica –cuyo exponente más brillante fueron los filmes de Riefensthal–, que posibilita hipnotizar a muchos espectadores, empujados ante la grandeza del espectáculo y, en definitiva, sometibles y manipulables con facilidad.

No fue extraño, por tanto, que en el banquillo de los 21 acusados del célebre juicio de *Nuremberg*, realizado por un Tribunal de ocupación interaliado, sobre la base del estatuto de Londres de agosto de 1945, se sentasen dos destacados periodistas que habían tenido importantes responsabilidades en el aparato propagandístico del nazismo (A. Rosenberg, J. Streicher¹⁰⁵), sembrando el antisemitismo, incitando a la población a la realización de actos criminales contra los judíos (y otros grupos humanos) y solicitando públicamente, incluso, su eliminación física.

¹⁰³ Vide PAYNE, S., *Historia del fascismo*, Planeta, 1995, pp. 244-245.

¹⁰⁴ ARGULLOL, R., «Hitler y la publicidad», *El País*, 20 de febrero de 1999, p. 11.

¹⁰⁵ Ambos fueron condenados a muerte. A. Rosenberg era el jefe de los servicios de política exterior del partido y editor del *Völkischer Beobachter* y *NS Monatshefte*; y J. Streicher, Gauleiter de Franconia y editor del periódico *Der Stürmer*, entre 1923 y 1945. Ambos contribuyeron decididamente a la suspensión de la libertad de prensa, a difundir noticias falsas, a sembrar el antisemitismo y a solicitar a través de los medios la eliminación física de los judíos. Por ello, uno de los motivos de acusación contra Streicher se refería a su labor como periodista.

Estos *periodistas de la muerte*, en expresión de Bettati ¹⁰⁶, verdaderos criminales responsables ante la Humanidad de sus actos, en el Derecho internacional contemporáneo, no son una excepción y después de la Segunda Guerra Mundial otros muchos han continuado su estela de terror, resucitando las técnicas nazis, al propagar noticias falsas e incitar a la comisión de actos criminales, como pone de relieve un somero análisis de lo ocurrido en conflictos como los de la antigua Yugoslavia, Ruanda, Burundi o Somalia, por citar sólo algunos de los más conocidos.

i) En la *antigua Yugoslavia*, como señaló T. Mazowiecki, los *Medios* fueron uno de los principales instrumentos en la propagación del conflicto militar en la región, en la que provocaron o suscitaron numerosas violaciones de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario. Así, por ejemplo, el diario *Politika* afirmaba que los croatas llevaban collares fabricados con los dedos cortados de niños serbios; la televisión de Belgrado, a mediados de los noventa, indicaba que los albanokosovares envenenaban y cortaban el cuello a los niños ¹⁰⁷.

ii) En *Ruanda*, el papel de la prensa en el genocidio contra los tutsis y los hutus moderados fue de enorme relevancia. Algunos medios, como *Radio television des milles collines*, lanzaron a la población a participar activamente en los crímenes de los *interahamwe*. Así, entre otros muchos ejemplos, que muestran una línea de conducta general, una periodista fanática como Valérie Beneriki, comentaba en estos términos la masacre de una familia tutsi: «Vosotros, los muchachos del barrio, sois verdaderamente valientes. He visto el trabajo que habéis realizado, que sirve de ejemplo a toda la juventud. Hacía falta matar a esas gentes y los habéis matado. No había que matar al padre con una bala en la cabeza, sino cortarle en pequeños trozos» ¹⁰⁸.

iii) En *Burundi*, por el contrario, el semanario extremista tutsi, *Le carrefour des idées*, acusaba a los hutus de canibalismo y pedía su eliminación.

iv) En *Somalia*, Radio Mogadiscio –controlada por los partisanos del General Aïdid– difundió la falsa noticia de que «La ONU iba a ocupar la estación de radio para proclamar a Abshir Primer Ministro de un gobierno de transición». El 5 de junio de 1993, 23 cascos azules paquistaníes fueron masacra-

¹⁰⁶ Vide el interesante trabajo de BETTATI, M., *Le droit d'ingérence. Mutation de l'ordre international*, Odile Jacob, París, 1996, en especial pp. 306-321.

¹⁰⁷ BETTATI, M., *ibídem*, *op. cit.*

¹⁰⁸ Citado por BETTATI, *op. cit.*

dos por las fuerzas del Congreso Somalí Unido, tras la propagación de esa noticia, porque días antes habían custodiado al general Abshir, enfrentado a Aïdid, hasta la mezquita el día de la «fiesta del cordero».

Este tipo de actividades constituyen o pueden constituir, en la actualidad, crímenes contra la Humanidad, de los que surge una *responsabilidad penal individual, exigible internacionalmente*, sobre la base del principio de competencia universal (*uti universi*) o, en un futuro, ante el Tribunal penal internacional. Ello es así por el desarrollo del Derecho internacional penal convencional y consuetudinario. En este sentido, cabe destacar que el *Convenio para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (de 9 de diciembre de 1948, entrado en vigor el 12 de enero de 1951)*, señala que el genocidio es un delito de Derecho internacional, cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra (art. 1), consistente en la comisión de determinados actos criminales (matanza de miembros del grupo, lesión grave a su integridad física o mental, sometimiento a condiciones de existencia...), perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal, del que responden, como se señala en el artículo III, también aquellos que «instigan directa y públicamente a cometer genocidio». En el mismo sentido, los *estatutos de creación de Tribunales ad hoc para el castigo de los crímenes internacionales perpetrados en Ruanda y en la antigua Yugoslavia* incluyen dentro de los actos genocidas punibles «la incitación directa y pública a cometer genocidio»¹⁰⁹.

Y, con carácter general, establecen, además, (así, en el art. 7.1 del Estatuto para la antigua Yugoslavia) que «la persona que haya planificado, instigado u ordenado la comisión de alguno de los crímenes señalados en los artículos 2 a 5 (violaciones graves de los convenios de Ginebra de 1949; violación de las leyes o usos de la guerra; genocidio; crímenes de lesa Humanidad) serán «individualmente responsables de ese crimen».

Finalmente, el *Estatuto de Roma de creación de una Corte penal internacional, aprobado en Roma el 17 de julio de 1998*, establece, en la parte III, relativa a los principios generales de Derecho penal, en sede de responsabilidad penal individual (art. 25), la responsabilidad del que «proponga o induzca la

¹⁰⁹ Así, en el artículo 2.3.c, del Estatuto aprobado en relación con los crímenes cometidos en Ruanda, mediante Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 955-1994, de 8 de noviembre, en *BOE* núm. 123, de 20 de mayo de 1995; y en el artículo 4.3.c) del Estatuto para la *antigua Yugoslavia*, aprobado por el Consejo de Seguridad el 25 de mayo de 1993, mediante la Res. 827, en *BOE* núm. 281, de 24 de septiembre de 1993.

comisión de un crimen, ya sea consumado o en grado de tentativa» [art. 25.b)] y, respecto del crimen de genocidio, la de quién haga una «instigación directa y pública a que se cometa» [art. 25.c)].

Por su parte, el *Código Penal español* establece en el artículo 607 (título XXIV, delitos contra la Comunidad internacional, capítulo II, delitos de genocidio) ¹¹⁰, que:

«La difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen los delitos tipificados en el apartado anterior de este artículo o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de los mismos, se castigará con la pena de prisión de uno a dos años.»

La adecuación legislativa española al orden internacional no se ha realizado, a mi juicio, con el rigor ni con la precisión que la ocasión merecía. El artículo 607 está más pensado en relación con la apología del odio racial [...] que en relación con la incitación o la instigación a cometer genocidio, que no aparece en el Código Penal como un tipo específico. Es más, la pena de prisión de uno a dos años del artículo 697 sería irrisoria en relación con tal conducta. Por otro lado, el Código Penal de la democracia tampoco tipifica los *crímenes contra la Humanidad*, que fueron recogidos en el Estatuto de Nuremberg [art. 6.c)], así como en los de Yugoslavia, Ruanda, Roma y en los proyectos de la Comisión de Derecho Internacional de 1994 (sobre creación de un Tribunal penal internacional) y de 1996 (Sobre código de crímenes contra la paz y la seguridad de la Humanidad). Esta trascendente deficiencia, que llevó al juez Garzón a interpretar muy laxamente el delito de genocidio, como también hizo la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al afirmar por unanimidad la competencia española para enjuiciar los crímenes del General Pinochet, tiene algunos efectos negativos.

De un lado, la interpretación torticera, aunque muy bienvenida, del delito de genocidio por los tribunales españoles, que estiman, por ejemplo, que la represión en Argentina era por pertenencia a grupo religioso (no eran defensores de la moral cristiana) o a grupo nacional (un grupo nacional argentino dentro de los argentinos, el autogenocidio), interpretando el delito de genocidio según el buen entender «social», cuando en realidad era un crimen contra la Humanidad, nítidamente identificable en el Derecho internacional, pero invisible en el Código Penal español. Y dado que los jueces españoles ni pensaron ni

¹¹⁰ Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, *BOE* núm. 281, de 24 de noviembre.

se atrevieron –probablemente con sagacidad, debido a los problemas de constitucionalidad que se podrían haber suscitado– a aplicar consuetudinariamente la figura de los crímenes contra la Humanidad, debieron interpretar atípicamente el delito de genocidio, que ya estaba introducido en el Código Penal desde los años setenta.

Ahora bien, el Código Penal de la democracia debería haber recogido los desarrollos del Derecho internacional en la materia. En este sentido, cabe señalar que cuando, en 1996, la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas aprobó un *Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la Humanidad*, adoptó un enfoque restrictivo en cuanto a los crímenes que, en su caso, serían competencia de la Corte Penal Internacional, con el fin de llegar a un consenso. Se incluían así los crímenes contra la Humanidad, de genocidio, de guerra, contra la paz y contra el personal de las Naciones Unidas¹¹¹. Y se excluían otros que podrían incluirse en un código deontológico de los periodistas. Así, en 1991, la lista de posibles crímenes internacionales incluía 12 categorías, algo que no hubiese recibido el apoyo de los gobiernos, entre los que se resaltaban la:

«intervención, la dominación colonial, el reclutamiento la utilización financiación y entrenamiento de mercenarios, el tráfico de estupefacientes, el terrorismo y los daños intencionales y graves al medio ambiente –que no tengan relación con los crímenes de guerra.»

Por otro lado, es bien evidente que la lista de crímenes que aparece en los principales instrumentos internacionales previamente citados es más adecuada que la del Código Penal español, por lo que parece preferible que, en los códigos deontológicos de los periodistas, se haga referencia a la misma y se incluyan los *crímenes contra la paz, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de genocidio*, como actividades en las que pueden verse involucrados los periodistas y frente a las que no cabe una actitud de neutralidad, sino un compromiso en la lucha contra los mismos, mediante la pluma, la imagen y la palabra.

Y ello porque a la luz de nuestro Código Penal muchas conductas delictivas de los periodistas que no fuesen incluibles en la interpretación del artículo 607, pudieran no ser objeto de un ilícito penal o, en todo caso, deberán incluirse en algún tipo penal no específicamente pensado para dichos actos.

¹¹¹ Este último, de signo un tanto autoprotector, no se ha recogido en el Convenio de Roma de 1998.

IX. REFLEXIONES FINALES PARA LA ELABORACIÓN DE UN CÓDIGO DEONTOLÓGICO

A la luz de lo expuesto en las páginas precedentes, no parece necesario fundamentar *in extenso* la necesidad existente de completar los códigos deontológicos (o los libros de estilo, estatutos de redacción, idearios etc.) de la profesión periodística y de los medios de comunicación. La potencialidad de su labor en la promoción y garantía de existencia de unas condiciones en las que sean efectivos los derechos humanos y de las minorías es muy alta.

a) **Sobre las personas y grupos destinatarios de la protección**

Dichos estándares ético-jurídicos tendrían por objeto proteger a las *minorías entendidas en sentido amplio*. Por ello, no sólo serían objeto de protección especial los miembros de las minorías *strictu sensu* (nacionales de un Estado que forman parte de un grupo humano, disperso o concentrado, en situación de inferioridad numérica y social como consecuencia de sus caracteres distintivos de la mayoría de la población por razón de etnia, nacionalidad, cultura, lengua, religión, etc.). En España éste sería el caso de los *gitanos*, así como de las personas pertenecientes a minorías religiosas (*protestantes, musulmanes, judíos*) o lingüísticas (los *catalanoparlantes, euscaldunes y los gallegoparlantes*, fundamentalmente, aun cuando la doctrina normalmente no los califica como tales, porque tienen perfectamente reconocidos y protegidos sus derechos en el ordenamiento español y porque no parece políticamente correcto, aun cuando sí lo sea jurídicamente).

Es notorio que en España no existen pueblos autóctonos (o indígenas), ni por ahora minorías nacionales o étnicas. Ello no obstante existen personas pertenecientes a minorías nacionales y, fundamentalmente, culturales, aun cuando en muchos casos carecen de la nacionalidad española, por lo que en sentido jurídico internacional no serían miembros de minorías desde una acepción conceptual clásica. Por ello, parece conveniente que un código deontológico se aplicase también en relación con los *inmigrantes* que careciendo de la nacionalidad del Estado en que residen, o incluso no teniendo una situación regular desde el punto de vista jurídico (los mal llamados ilegales, pero también los legales o, incluso, aquellos que tienen la nacionalidad española), están en una clara situación de inferioridad por su condición social de margi-

nalidad, en la mayoría de los casos, y por su pertenencia a una cultura distinta de la mayoritaria.

También debería incluirse a las *subminorías o minorías regionales*, es decir, a aquellas personas que siendo mayoritarios en el conjunto del Estado son minoritarios en una región, como ocurre con los castellanoparlantes en Cataluña.

No se ha realizado este estudio, sin embargo, pensando en la protección de la infancia o de la igualdad real de la mujer con el hombre, o en la discriminación por razón de edad, de orientación sexual o de carácter social, aspectos que merecen asimismo un tratamiento específico, pero que deben ser objeto de otros desarrollos.

b) Sobre las obligaciones y los deberes ético-jurídicos de los profesionales de la información y de los medios de comunicación

En un código deontológico debería establecerse en el pórtico la existencia de ciertos *valores* que deben promocionar los profesionales de la información y los *Medios*, inspirando el contenido y el alcance de las obligaciones éticas y jurídicas. Periodistas y *Medios* deben contribuir a transformar la sociedad y la opinión pública de tal manera que sean un factor de prevención de conflictos y de difusión de los valores de tolerancia, pluralismo, respeto a la diversidad (y a la existencia de identidades distintas y superpuestas), fomento de la igualdad real y la lucha contra fenómenos crecientes como el racismo y la xenofobia.

Del mismo modo, parece conveniente resaltar la *responsabilidad de periodistas y Medios en la protección y promoción de los derechos humanos y de las minorías*, así como su labor de *concienciación* frente a sus violaciones (y no sólo de aquellas que suponen graves violaciones, sino también de las que son más difíciles de detectar y de erradicar con el Derecho en vigor), de promoción de las condiciones para su garantía y disfrute, de difusión de los valores y de fomento del debate público y la reflexión permanente.

En el mismo sentido se debería resaltar que en materia de derechos humanos y de las minorías es compatible la independencia y la objetividad con una *actitud crítica, militante, combativa y en absoluto neutral, que es exigible del profesional de la información en la lucha contra los fenómenos de xenofobia, racismo y violaciones de derechos humanos, así como en el fomento y*

difusión de los valores de ética pública, que deben promover todos con independencia de su ideología política, religión o cultura.

Además, se deben *combinar junto a obligaciones jurídicas otras de carácter puramente ético*. Entre las primeras existen, como hemos visto, algunas *obligaciones jurídicas internacionales exigibles directamente a lo periodistas y a los Medios*, que deberían incluirse en los códigos deontológicos, aún más cuando el ordenamiento español se ha elaborado con notables deficiencias técnicas y de fondo en esos aspectos. Deberían incluirse *disposiciones* relativas a la prohibición de toda propaganda en favor de la guerra, así como sobre la prohibición de apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, o sobre la responsabilidad penal individual del profesional de la información por la instigación (o incitación) directa y pública a la comisión del delito de genocidio y de otros crímenes contra la Humanidad.

Estas dos últimas figuras jurídicas son distintas. No es lo mismo hacer apología del odio nacional, racial o religioso, que incitar a la comisión de un delito de genocidio o a otros crímenes contra la Humanidad. En el ordenamiento español no aparece tipificada la incitación a la comisión de crímenes contra la Humanidad, que se confunde con la apología del odio [...] por lo que sería conveniente clarificar los tipos por los propios profesionales y *Medios*.

Por otro lado, incluso la *interpretación de las obligaciones jurídicas por los profesionales exige la introducción de estándares éticos*. Así ocurre, como hemos visto, con la interpretación del *principio de libertad de expresión y de libertad de información*, en la cual los profesionales deben autolimitarse siendo conscientes de su importante *labor educativa* en la sociedad, y de difusión de los valores de tolerancia, pluralismo e igualdad, así como en la lucha contra el racismo y la xenofobia y en la protección de los derechos humanos y de las minorías.

Aun cuando es conveniente que se establezca una *cláusula de no discriminación*, como hacen algunos códigos deontológicos, es necesario dar su sentido moderno al principio de igualdad, aspecto en el que tiene gran relevancia la actitud de los profesionales y los *Medios*. De un lado, mediante una disposición relativa a la lucha contra las *discriminaciones indirectas* y a los deberes éticos de los periodistas y los medios de comunicación para evitarlas. De otro lado, mediante la inserción de otra disposición relativa a la necesidad de adoptar *medidas de acción positiva* por los profesionales y los *Medios*, como hemos visto. En el código, desde una perspectiva práctica, deberían incluirse las con-

ductas precisas exigibles o recomendables, que hemos examinado en el estudio, para llevar a la práctica el principio de igualdad.

Por otro lado, *estos comportamientos éticos no sólo dependen de los periodistas, sino también, en muchas ocasiones, de las empresas informativas y, en general, de ambos*. En esta línea es recomendable que se impulse el *acceso y la participación de las minorías en los medios*, algo que depende tanto de los profesionales de la información como de que las empresas informativas articulen las medidas que lo hagan posible.

Del mismo modo, las empresas informativas pueden tener un papel importante en la *formación especializada de sus profesionales en materia de derechos humanos y de las minorías*, así como en la conducta por la que deben regirse en estas materias. Es importante que organicen cursos de formación específica sobre estas cuestiones, en los que deberían participar miembros de ONG especializadas, de las minorías, así como otros especialistas (profesores, profesionales de la información etc.).

c) Sobre el control de cumplimiento del código: la necesidad de crear un órgano de control externo a los Medios

Controlar el respeto de las obligaciones jurídicas y éticas depende, en primer lugar, del profesional de la información. Pero el autocontrol no es suficiente, *siendo necesario un control externo que vigile y supervise el progreso y el cumplimiento de las obligaciones*. En esa línea es conveniente que los propios medios tengan un defensor del oyente, o de las minorías, o del lector etc., que siga la línea de conducta general y atienda a las posibles quejas. Pero hay que ser conscientes de que esto es insuficiente, y que en muchas ocasiones es ineficaz, al ser el crítico un asalariado del medio supervisado.

Sólo los *controles externos* son una garantía de independencia y objetividad. Un *órgano de control externo* puede tener naturaleza jurídica pública o privada. Aun cuando podría resultar conveniente que lo creasen los poderes públicos, lo cierto es que los *Medios* españoles (y/o europeos) más relevantes pueden crear un órgano que supervise el cumplimiento de los estándares ético-jurídicos. Sin este mecanismo, el código puede ser ilustrativo, pero sin duda sería poco eficaz, y correría el riesgo de pasar a formar parte de la ingente cantidad de instrumentos no obligatorios e ineficaces que adornan las estanterías, sirviendo de base a la autocomplacencia.

La naturaleza de dicho órgano puede ser variada (fundación, asociación, empresa...) y, en todo caso, debería estar compuesto no sólo por representantes

de los *Medios* y de los profesionales, sino fundamentalmente por representantes de las minorías y por personas competentes en la materia, independientes y sin intereses en las empresas informativas. Las formas de control pueden ser variadas, y no sólo deberían consistir en quejas, dado que es conveniente realizar una supervisión estadística sobre las discriminaciones indirectas (mediante estudios sobre la visibilidad y el adecuado tratamiento de las minorías). Las empresas deberían aceptar las sanciones, entre las que la principal probablemente sea la de dar difusión a los informes negativos sobre sus comportamientos (así como los de sus profesionales). Del mismo modo, deberían tener en cuenta seriamente las sugerencias de programación, participación y acceso de las minorías en los medios.

CARLOS R. FERNÁNDEZ LIESA
Septiembre de 2000